

46ª REUNION — Continuación de la 6ª SESION EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) —
MARZO 28 DE 1985

Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese,
Oscar Luján Fappiano y Tomás Walter González Cabañas

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ABBIATE, Alejandro Abel Alberto
ABDALA, Luis Oscar
ABDALA, Oscar Tupio
ACEVEDO de BIANCHI, Carmen Beatriz
AGUILAR, Ramón Rosa
ALAGIA, Ricardo Alberto
ALBARRACIN, Ignacio Arturo
ALIAS, Manuel
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALTAMIRANO, Amado Héctor Heriberto
ALVAREZ, Adrián Carlos
ALVAREZ, Roberto Pedro
ALLEGRONE de FONTE, Norma
ARABOLAZA, Marcelo Miguel
ARAOZ, Julio César
ARRECHEA, Ramón Rosaura
ARSON, Héctor Roberto
ASENSIO, Luis Asterio
AUSTERLITZ, Federico
AZCONA, Vicente Manuel
BARBARO, Julio
BARBEITO, Juan Carlos
BELARRINAGA, Juan Bautista
BERNASCONI, Tulio Marón
BERBI, Ricardo Alejandro
BIANCHI, Carlos Humberto
BIELICKI, José
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, José Celestino
BODO, Rodolfo Luis
BONINO, Alberto Ceclio
BONOMI, Nora Susana
BOTTA, Felipe Esteban
BRITO LIMA, Alberto
BRITOS, Oscar Felipe
BRIZ DE SANCHEZ, Onofre
BRIZUELA, Juan Arnaldo
BULACIO, Julio Segundo
CABELLO, Luis Victorino
CACERES, Luis Alberto
CAFERRI, Oscar Néstor
CAMPS, Alberto Germán
CANICOBA, Ramón Héctor Pedro
CANTOE, Rubén
CAPUANO, Pedro José

CARDOZO, Ignacio Luis Rubén
CARMONA, Jorge
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASALE, Luis Santos
CASSIA, Antonio
CASTIELLA, Juan Carlos
CASTILLO, Miguel Angel
CAVALLARI, Juan José
CAVALLARO, Antonio Gino
CONTE, Augusto
COPELLO, Norberto Luis
CORNAGLIA, Ricardo Jesús
CORPACCI, Sebastián Alejandro
CORTESE, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
COSTARELLI, José
CHEHIN, Jorge Victor
DALMAU, Héctor Horacio
DAUD, Ricardo
DEBALLI, Héctor Gino
DE NICHILLO, Cayetano
DÍAZ de AGUERO, Dolores
DI CIO, Héctor
DIMASI, Julio Leonardo
DOMINGUEZ FERREYRA, Dardo N.
DONAIBES, Fernando
DOUGLAS RINCÓN, Guillermo F.
DOVENA, Miguel Dante
DRUETTA, Raúl Augusto
DÜSSOL, Ramón Adolfo
ELIZALDE, Juan Francisco Carmelo
FAPPIANO, Oscar Luján
FEDERIK, Carlos Alberto
FERRÉ, Carlos Eduardo
FIGUEROA de TOLOZA, Emma
FINO, Torcuato Enrique
FLORES, Anibal Eulogio
FURQUE, José Alberto
GARCIA, Antonio Matías
GARCIA, Carlos Euclides
GARCIA, Roberto Juan
GHIANO, Jorge Osvaldo
GIMÉNEZ, Jacinto
GINZO, Julio José Oscar
GÓMEZ MIRANDA, María Florentina
GONZALEZ, Arnaldo

GONZALEZ, Héctor Eduardo
GONZALEZ, Jesús Gerónimo
GONZALEZ, Raúl Héctor
GONZALEZ CABAÑAS, Tomás Walther
GONZALEZ PASTOR, Carlos María
GOROSTEGUI, José Ignacio
GOTI, Erasmo Alfredo
GRIMAU, Arturo Anibal
GUATTI, Emilio Roberto
GUELAR, Diego Ramiro
GURIOLI, Mario Alberto
GUTIERREZ, Reynaldo Pastor
GUZMAN, María Cristina
HERRERA, Bernardo Eligio
HORTA, Jorge Luis
HUARTE, Horacio Hugo
IBÁÑEZ, Diego Sebastián
IGLESIAS VILLAR, Teófilo
INGARAMO, Emilio Felipe
JALILE, José Félix
JAROSLAVSKY, César
JIMÉNEZ, Francisco Javier
KHOURY, Miguel Angel
LANGAN, Roberto José
LAZCOZ, Arnaldo Efraín
LEALE, Zeimar Rubén
LENCINA, Luis Ascensión
LEPORI, Pedro Antonio
LESCANO, David
LESTANI, Carlos
LIPTAK, Teodoro
LOPEZ, Santiago Marcelino
LUGONES, Horacio Emerico
MANNY, José Juan
MANZANO, José Luis
MANZUR, Alejandro
MARCHESINI, Víctor Carlos
MARTÍN, Belarmino Pedro
MARTÍNEZ, Valentín del Valle
MARTÍNEZ MARQUEZ, Miguel José
MARTÍNEZ MARTINOLI, Fausta G.
MASINI, César Francisco
MATOS, Salvador León
MAYA, Héctor María
MEDINA, Alberto Fernando
MEDINA, Miguel Heraldo

MELON, Alberto Santos
 MIGLIOZZI, Julio Alberto
 MILANO, Raúl Mario
 MINICHILLO, Juan José
 MIRANDA, Julio Antonio
 MONSERRAT, Miguel Pedro
 MONTERO, Carlos L.
 MORAGUES, Miguel José
 MOREAU, Leopoldo Raúl
 NADAL, Marx José
 NEGRI, Arturo Jesús
 NIEVA, Próspero
 ORGAMBIDE, Luis Oscar
 PAPAGNO, Rogelio
 PATINO, Artemio Agustín
 PECHE, Abdel Carim Mahomed
 PEDRINI, Adam
 PELAEZ, Anselmo Vicente
 PEPE, Lorenzo
 PEREYRA, Pedro Armando
 PEREZ, René
 PÉREZ VIDAL, Alfredo
 PERL, Néstor
 PINTOS, Carlos María Jesús
 PIUCILL, Hugo Diógenes
 PLANELL, Mariano Juan
 PONCE, Rodolfo Antonio
 PRADO, Leonardo Ramón
 PRONE, Alberto José
 PUGLIESE, Juan Carlos
 PUPILLO, Liberto
 PURITA, Domingo
 RABANAQUE, Raúl Octavio
 RADONJIC, Juan
 RAMOS, Daniel Omar
 RAPACINI, Rubén Abel
 RATKOVIC, Milivoj
 RAUBER, Cleo
 REALI, Raúl
 REGGERA, Esperanza
 RESTOVICH, Francisco
 REYNOSO, Adolfo
 RIGATUSO, Tránsito
 RIQUEZ, Félix

RIUTORT de FLORES, Olga Elena
 ROBERTO, Mario
 ROBSON, Anthony
 RODRIGUEZ, Antonio Abel
 RODRIGUEZ, Jesús
 RODRIGUEZ, Manuel Alberto
 RODRIGUEZ, Pedro Salvador
 RODRIGUEZ ARTUSSI, José Luis
 ROMANO, Domingo Alberto
 ROMERO, Antonio Elías
 ROMERO, Francisco Telmo
 RUBEO, Luis
 RUIZ, Angel Horacio
 SABADINI, José Luis
 SALDUNA, Bernardo Ignacio Ramón
 SAMMARTINO, Roberto Edmundo
 SANCHEZ TORANZO, Nicolo
 SARQUIS, Guillermo Carlos
 SARUBI, Pedro Alberto
 SCELZI, Carlos María
 SELLA, Orlando Enrique
 SERRALTA, Miguel Jorge
 SILVA, Roberto Pascual
 SILVERO, Lisandro Antonio
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
 SOCCHI, Hugo Alberto
 SOLARI BALLESTEROS, Alejandro
 SPINA, Carlos Guido
 SRUR, Miguel Antonio
 STAVALE, Juan Carlos
 STOLKINER, Jorge
 STORANI, Federico Teobaldo M.
 STUBRIN, Adolfo Luis
 STUBRIN, Marcelo
 SUAREZ, Lionel Armando
 TAIBO, Nicolás
 TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
 TERRILE, Ricardo Alejandro
 TORRES, Carlos Martín
 TORRESAGASTI, Adolfo
 TOSI, Santiago
 URRIZA, Luis María
 VANOSSI, Jorge Reinaldo

VIDAL, Carlos Alfredo
 VISTALLI, Francisco José
 VON NIEDERHAUSEN, Norberto B.
 YAMAGUCHI, Jorge Roberto
 ZAVALLEY, Jorge Hernán
 ZINGALE, Felipe

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

BAGLINI, Raúl Eduardo
 BECERRA, Carlos Armando
 BORDON GONZALEZ, José Octavio
 CAMISAR, Osvaldo
 MATZKIN, Jorge Rubén
 MOSSO, Alfredo Miguel
 ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, CON LICENCIA:

BASUALDO, Héctor Alfredo¹
 CARRANZA, Florencia¹
 DE LA VEGA de MALVASIO, Lily M. D.
 IMBELLONI, Norberto¹
 LANDÍN, José Miguel¹
 PALEARI, Antonio¹
 RUIZ, Osvaldo Cándido¹
 UNAMUNO, Miguel

AUSENTES, CON AVISO:

COLOMBO, Ricardo Miguel
 CONNOLLY, Alfredo Jorge
 DÍAZ LECAM, Juan Antonio
 FALCIONI de BRAVO, Ivelise Iida
 MAGLIETTI, Alberto Pimón
 MASTOLORENZO, Vicente
 MOTHE, Félix Justiniano

AUSENTES, SIN AVISO:

BALESTRA, Ricardo Ramón
 CORTINA, Julio

¹ Solicitud pendiente de aprobación de la Honorable Cámara.

SUMARIO

- 1.—Continúa la consideración en particular del proyecto de ley sobre modificación del instituto de la patria potestad y del régimen de la filiación, y equiparación entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. (Pág. 7558.)
- 2.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Jaroslavsky con motivo de haberse ausentado del recinto señores diputados sin permiso de la Presidencia, desistimiento del autor de la moción y aclaración formulada por el señor diputado Torresagasti. (Pág. 7565.)
- 3.—Continúa la consideración en particular del proyecto de ley al que se refiere el número 1 de este sumario. (Pág. 7566.)
- 4.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Stubrin (A. L.) por no haber podido disponer de elementos con que cuenta la Honorable Cámara para asistir a un acto oficial. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 7581.)
- 5.—Continúa la consideración en particular del proyecto de ley al que se refiere el número 1 de este sumario. Se sanciona. (Pág. 7582.)

6.—Apéndice:

Sanción de la Honorable Cámara. (Pág. 7605.)

—En Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de marzo de 1985, a la hora 16 y 55:

1

REGIMEN DE LA PATRIA POTESTAD, FILIACION Y EFECTOS DE LA FILIACION MATRIMONIAL Y EXTRAMATRIMONIAL

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa la sesión.

Corresponde proseguir la consideración en particular del dictamen de la mayoría de la Comisión de Legislación General —que ya fuera aprobado en general— en los proyectos de ley sobre modificación del Código Civil y de sus leyes complementarias en lo referente al instituto de la patria potestad, al régimen de la fi-

liación y a los efectos de la filiación matrimonial y extramatrimonial.¹

Sr. Terrile. — Solicito la palabra para formular una moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Señor presidente: formulo moción de reconsideración de los artículos que aver hemos aprobado en sustitución de los artículos 243, 244 y 246 del Código Civil. Esta moción se funda en conclusiones a las que hemos arribado durante la mañana de hoy en una reunión que un importante grupo de diputados mantuvimos en la Comisión de Legislación General.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración la moción formulada por el señor diputado Terrile.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Sobrino Aranda. — Señor presidente: en nombre del bloque peronista, solicito al señor miembro informante tenga la amabilidad de exponer los motivos en que funda la moción de reconsideración que ha formulado, para poder votar en consecuencia.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Señor presidente: en el día de ayer hemos introducido algunas modificaciones a los textos propuestos en sustitución de los artículos 243, 244 y 246 del Código Civil que figuran en el Orden del Día N° 719.

Luego del valioso y constructivo intercambio de ideas que hemos mantenido en la mañana de hoy, en una reunión de la Comisión de Legislación General, hemos llegado a la conclusión de que, para que guarde coherencia la integridad del proyecto, es conveniente mantener la redacción original de los artículos a que he aludido tal como figuran en el Orden del Día N° 719, con las únicas excepciones siguientes: en el artículo 243, donde dice "No se presume la paternidad del marido del hijo...", aceptamos que se exprese: "No se presume la paternidad del marido con respecto al hijo..."; en el mismo artículo, *in fine*, incorporaríamos la conjunción "o" después de la palabra "divorcio" —de modo que diría "demanda de divorcio o de nulidad del matrimonio, salvo prueba en

contrario"—; y en el inciso 2° del artículo 246 agregaríamos "en juicio de filiación" después de "Por sentencia firme".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Queda satisfecha su inquietud, señor diputado?

Sr. Sobrino Aranda. — Con las aclaraciones que se han hecho, sí, señor presidente.

Sr. Ferré. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferré. — No recuerdo ni tengo a la vista las modificaciones introducidas ayer. ¿Se puede dar lectura de ellas por Secretaría para ver cuál es el cambio?

Sr. Presidente (Pugliese). — Por Secretaría se dará lectura de lo solicitado por el señor diputado.

Sr. Secretario (Bravo). — La redacción aprobada en la reunión de ayer en sustitución del artículo 243 del Código Civil dice así: "Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución, anulación, divorcio o a la separación de hecho de los esposos. No se presume la paternidad del marido con respecto al hijo que naciere después de los trescientos días de la disolución del matrimonio, anulación, divorcio o separación de hecho de los esposos, salvo prueba en contrario".

Sr. Presidente (Pugliese). — El texto que obra en poder de Secretaría no es claro. ¿Podría indicar el señor miembro informante de la comisión en forma clara la redacción que fue aprobada en sustitución del artículo 244 del Código Civil en el día de ayer?

Sr. Terrile. — La única modificación que se introdujo en la redacción propuesta originariamente —además de salvarse un error de impresión— consistió en la sustitución del término "dentro" por el de "después" en la frase que sigue inmediatamente al punto y coma y que en el dictamen expresa "y que el nacido dentro de los trescientos días...". Queremos conservar la misma expresión que figura en el texto del dictamen de mayoría; es decir, proponemos que se mantenga "y que el nacido dentro de los trescientos días...".

Sr. Presidente (Pugliese). — Por Secretaría se dará lectura de la redacción aprobada en la reunión de ayer en sustitución del artículo 246 del Código Civil.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así: "La filiación matrimonial queda determinada legalmente y se aprueba: 1°) Por la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba del matri-

¹ Véase el texto de los dictámenes de mayoría y minoría producidos por la Comisión de Legislación General en el Diario de Sesiones del 21 de marzo de 1985, página 7430.

nimiento de los padres de conformidad con las disposiciones legales respectivas. 2º) Por sentencia firme en juicio de filiación o por los supuestos contemplados en los incisos 2º y 3º del artículo 248.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Proponemos que se suprima la última parte del inciso 2º, que dice: "o por los supuestos contemplados en los incisos 2º y 3º del artículo 248".

Sr. Fappiano. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Presto mi conformidad a las modificaciones que se proponen y, en consecuencia, al pedido de reconsideración solicitado por el señor diputado Terrile.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por Santa Fe.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde votar las redacciones propuestas en sustitución de los artículos 243, 244 y 246, conforme a lo solicitado por el señor miembro informante de la comisión.

Se va a votar en primer término el texto propuesto en sustitución del artículo 243 del Código Civil, que es el que aparece en el dictamen de mayoría, con el agregado de la conjunción "o" después de los términos "demanda de divorcio" en la parte final del artículo, y la sustitución de los términos "paternidad del marido del hijo que naciere" por "paternidad del marido con respecto al hijo que naciere".

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el texto propuesto en sustitución del artículo 244 del Código Civil tal como aparece en el dictamen de mayoría.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el texto propuesto en sustitución del artículo 246 del Código Civil tal como figura en el dictamen de mayoría, con el agregado en el inciso 2º de los términos "en juicio de filiación" después de "Por sentencia firme".

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en el artículo 2º del proyecto en sustitución del artículo 249 del Código Civil.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — El primer párrafo del artículo 249 dice: "El reconocimiento efectuado es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo". Propongo el siguiente agregado a continuación del término "irrevocable": "salvo que el reconocimiento hubiere conferido posesión de estado al hijo reconocido durante su vida".

Es decir, lo que se desea es que en este caso también se contemple de alguna manera a quien en realidad le ha dado esa posesión de estado, lo cual está expresado muy claramente en la nota al artículo 305 del Código y sería concordante con lo establecido en el artículo 256.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Señor presidente: como decía antes, en el día de hoy nos hemos reunido un conjunto de diputados y debatimos extensamente el tema del artículo 249. La señora diputada preopinante, a pesar de haber sido invitada a la reunión, no participó.

Me remito a los argumentos, fundamentos y colaboración prestados en esa oportunidad por el doctor Zannoni y, fundamentalmente, a los aportes que brindaron todos los diputados en el día de hoy. Por lo tanto, la Comisión de Legislación General mantiene el texto propuesto del artículo 249.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Accediendo a la invitación del señor secretario de la Comisión de Legislación General, esta mañana tuve el honor de poder asistir a una de sus reuniones de trabajo.

Con respecto al artículo 249, el doctor Zannoni —asesor que nos ilustraba sobre los fundamentos de la norma— admitió que para lograr una mayor claridad se debía insertar la expresión "por quien lo hizo", es decir que quedaría: "... el reconocimiento es irrevocable por quien lo hizo".

No vamos a entrar ahora en disquisiciones sibilinas sobre la diferencia que hay entre revocación, impugnación, anulación o lo que fuere. El que no puede impugnar no puede revocar lo que ha hecho. Esto obedece al principio jurídico por el cual el autor voluntario de un acto no puede revocarlo, salvo que existiera dolo, fraude o circunstancias anormales que lo hubieran viciado. Se consideró que esta aclaración era obvia e innecesaria.

No voy a insistir sobre el particular porque esta mañana estuvimos de acuerdo en la inclusión de esas palabras.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Por supuesto. El reconocimiento efectuado es irrevocable; para nosotros es un título de estado que lleva implícito precisamente el hecho de quien lo hace. Por lo tanto, nos parece superfluo incluirlo en la ley de fondo, e insisto en que mantenemos el dictamen con respecto al artículo 249 tal como figura en el Orden del Día N° 719.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto propuesto en sustitución del artículo 249 del Código Civil tal como figura en el Orden del Día N° 719.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 250 del Código Civil.

Si no hay observaciones, se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 251 del Código Civil.

Si no hay observaciones, se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 252 del Código Civil.

Si no hay observaciones, se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 253 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Señor presidente: aceptando una sugerencia del señor diputado Stolkiner hecha en la reunión que ya hemos citado, la comisión propone agregar la siguiente oración al final del artículo 253: "La negativa a someterse a pruebas biológicas será una presunción *juris tantum*".

Además, debe salvarse un error material que se ha deslizado al imprimirse el dictamen, ya que donde dice "de oficio a petición de parte" debe decir "de oficio o a petición de parte".

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — En relación con la propuesta que expuso el señor miembro informante, sugeriría que, por razones de buena técnica legislativa y atendiendo a una correcta redacción en nuestro idioma, se agregase al final del artículo 253 la siguiente oración: "La negativa a someterse a pruebas biológicas será una presunción que admite prueba en contrario". Como se sabe, las presunciones *juris tantum* son las que admiten prueba en contrario, y el Código Civil en todo su articulado habla de presunciones que admiten prueba en contrario cuando quiere referirse a las *juris tantum*; y de presunciones que no admiten prueba en contrario cuando desea aludir a las *juris et de jure*. Esta es la terminología que adopta nuestro Código.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión la sugerencia de la señora diputada por Jujuy?

Sr. Terrile. — La comisión acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Conte. — Señor presidente: agradezco a la comisión la oportunidad que nos brindó esta mañana a quienes teníamos deseos de efectuar observaciones, así como la deferencia con que se me atendió, la que me permitió aproximar una idea. Por consiguiente, tengo que pedir excusas por no llevar a esa reunión la reflexión que ahora he de realizar. Desgraciadamente no siempre los legisladores trabajamos a tiempo y ordenadamente; es mi caso.

La observación que formulo tiene, a mi criterio, una enorme significación, no sólo jurídica, sino política y ética.

El pedido que he recibido en el día de hoy tiende hacia un sentido contrario al que aquí se ha expresado en cuanto al valor que jurídicamente se asignaría no sólo al impedimento, sino a la obstaculización de la prueba hematológica.

Hoy en día el avance tecnológico de la ciencia médica se refleja en casi todos los países, incluso en el nuestro, y así el Hospital Durand, ubicado en la Capital Federal, posee un equipo de hemoterapia de primer nivel, equiparable —como tantas cosas nuestras que no valoramos— al más avanzado de cualquier país desarrollado.

La prueba hematológica se ha convertido de modo esencial en un instrumento que acredita la filiación con altísimos porcentajes de seguridad. Por consiguiente, darle otro sentido a esta prueba no significa más que incorporar a nuestra legislación los avances que registra la ciencia médica en materia de investigación biológica.

Dije además, señor presidente, que el país tiene una enorme deuda ética. Como manifestó el presidente Alfonsín, no se les puede devolver la vida a quienes fueron vilmente asesinados; pero sí se puede rescatar a quienes continúan secuestrados.

La experiencia que resulta de la búsqueda de niños cuyas abuelas los reclaman desesperadamente, indica que en ocasiones esos pequeños están en manos de parejas que le han brindado la debida atención, cualquiera sea el medio en que se desenvuelvan, lográndose acuerdos razonables en virtud de los cuales permanecen con esas parejas y se establecen regímenes de visita; en fin, un reordenamiento que permite a esas abuelas satisfacer la legítima aspiración de mantener una relación estable con sus nietos sin alterar sus vidas. Pero lamentablemente hay otros casos de niños que están en manos de quienes actuaron como represores. Precisamente tuve que pelear con los jueces el caso de la menor Paula Logares. No quiero extenderme en particular sobre él, pero brevemente quiero relatar lo que ocurrió en la Cámara Federal. La pequeña entró al juzgado de la mano de los padres represores y luego de nueve horas maravillosas, en donde intervinieron psicólogos, cuando el juez Dalesio le dijo "tengo que decirte la verdad, Paulita, éstos no son tus padres y ésta es tu abuela", la niña salió de la mano de su abuela.

¿Qué puso en evidencia este hecho? Discuti al respecto con mi esposa, que intervino en el caso en su carácter de psicóloga, porque yo también tenía mis dudas. Es decir, ¿cómo arrancar a un niño de los brazos de quienes lo han tenido durante seis o siete años? Sin embargo, esa experiencia nos demostró que no sólo era posible hacerlo, sino indispensable, porque el drama que se cierne sobre esos niños es tremendo si se tiene en cuenta que algún día les podrían recriminar en la calle o en el colegio que están en manos de quienes asesinaron a sus verdaderos padres. Entonces, ¿qué ocurriría en el corazón de ese niño? Lo estamos exponiendo a un shock psicológico cuyos efectos son insondables.

Si ésta es la fuerza de la prueba hematológica, si queda en claro que la negativa a someterse a esta prueba no implica otra cosa que negarse a aquello que la ciencia contemporánea nos señala como el instrumento por excelencia para determinar la filiación, y si con este gesto estamos efectuando el máximo esfuerzo de este Parlamento para satisfacer esa inmensa deuda ética, ¿cómo no encontrar las razones para modificar ese texto?

Propongo que en el artículo 253 se sustituya el término "podrán" por "deberán", y que a continuación se diga: "Obstaculizar o impedir la realización de la prueba biológica ordenada por el juez constituye presunción en contra de quien así procediere".

Sin duda los señores diputados Terrile y Gómez Miranda, al igual que los demás integrantes de la Comisión de Legislación General, saben que no estoy planteando esto porque sí y, por la dramática profundidad del problema, mi propuesta no es incoherente con una concepción científica contemporánea.

Deposito toda mi esperanza en la comisión y aguardo que no vacile en aceptar la propuesta que he formulado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — En el artículo 253 hemos introducido las pruebas biológicas según una filosofía que —como ha sido bien explicado en general— importa abandonar el criterio restringido y cerrado del Código Civil a fin de adoptar uno más amplio: el de las presunciones que admiten prueba en contrario.

En tal sentido interpretamos que lo que bien plantea el señor diputado Conte se encuentra perfectamente contemplado en la redacción del nuevo artículo 253. Allí se rescatan la actividad judicial y el buen criterio del juez, que el propio señor diputado por la Capital se ha encargado de reivindicar en este recinto hace escasos momentos.

Según la norma proyectada, le damos al juez un instrumento para que, mediante una interpretación adecuada, pueda canalizar las situaciones que se den.

Pero nos negamos a que la disposición sea compulsiva, porque ello evidentemente importaría violar los preceptos contenidos en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional.

Insisto en mi opinión de que lo que anima al señor diputado Conte se encuentra adecuadamente contenido en el artículo 253 del despacho de la mayoría.

Sr. Conte. — Insisto en lo que he propuesto, pues de ninguna manera queda satisfecha mi inquietud. No es lo mismo el término "podrán"...

Sr. Presidente (Pugliese). — Señor diputado Conte: la comisión ya ha respondido a su proposición.

Sr. Conte. — Entonces, señor presidente, quiero que quede constancia de que insisto en ella.

Sr. Presidente (Pugliese). — Quedará constancia, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — Deseo apoyar la opinión del señor miembro informante y a la vez brindarle tranquilidad al señor diputado Conte.

La medida procesal puede ser solicitada por las partes, tal como se ha expresado. Cada vez que la parte haya pedido la prueba biológica y ésta no se cumpla, la presunción operará conforme lo ha planteado el propio señor diputado Conte. A los efectos probatorios esta circunstancia habrá de jugar con toda validez.

La posibilidad alternativa en el sentido de que el juez dicte de oficio la medida habrá de darse únicamente en los casos en que las partes no la hayan pedido.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Lo que recién recordara el señor Terrile —la incorporación del grado presuncional por la negativa a someterse a la prueba biológica— debe incidir en razonamiento adverso a la proposición del señor diputado Conte.

Comparto, desde el punto de vista humano, desde mi sensibilidad de ciudadano argentino, las consideraciones expuestas por el señor diputado Conte, pero como hombre de derecho no puedo más que ratificar la posición del diputado Terrile.

En nuestro régimen republicano y de acuerdo con las garantías contenidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, la inviolabilidad de la defensa en juicio es incuestionable. No podemos dudar, entonces, que la persona puede negarse a ser sometida a la prueba biológica. Un caso análogo, de jurisprudencia múltiple, es el del contraventor conductor de un automóvil que posee la facultad, declarada y reconocida judicialmente, de negarse a ser sometido a la prueba del dosaje etílico luego de cometido el hecho. El carácter presuncional que emerge de esto, y al que ha hecho referencia el señor diputado Cornaglia, no puede ser más que eso mismo y podrá ser desvirtuado por el interesado con la multiplicidad de pruebas supletorias.

Frente a las garantías constitucionales de la defensa en juicio, no podemos entonces aceptar más que lo que surge del dictamen de la comisión.

Comprendo la inquietud humana del señor diputado Conte, pero en ortodoxia procesal penal y de acuerdo con nuestro derecho de fondo, la Constitución Nacional y los principios republicanos de organización del Estado, no podemos en forma alguna ir más allá del artículo que ha propuesto la comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Conte. — Me alegro de poder decirles que he cometido un error del que he sido advertido por mi asesor. En realidad el tema de la presunción es idéntico en ambas redacciones.

Pero como soy un poco testarudo, voy a solicitar que pasemos del tono condicional al imperativo sustituyendo la frase "las que podrán ser decretadas" por "las que serán decretadas". Esto es importante, y esta prueba biológica no es atentatoria de ningún elemento del pudor. Simplemente se trata de la extracción de muestras de sangre o células. No hay nada que afecte cuestiones de intimidad.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Terrile. — La comisión va a mantener su despacho, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Por Secretaría se dará lectura del artículo 253 con las correcciones efectuadas por la comisión.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así: "En las acciones de filiación se admitirán toda clase de pruebas, incluso las biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte. La negativa a someterse a pruebas biológicas será una presunción que admite prueba en contrario".

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 254 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Es simplemente para corregir un error que se ha deslizado al imprimirse el dictamen. En el tercer párrafo del artículo 254, donde dice "si el hijo hubiere muerto", debe decir "si el hijo hubiese muerto".

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el texto propuesto en sustitución del artículo 254 del Código Civil con la corrección indicada por el señor miembro informante de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 255 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Señor presidente: he hecho anteriormente una observación al contenido de este artículo en el sentido de que ese trámite iniciado por el Registro Civil ante el Ministerio

Público de Menores sea autorizado únicamente en aquellos casos en que la madre del menor permanezca soltera y no en los casos en que se trate de una mujer casada. Baso mi observación en el grave problema que puede significar para la familia el que a una mujer casada se la obligue a que declare quién es el padre de aquel hijo que tuvo en su juventud, ya que entiendo que se trata de una circunstancia en que el bienestar de la familia está por encima de la situación del menor, sobre todo teniendo en cuenta que ese menor tiene el derecho imprescriptible, que puede ejercer el día de mañana, de accionar a fin de averiguar su paternidad.

Además, creo que este artículo juega en contra del principio general que establece nuestro Código Civil en su artículo 326, que dice que la indagación de la maternidad no tendrá lugar cuando sea con el objeto de atribuir el hijo a una mujer casada. Quiere decir que el principio general del Código Civil es resguardar el honor de la mujer casada y la seguridad del matrimonio y de la familia. Pero si aceptamos el artículo 255 del proyecto en la forma en que está redactado, se puede dar a publicidad un hecho que a lo mejor, dado el tiempo transcurrido, el mismo marido había aceptado y perdonado.

Todos nosotros, señor presidente, tenemos un pequeño Otelo en nuestro interior. Es posible imaginar el caso de un marido que en un principio aceptó aquella falta de su mujer, aquel desliz, cuya explicación pudo haber estado en el hecho de que se trató de un amor de la juventud inspirado por un muchacho a quien la mujer nunca más volvió a ver y que no existe más en su vida. Es posible imaginar también la repercusión que tendría en esa familia el hecho de que la averiguación de la paternidad del menor revele que ese supuesto muchacho que desapareció de la vida de la madre es un vecino. (Risas.)

El Otelo que tenemos dentro puede surgir en ese momento para desbaratar la tranquilidad y la paz familiar. Por eso creo que correspondería seguir la orientación que fija el Código Civil, en defensa del sagrado instituto de la familia, tan atacado en la avanzada social que estamos viviendo.

En definitiva, creo que este artículo debe contener expresamente la indicación de que ese trámite se realizará sólo en el caso de que la madre continúe soltera. Debemos comprender que cuando se trata de un problema ajeno, solemos restarle importancia, pero cuando se trata de un problema propio lo sentimos en todo su impacto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante por la mayoría.

Sr. Terrile. — Señor presidente: el artículo 255 fue debatido en el Senado y también en el seno de la Comisión de Legislación General. Dicho artículo gira en torno a un derecho fundamental del niño y su objetivo es plasmar ese derecho fundamental de que todo niño tenga un padre y una madre. En tal sentido, y sobre la base filosófica que anima este proyecto, en el artículo 255 hemos planteado dos instancias que tienen que ser advertidas correctamente por los legisladores.

En todos los casos en que un menor aparezca inscrito como hijo de padre desconocido el Registro Civil tiene que hacer la comunicación al Ministerio Público de Menores, que sí tiene la obligación de procurar la paternidad en la instancia administrativa. Si la mujer no consiente la actuación de ese Ministerio porque no acude a la citación, porque no aparece el padre o por cualquier otra causa, el organismo igual habría cumplido con su finalidad: procuró la paternidad y no la consiguió.

La instancia judicial aparece *a posteriori*, pero sólo con el expreso consentimiento de la mujer. Es decir que el Ministerio Público de Menores no puede actuar de oficio. Precisamente, ésta es la manera práctica que introducimos en el artículo 255 para terminar de una vez por todas con aquellas circunstancias que quedaban cobijadas en el viejo Código Civil. En consecuencia, tal como se acordó en la Comisión de Legislación General, vamos a seguir sosteniendo el artículo 255 como está redactado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Señor presidente: voy a insistir en mi propuesta porque aquí está en juego la familia en oposición al hijo. Yo voy a votar siempre por la familia, sobre todo teniendo en cuenta que el hijo al ser menor tiene un derecho imprescriptible tanto en vida como después de la muerte de los padres para acreditar su filiación.

Sr. Presidente (Pugliese). — La comisión ya fundó su postura, señor diputado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto propuesto en el artículo 2º del proyecto aprobado en general en sustitución del artículo 257 del Código Civil.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 256 del Código Civil.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: en el caso de la posesión de estado considero que ésta debe ser inequívoca. Sería conveniente que el miembro informante explicase qué entiende por posesión de estado. Hay doctrinarios que dicen que ella consiste en el nombre, la fama y el trato, mientras que otros consideran únicamente al trato.

En ese sentido, es señera la nota de Vélez Sarsfield al artículo 325 del Código Civil. Se trata de un caso muy evidente. Vélez Sarsfield decía en esa nota: "Cuando un hombre ha sostenido y mantenido a la madre, cuando ha sostenido y mantenido al hijo de ella, tratándolo como suyo, cuando lo ha presentado como tal a su familia y a la sociedad, y en calidad de padre ha provisto a su educación, cuando ante cien personas y en diversos actos ha confesado ser padre de él, no puede decirse que no ha reconocido al hijo de una manera tan probada, como si lo hubiera hecho por una confesión judicial. La posesión de estado vale más que el título. El título, la escritura pública, el asiento parroquial, la confesión judicial, son cosas de un momento, un reconocimiento instantáneo; mas la posesión de estado, los hechos que la constituyen, son un reconocimiento continuo, perseverante, de muchos y variados actos, de todos los días, de todos los instantes. La posesión de estado es así, por su naturaleza, una prueba más perentoria que la escritura pública, que los actos auténticos, es la evidencia misma; es la prueba viva y animada; la prueba que se ve, que se toca, que marcha, que habla; la prueba en carne y hueso, como decía una corte francesa. El juez puede, pues, por los hechos que constituyen la posesión de estado, dar una sentencia sobre la paternidad"...

Sr. Presidente (Pugliese). — Permítame la señora diputada que efectúe la siguiente observación: los señores diputados no pueden retirarse del recinto sin permiso de la Presidencia.

Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Decía: "El juez puede, pues, por los hechos que constituyen la posesión de estado, dar una sentencia sobre la paternidad con una conciencia más segura que la que le daría una escritura pública, un asiento bautismal".

Esta nota de Vélez Sarsfield, referida al artículo 325, en realidad se refiere a una posesión de estado muy evidente, muy notoria y diríamos que no admite discusión. Pero, posteriormente, ya en la propia doctrina se está discutiendo si

son necesarios esos tres elementos —nombre, trato y fama— o simplemente el trato.

Quisiera que el miembro informante de la mayoría o algún miembro de la comisión profundice aún más este tema, ya que la posesión de estado, como se ha dicho, vale título y equivale a un reconocimiento.

2

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Jaroslavsky. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Pugliese). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Señor presidente: entiendo que el privilegio de este cuerpo ha sido vulnerado ante la ostensible desobediencia —aunque el término no sea el preciso— de los señores diputados que a pesar de la advertencia de la Presidencia se han retirado del recinto. Considero que ésta es una falta de consideración hacia la Cámara, y por tal motivo planteo esta cuestión de privilegio.

Sra. Guzmán. — Señor diputado: le solicito que retire la cuestión de privilegio, habida cuenta del tema en consideración y de su importancia, porque de lo contrario no vamos a poder aprobar hoy el régimen de patria potestad compartida.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia advierte a la señora diputada que debe solicitar la palabra antes de hacer uso de ella.

Sr. Sobrino Aranda. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Sobrino Aranda. — Señor presidente: el bloque peronista está totalmente de acuerdo con la cuestión planteada por el señor diputado Jaroslavsky. Durante el día de ayer manifestamos nuestra preocupación por este problema e incluso se lo hicimos saber al señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara en ejercicio de la Presidencia, destacando la falta ostensible de quórum en determinado momento de la sesión.

Algunos diarios han publicado en el día de la fecha que ayer hemos votado este proyecto en general sin tener quórum, lo cual no es cierto. De todas maneras, la Presidencia debe tomar los recaudos necesarios para evitar que esto ocurra, aplicando estrictamente el reglamento.

Sr. Presidente (Pugliese). — Así lo ha entendido la Presidencia.

Habiendo retornado al recinto los señores diputados que se retiraron hace un momento, solicito al señor diputado por Entre Ríos que deje sin efecto la cuestión planteada.

Sr. Jaroslavsky. — No tengo inconveniente, señor presidente.

Sr. Torresagasti. — Señor presidente: quisiera saber qué es lo que se está considerando, porque recién he vuelto al recinto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Señor diputado: cuando usted se retiraba del recinto junto con otros legisladores, la Presidencia advirtió que no podían hacerlo porque violentaban el quórum. A pesar de ello, no hicieron caso a tal advertencia.

Sr. Torresagasti. — No lo había escuchado, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Acepto su excusa de que no me haya escuchado.

Sr. Torresagasti. — No, señor presidente; no es ninguna excusa.

Sr. Presidente (Pugliese). — No hagamos de esto una cuestión terminológica; acepto su explicación.

Sr. Torresagasti. — Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Habiendo desistido el señor diputado por Entre Ríos de la cuestión que planteara, no hay nada en discusión.

3

REGIMEN DE LA PATRIA POTESTAD, FILIACION Y EFECTOS DE LA FILIACION MATRIMONIAL Y EXTRAMATRIMONIAL

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa en consideración el texto propuesto en el artículo 2º del proyecto aprobado en general en sustitución del artículo 256 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Señor presidente: lamento profundamente que la señora diputada Guzmán haya participado de la reunión que realizó esta mañana la Comisión de Legislación General cuatro horas después de su iniciación, y cuando por supuesto ya habíamos agotado el tema que ahora trae al recinto.

Sra. Guzmán. — ¿Me permite una interrupción, con la venia de la Presidencia?

Sr. Presidente (Pugliese). — Señor diputado: ¿concede la interrupción solicitada por la señora diputada por Jujuy?

Sr. Terrile. — No, señor presidente.

Debo recordar que de una atenta lectura del Orden del Día N° 719 se desprende que tanto

el artículo 326, que citó el señor diputado García en su intervención, como el artículo 325 y su respectiva nota, son derogados, no forman más parte del Código Civil, de acuerdo con el dictamen que estamos considerando. Todo esto sin perjuicio de que sean materia de interpretación en un análisis de la historia del Código Civil.

En cuanto al tema de la posesión de estado, teniendo en cuenta la utilización de las pruebas biológicas y su relación con el artículo en cuestión, la comisión de Legislación General ha resuelto mantener el texto tal como consta en el dictamen.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: quiero aclarar que no soy miembro de la Comisión de Legislación General, pero lo que considero muy enriquecedor es este intercambio de ideas y estos pedidos de aclaraciones acerca del dictamen que estamos tratando. Por ello no veo los motivos por los que el señor diputado preopinante se molesta, ya que sólo se trata de cumplir con su obligación como miembro informante de la mayoría de la comisión.

Volviendo a la cuestión de fondo y dejando de lado este aspecto formal, el señor diputado ha dicho que se deroga el artículo 325 del Código Civil que, en realidad, ya estaba modificado por la ley 14.367.

Lo que sí me parece importante es la nota explicativa de Vélez Sarsfield porque es muy clara acerca de lo que él entendía por posesión de estado. Como ayer y también hoy se ha hablado de la modificación del viejo Código, quisiera saber qué entiende la Comisión de Legislación General por posesión de estado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Stubrin (M.). — Señor presidente: en realidad, lo que estamos discutiendo es la proposición de la señora diputada Guzmán de agregar la palabra "inequívoca" a la expresión posesión de estado, y nos ha ilustrado a todos dando lectura a la nota de Vélez Sarsfield.

A lo largo de todos los años que van desde 1871 hasta la fecha, la jurisprudencia ha definido qué es la posesión de estado. Agregar la palabra "inequívoca" permitiría suponer que existe una posesión de estado de naturaleza equívoca, lo que es un contrasentido.

En cada caso habrá o no posesión de estado, y por vía de interpretación se resolverá si está o no suficientemente acreditada esa institución. Por lo tanto, con esta argumentación de naturaleza lógico-jurídica voy a respaldar la posición

de la comisión y a desechar el agregado de la palabra "inequívoca", manteniendo el texto del artículo 256 tal cual figura en el Orden del Día Nº 719.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: insisto en que el señor miembro informante me aclare qué entiende por posesión de estado, porque en la doctrina hemos visto que hay corrientes que van desde la necesidad del nombre, trato y fama hasta los que piensan que es suficiente el trato. Quiero saber qué piensa la comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Señor presidente: me veo obligado a reiterar las argumentaciones que se han expresado en la reunión de la Comisión de Legislación General del día de hoy, de la que participaron numerosos diputados que no son miembros de dicha comisión y a la cual también fue invitada en el día de ayer la señora diputada. La reunión a la que aludo fue realizada para aunar un sinnúmero de inquietudes y de observaciones que se plantearon ayer durante la sesión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: no conozco las argumentaciones que se dieron en la reunión a que se refiere el señor diputado. Si el tema lo han debatido en la comisión, y si lo tienen tan claro, no entiendo por qué esta negativa a traer las argumentaciones que dieron en esa reunión, que no están incorporadas al Diario de Sesiones. Realmente no alcanzo a comprender. Quisiera saber cuál es el sentido.

Estamos tratando cuestiones fundamentales de índole filosófica, y luego pasamos a una teoría biológica. ¿Es acaso esto una penalidad a los que no fuimos a esa reunión de comisión? Después de todo, será esto entonces una penalidad para todos aquellos que quieran leer el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Stubrin (M.). — Señor presidente: ayer fui el autor de la moción de cuarto intermedio y de la convocatoria pública en este recinto a esa conversada reunión de las nueve de la mañana. Mi propósito fue el de evitar que esta Cámara funcione en comisión, que era lo que estaba ocurriendo a una determinada altura del debate.

Comprendo perfectamente el derecho de todos los diputados a exigir que se efectúe en el recinto una discusión circunstanciada y profunda de todos los temas. Estoy seguro que conspi-

ra contra una moderna técnica parlamentaria, pero de a ratos llegamos al borde de niveles caprichosos; porque cuando en la noche de ayer entramos en esta discusión pormenorizada, en esta espiral de la que pretendimos salir, llegamos a la conclusión de que era conveniente reexaminar este despacho en comisión con todos aquellos colegas que insistían en reformas. Por eso los invitamos a participar de una pública reunión de comisión para discutir el problema; comisión a la que yo no pertenezco.

Pero quiero referirme a un problema que podríamos llamar de semiología jurídica. Las palabras aluden a conceptos y estos conceptos no tienen necesariamente que ser interpretados para el Diario de Sesiones, porque es facultad de los jueces interpretar la norma. En realidad, posesión de estado es una categoría del derecho civil que aparece reflejada en la nota al artículo 325 que la señora diputada ha tenido la gentileza de leernos. Ya la jurisprudencia —desde 1871 a la fecha— ha ido interpretando de manera casuística este concepto, adecuándolo a las circunstancias de tiempo, espacio y lugar. Por eso, frente a una categoría que está suficientemente elaborada e interpretada, me parece inconveniente decir que esta Cámara adhiere a una corriente doctrinaria determinada. Con decir posesión de estado es suficiente; y mejor aun que decir posesión de estado inequívoca porque, de lo contrario, como dije en mi intervención anterior, aludiríamos a un contrasentido lógico-jurídico.

Por lo tanto, ya los jueces, la realidad jurídica y la evolución de las instituciones familiares desde el punto de vista sociológico determinarán en cada momento qué es y qué no es posesión de estado. Estoy absolutamente convencido de que cualquier abogado, juez o doctrinario del derecho civil que aspire a opinar sobre la posesión de estado lo hará teniendo en la cabecera de su argumentación esa nota al artículo 325 del Código Civil que Dalmacio Vélez Sarsfield escribiera antes de 1871.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stokiner. — Señor presidente: es evidente que resulta extemporáneo el requerimiento de la señora diputada Guzmán a la comisión y a la Cámara.

Hay distintas concepciones doctrinarias sobre los elementos configurativos de la posesión de estado, pero no es necesario que demos aquí definiciones. Sin embargo, para demostrar que quienes estamos de acuerdo con el despacho de la mayoría de la comisión no eludimos la

curiosidad o el requerimiento de la doctora Guzmán, podría decir simplemente que la posesión de estado es el trato que objetivamente y dentro del conglomerado social una persona proporciona a un menor o a otra, con todas las características del trato que habitualmente los padres prodigan a los hijos. Esta, que constituiría una definición empírica, tampoco viene al caso.

Si la doctora Guzmán, doblemente colega —abogada y diputada—, consideraba que en algunas definiciones de lo que es la posesión de estado podía encontrar fundamentos para introducir proposiciones explicativas a ese término dentro del texto propuesto por la comisión, pues debió haber enunciado cuál era su concepción teórica acerca de este instituto del derecho.

Lo cierto es, señor presidente, que nos encontramos en el ámbito de lo jurídico, estamos estableciendo normas, y el artículo propuesto por la comisión dice: "La posesión de estado debidamente acreditada en juicio...". ¿Cuándo se va a tener por debidamente acreditada en juicio la posesión de estado? Cuando un magistrado diga que hubo posesión de estado. El acto jurisdiccional culminante del proceso, que es la sentencia, determina que la posesión de estado así declarada sea indudablemente inequívoca.

Como conclusión tenemos que lo que quiere introducir para mayor abundamiento la doctora Guzmán es absolutamente innecesario.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Nieva. — Pareciera ser que la señora diputada Guzmán no ha litigado. El Código Civil es una ley de fondo; en cada articulado se encuentra la terminología que el legislador emplea y queda en manos de los jueces la interpretación y aplicación del derecho.

Como bien ha dicho el señor diputado Sturbrin, en este momento no podemos sentar bases doctrinarias e inclinarnos por una determinada corriente jurídica para interpretar una norma.

En consecuencia, habiéndose expedido el señor miembro informante, solicito que se someta a votación la redacción propuesta.

Sra. Guzmán. — Me doy por satisfecha con las explicaciones del señor diputado Stolkiner.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Resulta afirmativa

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración la redacción propuesta en sustitución del artículo 257 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferré. — Señor presidente: por el artículo 257 se ha incorporado en la legislación civil argentina la institución del concubinato. Si no recuerdo mal, no había antecedentes en los que se mencionara con el nombre "concubinato" a una determinada relación que no tenía, hasta la fecha, consecuencias jurídicas en materia civil.

Evidentemente, esto trae aparejada la necesidad de definir el concubinato como tal y no me refiero aquí a las formas elípticas que hasta ahora se habían utilizado en la legislación social o en la legislación previsional y de locaciones urbanas, para mencionar situaciones que podían interpretarse como concubinato.

Al asumir este *status* jurídico deberemos saber exactamente a qué situación o relación nos estamos refiriendo, es decir, si es toda relación no matrimonial o de unión del hombre y la mujer donde no haya matrimonio legítimo; si es una unión circunstancial o permanente; si es una unión permanente y pública; si es posible la coexistencia de concubinato y matrimonio; si se trata de personas que no pueden unirse en matrimonio por impedimento de ligamen o que sí pueden hacerlo, pero no optan por el matrimonio civil sino por el concubinato.

Considero necesario que la comisión aclare o explique con exactitud a qué instituto nos estamos refiriendo. Digo esto a fin de que este término pueda ser utilizado con propiedad y no choque con la legislación general. Por otra parte, el articulado de esta ley debe guardar congruencia, porque podría existir colisión entre la situación contemplada en el artículo 257 y la que se plantea con los hijos nacidos dentro del matrimonio, en la medida en que se pueda considerar la coexistencia de matrimonio y concubinato.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — A los efectos de evacuar la consulta del señor diputado Ferré quiero aclarar que cuando en el artículo 257 decimos "El concubinato de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción...", nos estamos refiriendo simplemente a las uniones de hecho.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferré. — Mi pregunta no queda satisfecha con la respuesta de que son uniones de hecho. He presentado varias alternativas. Puede darse la coexistencia de una unión de hecho y un

matrimonio no divorciado o que ni siquiera se ha separado de hecho, lo cual es posible. Puede ocurrir que existan dos hogares al mismo tiempo. Por ello es que debe precisarse el alcance de la norma, porque el concubinato no tiene historia jurídica ni *status* legal, aunque sí tiene historia social.

En este momento estamos otorgando al concubinato *status* jurídico. La novedad de incorporar este elemento hace que tenga ciertas prevenciones. Así, desde el punto de vista jurídico, ¿qué tipo de uniones de hecho estarán alcanzadas por el artículo 257? Y desde el punto de vista teórico-filosófico se me ocurre pensar —como decíamos ayer— que se está equiparando la situación de las uniones de hecho que se puedan dar en la Argentina en la práctica social con la de la familia que hasta ahora llamamos legítima. Evidentemente, esto implica otro tipo de cuestionamiento: es la equiparación del concubinato con el matrimonio civil, o es el primer eslabón para una equiparación entre el concubinato u otras uniones de hecho similares con el matrimonio civil, lo cual implicaría un rumbo totalmente distinto del sustentado hasta ahora en el derecho argentino. Quiero saber si la intención es marcar tal rumbo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — Como un aporte en relación con la inquietud del señor diputado Ferré quisiera aclarar que “concubinato” significa convivir en estado de pareja. Esta caracterización corresponde a todas las relaciones de hecho enmarcadas dentro de esta figura de conductas humanas. En tal sentido, el artículo que analizamos haría referencia al hecho de convivir en estado de pareja a la fecha en que se produce la concepción.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferré. — Quisiera pedir una aclaración. Hablando de uniones de hecho, ¿existiría concubinato cuando hay impedimento de ligamen? Es decir, ¿sólo hay concubinato cuando la pareja tiene la posibilidad jurídica de contraer matrimonio pero no lo hace, o también cuando esa posibilidad no existe?

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Señor presidente: es cierto que al introducir el concepto de concubinato en el artículo 257 lo hacemos quizás con originalidad dentro del campo del derecho civil, pero por otra parte somos conscientes de que en el campo de la legislación social —y hay una abun-

dante jurisprudencia al respecto— se tiene en cuenta precisamente el derecho a pensión por parte del concubino supérstite, y en un sinnúmero de leyes previsionales se ha tomado como relevante la existencia del *affectio maritalis*, sin perjuicio de que haya una relación jurídica.

El tema del concubinato tiene que ver con este sinceramiento en las relaciones de familia del cual habíamos hablado al dar nuestro informe en general. Con respecto al pedido de aclaración formulado por el señor diputado Ferré, debo decir que para nosotros esas uniones de hecho caen en la situación del *affectio maritalis* que puede darse en una pareja, y esto para nosotros es suficiente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — Señor presidente: en el mismo sentido de la aclaración del señor miembro informante, es a mi juicio evidente que el término “concubinato” alude a una objetiva situación de hecho manifestada en la existencia de signos de una conducta humana consistente en convivir en pareja, y esta circunstancia prevalece sobre el eventual ligamen jurídico que pudiera existir entre los convivientes. Son los hechos los que determinan la situación de concubinato y no las relaciones jurídicas que puedan tener las partes.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkner. — Voy a ser brevísimo, señor presidente. Las manifestaciones que quedan registradas en el Diario de Sesiones deben servir para interpretar las decisiones del honorable cuerpo.

Entiendo que la cuestión planteada por el señor diputado Ferré se dilucida en la siguiente forma: el concubinato es el estado de convivencia con carácter de permanencia, sin que tenga relación con este nombre la circunstancia de que las personas que integran la pareja tengan o no impedimento para contraer matrimonio.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Stubrin (M.). — Señor presidente: en el mismo sentido de lo argumentado quiero manifestarle al señor diputado Ferré que sería imposible que se dé uno de los supuestos por él planteado: alguien que no ha disuelto su vínculo matrimonial y que tampoco ha dejado de convivir, es decir, que no se ha separado de hecho y que pueda tener una relación que se caracterice como concubinato.

Esa figura entraría dentro de lo que el derecho penal califica como adulterio o amancebamiento,

acerca de los cuales se ha escrito mucho. De manera que coincido plenamente con lo manifestado por el señor diputado Stolkiner y, como dijo claramente el señor diputado Terrile, es el *affectio maritatis* lo que debe privar dentro de ese concubinato. Si tienen o no posibilidad de contraer el vínculo jurídico no tiene importancia a estos efectos; si la tiene que esa unión, que se da a sí misma una naturaleza asimilable al matrimonio, constituya un matrimonio aparente, a pesar de que por distintas razones la pareja no haya podido o no haya querido efectivizar tal unión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Señor presidente: creo que el señor diputado que me ha precedido en el uso de la palabra ha dado en la tecla.

A mi criterio, este artículo se refiere al caso del aparente matrimonio de dos personas que están conviviendo, o sea que no es una aventura pasajera. Se trata de aquellas personas que conviven públicamente en aparente matrimonio. Entiendo que ése es el concepto fundamental, aunque me someto a lo que sostenga la comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Stubrin (M.). — Señor presidente: entiendo que de ser esa la interpretación estaríamos de acuerdo y podríamos llegar a la conclusión de que no es necesario llamarlo aparente matrimonio, porque complicaríamos la cuestión. Corresponde llamarlo concubinato, quedando en claro el contenido esencial del vocablo que empleamos. No se me ocurre pensar que un juez haya consagrado el derecho a la pensión en el caso de una aventura pasajera; en todos los casos ese derecho ha funcionado respecto de las situaciones asimilables al matrimonio.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Señor presidente: el señor diputado preopinante olvida que en este mismo recinto y luego de una ardua discusión se resolvió utilizar la expresión "aparente matrimonio" respecto de aquella unión de hecho en que hubiera convivencia pública.

Por eso, señor presidente, debemos tener presente que es fundamental discutir en profundidad estas cuestiones, por cuanto el día de mañana el juez puede requerir los antecedentes que dieron origen a una norma para volcar en la sentencia el concepto esencial. No olvidemos que el juez no legisla, pero interpreta las leyes, y es muy importante que estas discusiones se lleven a cabo en el seno de la Cámara y no en

las comisiones, porque de lo debatido en éstas no se entera el juez. Por ello quiero que expresamente se aclare si se trata de cualquier unión o de unión en aparente matrimonio.

Creo que esto es lo que el señor diputado Ferré quería que se le aclarara de modo expreso, al igual que la señora diputada Guzmán.

Pido a la comisión que comprenda la importancia que tiene la explicación solicitada.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Salduna. — A fin de aclarar con mayor precisión lo que se está debatiendo quiero recordar que la ley 2.393, de matrimonio civil, contiene una mención concreta del concubinato. Su artículo 89 dice: "Si el matrimonio nulo fuese contraído de mala fe por ambos cónyuges, no producirá efecto civil alguno. La nulidad tendrá los efectos siguientes: 1) la unión será reputada como concubinato. ...".

Vale decir que, en contraposición con lo que aquí se expresara, la ley civil argentina concretamente utiliza el término "concubinato", que claramente se especifica como la unión de dos personas de distinto sexo que conviven sin estar casados por propia decisión o por no poder estarlo en virtud de algún impedimento.

No obstante, si el término "concubinato" se interpreta que podría en cierta medida herir la susceptibilidad de algunas personas, podría ser sustituido por el de "convivencia" o "cohabitación", lo que produciría los mismos efectos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Debo formular una aclaración que creo es ilustrativa.

El legislador ha cuidado no utilizar el término "concubinato" en razón de la existencia de hijos adulterinos, incestuosos, etcétera, clasificación que de alguna manera derogara la ley 14.367, conservándose el tratamiento distintivo para los hijos matrimoniales y extramatrimoniales —que ahora venimos a equiparar— a los efectos sucesorios.

Además del debate que en este mismo recinto hubiera sobre matrimonio aparente, convivencia, uniones de hecho, etcétera, interpreto que el sentido de la norma ha quedado perfectamente establecido en estos pequeños diálogos que aquí se han registrado.

Por ello, la Comisión de Legislación General insiste en mantener el término "concubinato".

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Cuando en el mes de septiembre tratáramos en esta Cámara un proyecto de ley del señor diputado De Nichilo sobre

otorgamiento de derechos previsionales a la llamada concubina, se planteó un debate en torno a esa expresión.

Recuerdo que en tal época se citó un dictamen del doctor Belluscio respecto del término "concubina", en donde sostuvo que la expresión es despectiva y peyorativa.

El proyecto aprobado en esa oportunidad fue redactado atendiendo a que la propia legislación laboral se refiere al matrimonio aparente; por ello se efectuó la adecuación de la terminología.

Las mismas razones que en este recinto se expusieran en tal ocasión y por las que aquella iniciativa recogiera la expresión "aparente matrimonio", resultan ahora valederas para que este artículo pueda ser reformado en su redacción, la que sugiero así: "En el caso de aparente matrimonio, la convivencia de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción hará presumir su paternidad, salvo prueba en contrario".

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese. — Señor presidente: cuando tratamos aquel proyecto que recuerda la señora diputada Guzmán nos apartamos del término "concubinato" porque se levantaron voces que podríamos calificar de feministas. Alguna de ellas se sintió hasta agraviada por el intento de varios diputados varones de mantener el término. Creo que esa ley fue un desacierto nuestro y aquella una actitud cobarde de la Cámara.

En mi opinión debemos mantener el término concubinato con la valentía necesaria. Nadie puede sentirse agraviado por la utilización de ese término que ahora se levanta, además, en defensa de la mujer, ya que es ella quien podría accionar para obtener la presunción de paternidad.

La clarificación del alcance del término ha sido suficientemente expresada en esta Cámara por los señores diputados Terrile y Stolkiner; la relación está caracterizada por el *affectio* matrimonial, como dijo el señor diputado Terrile, y yo agregaría que es de convivencia estable.

Esta Cámara debe, además, tratar de contemplar esta institución en la legislación positiva en forma progresiva. Los civilistas no han dedicado las páginas que debieron haber dedicado a esta institución de tanta relevancia en nuestra sociedad de hoy. Pero cuando lo hicieron no esquivaron la responsabilidad de utilizar el término concubinato. No puedo recordar en estos momentos el nombre de los autores pero hay libros como

Tratamiento del concubinato o El concubinato que no se avergüenzan del nombre del instituto.

Por eso me pronuncio sobre el mantenimiento del término y, como reflexión final, quiero manifestar que esta introducción en nuestra legislación civil positiva del concubinato debe constituir un compromiso del Parlamento argentino y de la Comisión de Legislación General de no quedarse a mitad de camino y bregar por la resolución de todos los efectos jurídicos que para nuestra sociedad debe tener aquél. De lo contrario parecerá injusto que hoy nuestra legislación otorgue alcance de presunción de paternidad a esta institución y que mañana quien ha sufrido en virtud de ella una resolución judicial adversa pueda quedar en la indigencia y sin derechos patrimoniales algunos que emerjan de esta relación que es una realidad en nuestra sociedad.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferré. — Señor presidente: me considero satisfecho con las aclaraciones efectuadas por el miembro informante de la Comisión de Legislación General y los demás señores diputados de la Unión Cívica Radical y por la sinceridad empleada respecto del alcance y la profundidad del término "concubinato" que se usa en este artículo 257.

Si bien conozco el antecedente citado por el señor diputado Salduna de aquella ley de matrimonio civil, es obvio que en esa ley el término está usado con un criterio condenatorio o sancionatorio, mientras que en este proyecto se lo usa con un criterio tutelar o tuitivo.

Hechas estas aclaraciones, debo manifestar —al no diferenciarse en este caso si las uniones de hecho lo son por impedimento de ligamen o por la negativa de las partes a contraer legítimo matrimonio —mi disconformidad y mi disenso con la utilización de este término que da *status* jurídico a este tipo de relación.

Se me ocurre —y así tengo que denunciarlo— que una vez más, en el tratamiento y en el espíritu de este proyecto, se está pretendiendo vaciar de contenido al matrimonio legítimo a favor de cualquier unión de hecho, ya que independientemente de que estas últimas requieran un tratamiento de carácter social, cultural o de tipo tutelar, no considero que en este momento sea del caso igualarlas al matrimonio legítimo. ¿De qué valdrá mantener su vigencia si se vacía a esta institución de su legítimo contenido? ¿Qué faltará entonces para terminar de anularla?

Si se me hubiera dicho que la consideración de concubinato tiene que ver con aquellas si-

tuaciones en donde el impedimento de ligamen hace imposible un nuevo matrimonio, hubiera tenido una comprensión distinta del problema. Pero si se expresa que cualquier situación de hecho debe ser considerada en un plano de igualdad con el matrimonio civil, entonces me pregunto si los argentinos queremos verdaderamente familias estructuradas, unidas y firmes; si nuestra sociedad y nuestro derecho desean que haya familias estructuradas en torno a la legislación civil con matrimonios —en lo posible— perdurables.

Si esto no es así, si cualquier unión de hecho debe ser reconocida en igualdad de condiciones, me pregunto por qué un joven tendría que asumir en este momento las obligaciones propias del matrimonio y casarse de acuerdo con la ley de matrimonio civil.

Estas consideraciones no hacen más que reafirmar la posición sostenida en el día de ayer con respecto a las distintas concepciones de la familia por el bloque radical y por el que habla, en nombre de la bancada peronista, y conducen a que me oponga a dar estado jurídico —por lo menos en las condiciones en que se ha planteado— al instituto del concubinato.

Por lo referido, adelanto mi voto negativo para el artículo que se encuentra en consideración.

Sr. Presidente (Pugliese). — Advierto a la Honorable Cámara que estamos con quórum estricto y que, en consecuencia, a partir de este momento la Presidencia aplicará el artículo 163 del reglamento.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Furque. — He pedido la palabra para hacer dos brevísimas reflexiones. En primer lugar el proyecto a que aludiera la señora diputada Guzmán no utilizaba el término "concubinato" sino la expresión "matrimonio de hecho", lo que jurídicamente era, sí, un absurdo.

En segundo lugar, deseo recalcar un aspecto sobre el que ya se habló largamente en este recinto, en el sentido de que este proyecto trata de romper con una serie de hipocresías sociales que han venido desvalorizando dentro de la jerarquía social a este instituto que proviene del derecho romano, el llamado concubinato.

Por último, quiero señalar que este Parlamento está respondiendo al gran reto de nuestro tiempo mediante una legislación consciente de los graves problemas que afligen a nuestra sociedad y está tratando de darles una solución, mientras que la tesis sustentada por el

diputado Ferré implica afianzar un criterio de hipocresía muy generalizado en nuestro contexto social.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Nieva. — He solicitado la palabra para complementar el último análisis del señor diputado Furque, que comparto totalmente. Respondiendo a las expresiones del señor diputado Ferré, debo decir que la ley tiene la misión de recoger el hecho social, a la vez que el Parlamento argentino debe atender a nuestra verdadera realidad.

En el día de ayer también tuve el honor de que se me concediera el uso de la palabra. En esa oportunidad analicé claramente la situación que existe en muchos lugares en donde los jóvenes se separan al poco tiempo de haberse unido en matrimonio debido a desavenencias o inexperiencia. La sociedad argentina no puede condenar esas uniones de hecho a la marginalidad. Se trataría de una verdadera hipocresía social, como bien lo ha calificado el señor diputado Furque.

Nosotros nos encontramos frente a una realidad. Los legisladores nos debemos preguntar si las uniones irregulares existen o no; yo respondo que existe una gran cantidad. Pero esto no significa que debemos vaciar a la familia. La misma pregunta se puede hacer respecto de los delinquentes. Nosotros quisiéramos que ellos no existan, pero igual tenemos un Código Penal que reprime el homicidio y todo tipo de delitos; lamentablemente, los delitos existen. Yo me pregunto si el señor diputado Ferré vive en la sociedad utópica de Platón o en la Argentina de 1985.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: lamentablemente tengo que volver a tratar el problema de la terminología. Aquí se ha imputado de feministas a quienes han sostenido la terminología de aparente matrimonio. Esta observación no corresponde y, en ese sentido, le he solicitado al señor presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social que nos informe sobre el memorándum que envió el doctor Belluscio —quien no podrá ser atacado de feminista— con respecto al problema del término "concubina".

Además, no entiendo por qué no se quiere cambiar ese término cuando no hay ningún inconveniente para sustituir el título de la patria potestad por el de la autoridad de los padres. Esto último indica que estamos trabajando sobre una legislación abierta.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. De Nichilo. — Señor presidente: pienso que no ha pasado tanto tiempo como para que se produzca el siguiente olvido. Yo no he tenido la satisfacción de que la palabra "concubina" figurara en la ley que se originó en mi proyecto, porque tuve la mala suerte de que pasara tres veces consecutivas a la comisión, donde se me solicitó en forma especial que suplantara esa expresión por la de "mujer unida de hecho". Así he perdido un tiempo precioso en tres oportunidades. Y para ratificar mis palabras diré que dicho proyecto hoy hace referencia a la mujer unida de hecho o en aparente matrimonio. Quiere decir que es muy fácil de recordar, en este mismo recinto se aceptó por unanimidad esa expresión, aunque ésa no era mi idea, pues en ese momento sostenía que se debía mantener la palabra "concubinato".

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sabadini. — Señor presidente: en alguna medida el diputado De Nichilo historió el problema dentro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, en relación a la ley que en principio utilizaba el término "concubinato", que fue cambiado a posteriori a instancias de esta Cámara.

Creo que en este debate se están discutiendo dos cuestiones diferentes: una es la presunta o supuesta equiparación que habría entre el instituto del concubinato y el del matrimonio; y la otra es una cuestión meramente formal referida a la inclusión del término "concubinato" como una expresión inconveniente desde el punto de vista social. Cuando se excluyó el término "concubinato" de la ley a que hacía referencia el señor diputado De Nichilo, exclusivamente se debió al hecho formal de que era peyorativo desde la óptica social. Asimismo, se dijo que si se incorporaba a la legislación, a la documentación pública y demás, habría gente que podría sentirse molesta o herida, no porque estemos negando la realidad de las uniones de hecho que, como bien dijo el señor diputado Nieva, es algo insoslayable.

Partiendo del mismo principio expuesto por el señor diputado por Jujuy, en el sentido de que la ley reconoce un hecho social que ya existe —aunque hay doctrinas que dicen otra cosa diferente—, no se utilizaba el término "concubinato" por el contenido peyorativo que tenía socialmente. Esta era la cuestión. Yo creo que si en el tema que estamos debatiendo insistimos en la expresión "concubinato", el tema va a

seguir vigente: no vamos a poder cambiar desde el punto de vista del prestigio social lo peyorativo del término. Esto sin entrar a considerar jurídicamente una presunta equiparación entre concubinato y matrimonio.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Stubrin (A. L.). — Señor presidente: creo que hemos estado enfrascados durante bastante tiempo en el debate ocupándonos de la cuestión del concubinato y perdiendo de vista el sentido con el cual la comisión, respondiendo a una inclusión ya realizada en el Senado, incorporó un artículo por el cual se constituía a esta vieja institución civil en un medio de prueba para las acciones de filiación de los hijos.

El interés y el objeto de esta inclusión es el motivo de esta reforma al Código Civil en el sentido de producir la equiparación de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales a los efectos de sus derechos en relación a los padres.

De repente pareciera que se inicia un juicio y se condena el *status* legal del concubinato, cuando en realidad lo que se está haciendo, a mi modo de ver, es enjuiciar y condenar en esta Cámara el profundo sentido social y justiciero de la equiparación de los hijos.

En consecuencia, creo que el sentido de esta condena obedece a lo que constituiría una política legislativa de defensa del matrimonio por medio del sacrificio del *status* legal y de la equiparación de los hijos nacidos fuera de esta institución. Este es un modo indirecto y absolutamente inconveniente —como lo demuestra la práctica social de nuestro país y también la carne viva de las situaciones de discriminación que se padecen en la sociedad argentina—, por el que nosotros seguiríamos los consejos de quienes dicen que se fortalece la institución matrimonial por medio de la punición de los efectos de las uniones de hecho. Creo que hay que terminar con tal punición y equiparar en sus derechos en materia civil a todos los hombres y particularmente a todos los niños.

Además, la inclusión del concubinato como medio de prueba en las acciones de filiación es para el padre fuente de obligaciones y no de derechos. En consecuencia, el artículo en cuestión no estimula la existencia social del concubinato, sino todo lo contrario.

Actualmente, tal como lo dijo con toda claridad un señor diputado, se da junto con la formalidad de la defensa de la ley de matrimonio civil la hipocresía del funcionamiento —sin consecuencias jurídicas para los padres— de muchas

uniones de hecho con procreación, cuyo costo social es pagado exclusivamente por los hijos.

Creo que la política legislativa que surge del dictamen que consideramos es una auténtica manera de fortalecer la institución legal del matrimonio por medio del reconocimiento de la realidad, la equiparación de los derechos y el abandono de viejos tabúes que causan el retroceso social.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Sobrino Aranda. — Señor presidente: desde el día de ayer hemos estado discutiendo con seriedad las distintas concepciones filosóficas y observaciones que se formularon en este recinto. Entiendo que ésa es la única manera de trabajar, con un enfoque de los problemas desde un punto de vista racional y admitiendo las observaciones y discrepancias que pudieran existir.

Pero debo rechazar enfáticamente la manifestación de hipocresía formulada por el señor diputado Nieva porque entiendo que menoscaba la altura del debate. Acá, en última instancia, se está defendiendo la postura de la familia constituida legítimamente sin quitar los derechos que pudiera tener la descendencia de las familias no constituidas en forma legítima.

En cuanto a la defensa de la familia legítima y de los derechos de la familia no legítima existe un linde casi invisible y muy difícil de precisar. Nuestro bloque ha adoptado la posición de defensa de la familia legítima porque entiende que es el núcleo central de una nación. Desde ese punto de vista, nuestra posición ha sido absolutamente correcta.

Cuando hemos hecho referencia al concubinato no hemos dicho ni más ni menos que entraña riesgos que obligan a acotar debidamente su recepción.

Agradezco mucho las manifestaciones del señor diputado Terrile y de todos quienes han aportado elementos importantes a esta discusión que, en última instancia, servirá para que en el futuro la historia dirima si hemos tenido razón quienes hemos defendido el matrimonio en su acepción jurídica frente a ciertos avances de la denominada familia democrática u horizontal.

La historia será quien diga quién ha tenido la razón, pero no obstante debemos desarrollar este debate con cordura, talento y sobre todo buena educación. *(Aplausos)*

Sr. Nieva. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pugliese). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Nieva. — Señor presidente: quiero aclarar que no he hecho alusión personal alguna. Me atengo a la versión taquigráfica en respaldo de esta afirmación. Simplemente, he ratificado los términos del colega Furque cuando habló de "hipocresía social".

Es decir, nosotros tenemos una realidad social en la Argentina: ¿existe o no gran cantidad de uniones de hecho? Esto es lo que tenemos que analizar. Y si existen, ¿por qué vamos a privar a tantos niños de los derechos que como personas y criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios les correspondan?

Sr. Presidente (Pugliese). — Está aclarado que no hubo agravio personal de parte del señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Leale. — Señor presidente: debo remitirme a lo expresado por los señores diputados De Nichilo y Sabadini, dado el tratamiento que ha tenido en nuestra comisión, cuando lo analizamos, el proyecto de ley sobre pensión a la concubina, título con que venía esa iniciativa.

Fue en esa oportunidad donde cambiamos los términos —como dijo el diputado De Nichilo— por los de uniones de hecho, teniendo en cuenta los motivos que aquí se expresaron en forma muy explícita. De manera tal que con el análisis del artículo 257 derivamos en las uniones de hecho, debiendo entonces determinar en esta sesión o en otra posterior si vamos a otorgar el *status* jurídico necesario a la palabra concubino, para usarla de ahora en más, porque considero que poco tiene que ver este término con el sentido que tiene el artículo 257 que se quiere aprobar en esta Cámara.

Sr. Ferré. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pugliese). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferré. — Señor presidente: quiero dejar constancia de que se vuelve a hablar de la equiparación de los hijos matrimoniales con los extramatrimoniales, desviando la atención sobre el problema planteado aquí.

No se discute la igualdad o necesidad de igualdad de los hijos extramatrimoniales con los matrimoniales. Lo que no queremos, como dijimos ayer al tratar el artículo 240 —y se vuelve a reiterar ahora—, es que, so pretexto de hablar de la igualdad de los hijos extramatrimoniales con los matrimoniales, igualemos —algo que no es objeto de esta ley— las relaciones no matrimoniales de los padres. Si ésta es la intención habrá que dictar una ley que diga a todos los

argentinos que el matrimonio civil no existe más, o que todas las uniones de hecho están equiparadas con el matrimonio civil. Pero no utilicemos el argumento de que todos somos hijos de Dios para de alguna forma justificar jurídicamente situaciones de hecho que conocemos y que nadie ha puesto en tela de juicio.

Esta es la aclaración que quería hacer.

Sr. Presidente (Pugliese). — Ya la había hecho, señor diputado.

Sr. Ferré. — Se la reitero entonces al señor diputado Stubrin.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Señor presidente: lamento demorar más aún el tratamiento de este artículo 257.

Durante largas jornadas hemos tenido diferencias conceptuales y filosóficas con el diputado Ferré en torno a dos concepciones. La que nosotros ensayamos durante todo este debate en cuanto a la filiación apunta precisamente al hijo. Es decir, cuando en materia de filiación planteamos la presunción en la concepción, hablamos del hijo y no del matrimonio.

Sr. Sabadini. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sabadini. — Había planteado la cuestión en términos muy diferentes a la forma en que se ha encauzado el debate en esta Cámara. No estoy discutiendo la equiparación jurídica ni la presunción o las consecuencias de una equiparación jurídica en la filiación. Simplemente hice notar el hecho de la connotación social que tiene la palabra "concubinato". Esto es algo que no está resuelto ni se resolverá en este recinto. Pido a los señores diputados de la mayoría que me aclaren la cuestión en este sentido.

Mi pedido es sencillísimo: que se cambie el término "concubinato" por el de "unión aparente", por ninguna otra razón más que por la connotación social peyorativa que tiene el primero de ellos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Creo que eso es lo único que está en discusión.

Sr. Sabadini. — No, señor presidente; la discusión entre los diputados Ferré y Terrile radica en distintas concepciones filosóficas acerca del instituto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Eso en cuanto a los fundamentos, pero en definitiva lo que se cuestiona es la palabra "concubinato".

Sr. Sabadini. — Se quiere cambiar el término "concubinato" en virtud de una connotación filosófica; no entro en esas consideraciones, sino

que mi inquietud apunta a una cuestión estrictamente formal, y esto es algo que —reitero— no se me ha contestado en la Cámara.

Sr. Cornaglia. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — Señor presidente: quiero que quede constancia que para el radicalismo no existe ninguna connotación peyorativa ni sancionatoria en el término "concubinato". Además, es la palabra más breve, concreta y precisa para tratar el tema de la protección que procura la ley al defender la filiación para los hijos de cualquier unión que pueda ser considerada irregular.

Dado que el tema ha sido profundamente debatido, hago indicación de que se someta a votación la redacción propuesta.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si me permiten, desearé solicitar una aclaración. Señor diputado Ferré: ya que usted ha sido quien planteó en primer término consideraciones acerca del artículo 257, ¿cuál ha sido la propuesta de modificación que, a su juicio, habría que introducir en esta redacción?

Sr. Ferré. — La modificación consiste en cambiar el término "concubinato" por otra expresión: unión de hecho.

Sr. Presidente (Pugliese). — Entonces, la Presidencia ha interpretado bien la situación en el sentido de que lo que está en discusión legislativa son los fundamentos por los que se propone sustituir el término "concubinato", y esto es lo que a mi juicio ha sido suficientemente debatido en la Cámara.

Sr. Ferré. — Efectivamente.

Sr. Asensio. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Asensio. — Señor presidente: entiendo que para comprender el sentido del vocablo "concubinato" tendríamos que haber considerado su connotación etimológica. Concubinato significa comunidad de hecho.

Tal como lo ha dicho el señor miembro informante de la comisión, aquí se establece la presunción de la paternidad en función de la existencia del concubinato.

Este tema ha sido tratado reiteradamente a lo largo de la historia como una relación inmoral, a tal punto que la *lex Julia de adulteriis*, dictada en el año 9 antes de Cristo, en pleno reinado de Augusto, reglamentó este tipo de relaciones y les dio connotaciones de carácter jurídico vinculadas con su estado y sus efectos.

Con posterioridad nuestra jurisprudencia ha acogido en numerosos fallos los efectos de la

relación de concubinato con respecto a la paternidad de determinado niño o a su verosimilitud. De manera que entiendo que cambiando los términos con que la comisión redactó el proyecto no vamos a solucionar nada ni a mejorar o empeorar la situación.

El término "concubinato" es una palabra más del idioma castellano, y repito que ha sido atacado como inmoral y defendido como moral. Hay legislación universal, legislación del derecho comparado, que lo ha reglamentado. En ese sentido podemos remontarnos a la era del Código de Napoleón, y con anterioridad a la *lex Julia de adulteriis*. Posteriormente, y ya en nuestra patria, lo ha acogido la numerosísima jurisprudencia de las cámaras civiles de la Capital Federal.

En consecuencia, señor presidente, propongo que se mantenga el término "concubinato", tal como lo sugiere la comisión que ha redactado el proyecto de ley.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Lugones. — Es evidente que a raíz de una intervención del señor diputado Ferré hemos entrado en una discusión como si este proyecto que utiliza la palabra "concubinato" hubiese sido redactado en otro planeta.

Los que alguna vez hemos estudiado derecho sabemos que las leyes no son estáticas, ni deben serlo, y que se nutren de la jurisprudencia y las costumbres, que son su fundamento.

Tanto la expresión "concubinato" como la relación que encierra son tan reales que ignorarlas y no aplicarlas en un dispositivo legal es estar totalmente al margen de la realidad. Este nuevo Parlamento argentino no puede estar ajeno a todo ello y de una vez por todas debe hacer carne en nuestra legislación ese instituto que en nuestro país es una realidad incontestable.

Por lo tanto, para terminar con esta discusión bizantina propongo que se vote, porque el tema se ha agotado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. González Cabañas. — Aquí parecería enrostrárenos que negamos la existencia del concubinato. Quiero aclarar que nadie lo ha negado porque es una realidad que tiene historia; se trata de una institución que tiene realidad social y que es milenaria.

En este recinto no se ha interpretado bien lo que se expresó. El concubinato existe; eso nadie lo niega. Quiero que esto quede bien claro porque podría ocurrir que algún medio periodístico mal informado diga que el peronismo está en

contra del concubinato, lo cual no es cierto. Según la tergiversación de la línea argumental de los diputados preopinantes, parecería que estuviéramos negando la existencia de esa institución, y no es así: jamás hemos sostenido ese criterio.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia había aclarado que lo que está en debate es el uso del término y no la institución en sí.

Se va a votar la moción de orden de dar por terminado el debate del artículo 257.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el texto propuesto por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 258 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Señor presidente: tengo entendido que en la reunión de esta mañana la comisión ha aceptado la supresión del último párrafo de este artículo, porque si bien el doctor Zannoni dice tener antecedentes en el derecho español, lo cierto es que en nuestro derecho implicaría una preconstitución probatoria por procedimientos...

Sr. Torresagasti. — Pido la palabra para hacer una indicación reglamentaria.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Torresagasti. — Señor presidente: hago indicación de que se aplique el artículo 163 del reglamento.

Sr. Presidente (Pugliese). — Es innecesario que me lo pida, señor diputado, porque lo estoy aplicando al negar el permiso para salir del recinto a los diputados que se acercan al estrado para solicitarlo; pero no puedo poner un policía para evitar que salgan.

Sr. Torresagasti. — Sólo quería decir, señor presidente, que puesto que no hay ningún diputado que tenga mejores antecedentes que yo en materia de asistencia a las sesiones —no he faltado ni una sola vez—, me quedé un tanto preocupado por no conocer lo que ocurrió en el recinto durante mi ausencia. Además, quiero aprovechar la ocasión para expresar que desde hace varios días se viene insistiendo sobre la falta de quórum, como si la bancada justicialista estuviera retaceando su presencia. Se quiere hacer aparecer en los medios de difusión que

la bancada justicialista atenta contra el trabajo del Parlamento y son ya varias las oportunidades en las que se pide la publicación de la nómina de asistentes para establecer la presencia de los señores diputados.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia ha escuchado con atención las apreciaciones del señor diputado, pero aclara que a los efectos de la aplicación del artículo 163, para ella no hay diputados de una u otra tracción política.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Decía que en la reunión de esta mañana la comisión aparentemente había aceptado la supresión del último párrafo del artículo 258. Su vigencia determinaría la necesidad de una preconstitución probatoria en procesos que no serán contradictorios sino de jurisdicción voluntaria, por lo que en definitiva terminaría por anarquizar el proceso dada la falta de control de la otra parte. En consecuencia, si no me equivoco al entender que la comisión adoptó ese curso de acción, le rogaría ahora que admita la supresión del último párrafo aludido.

En relación con la primera parte del artículo 258 desarrollaré una argumentación que no ha sido aceptada por la comisión pero que considero de gran energía y vigencia. El artículo referido comienza diciendo lo siguiente: "El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, anulación, divorcio o separación de hecho..." La disolución no ofrece ninguna dificultad, porque en nuestro sistema la disolución vincular sólo se opera por la muerte de uno de los cónyuges o por la anulación del matrimonio, pero no en virtud del divorcio o la separación de hecho.

Pregunté en la comisión qué momento, cronológicamente hablando, se va a tomar para contar los trescientos días: ¿la sentencia de anulación o de divorcio, una vez firme, o el estado de separación judicial que presupone la iniciación del juicio de anulación o de divorcio?

Quien habla propuso que a los efectos de considerar los trescientos días se partiera del momento de inicio de la acción judicial de nulidad de matrimonio o de divorcio.

Por las razones que seguramente expondrá el señor miembro informante del dictamen de la mayoría, esta modificación que propuse no fue aceptada, aunque sí la referida a la supresión de la parte final del artículo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Señor presidente: la comisión ha aceptado la supresión de la última parte del artículo 258, tal como lo ha manifestado el señor diputado preopinante.

Sin embargo, no fue aceptada la propuesta del señor diputado Stolkiner relativa a considerar la iniciación de la demanda como punto de partida para contar los trescientos días por los mismos argumentos que quien habla brindó en el debate celebrado en el día de ayer en este recinto, al señalar que los trescientos días deben contarse desde el divorcio, consciente de que no siempre la interposición de la demanda que promueve la acción de nulidad del matrimonio o de divorcio es aceptada, ya que el juez puede, en definitiva, rechazarla. De allí que no podíamos adoptar ese criterio.

En el entendimiento de que la sentencia retrotrae los efectos del divorcio al momento en que se interpone la demanda, la comisión insiste en la actual redacción del artículo 258.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Señor presidente: tal como se ha manifestado, se había convenido la supresión del último párrafo del artículo 258.

No obstante, quisiera dejar constancia de un agregado que propuse se incorporara luego del segundo párrafo de este artículo, que diría: "No tendrá acción de impugnación quien hubiere reconocido expresamente al hijo nacido antes del matrimonio".

Si bien efectué esta propuesta en la reunión de la comisión celebrada en la mañana de hoy, ella no fue aceptada, pero quiero que se consigne en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 258 conforme al texto que figura en el dictamen de mayoría, con la supresión de su último párrafo, aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 259 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferré. — Señor presidente: el artículo 259 legisla acerca de la acción de impugnación de la paternidad del marido y expresa que existen dos legitimados para iniciarla: el marido y el hijo. Al referirse a la época en que el hijo puede iniciar la acción, el dictamen concretamente dice que podrá hacerlo "en cualquier tiempo".

La posibilidad que otorga tal redacción es lo que quiero observar. Considero que es aconsejable que la acción del hijo quede acotada en el

tiempo de modo más adecuado. Si la acción del hijo se pudiera realizar en cualquier tiempo, antes de su mayoría de edad la única persona que podría asumir la representación de aquél —a partir de la modificación del régimen de patria potestad— sería la madre, con lo que estaríamos consagrando indirectamente un nuevo legitimado que no lo está en el resto de la legislación ni ha sido propuesto por la doctrina ni admitido por la jurisprudencia. Legitimariamos así a la madre respecto de la acción de paternidad.

Para que la madre impugne la paternidad es evidente que debería manifestar que el hijo no es de su marido sino proveniente de una relación extramatrimonial.

Ni la doctrina propugna ni la legislación ha receptado que la madre pueda ejercer la acción; pero al concederla al hijo "en cualquier tiempo" y no limitarla a que, por ejemplo, pueda ejercerla recién a partir de la mayoría de edad, se le está brindando a la madre la posibilidad para intervenir como legitimada, lo que no se le reconoce en el resto del articulado.

El espíritu de la iniciativa es conceder al hijo la posibilidad para impugnar la paternidad, pero ello debe ser factible a partir de su mayoría de edad, en que podrá optar, si es de su conveniencia —teniendo en cuenta que se procura sancionar este instituto en beneficio del hijo—, por plantear la acción o no. De lo contrario, quien realmente decidiría respecto de la conveniencia de que el hijo planteara la cuestión al año de edad va a ser la madre.

En consecuencia, incorporamos a la madre como legitimada para la acción o precisamos que el hijo podrá hacerlo recién a partir de la mayoría de edad. La otra persona que podría accionar sería el propio padre, pero esto constituiría un contrasentido.

No habiendo sido incorporado en el articulado entre las cuestiones que requieren el consentimiento de ambos padres —de acuerdo con el artículo 264 bis— el supuesto de la iniciación de una acción judicial, éste sería el caso de aquellas acciones que hechas por cualquiera de los padres se presumen consentidas por el otro. Por ello la acción que haría la madre aparecería, de inicio, como consentida por el padre. Y en todo caso, si hubiera una especie de proceso prejudicial o preproceso en que primero se sustanciara una eventual oposición del padre que no quiere que le inicien la acción, por lo que no autoriza a tal fin a la madre, se podría poner en funcionamiento el mecanismo del tutor *ad litem*. Pero como a éste se llega mediante la denuncia de la madre, me parece entonces que debemos dar al

hijo el derecho a la acción recién después de su mayoría de edad, o bien incorporar a la madre. Mas esto también resulta un contrasentido, pues para defender la acción respecto del hijo la madre tendría que anunciar su infidelidad y adulterio.

Con estas palabras dejo planteada la observación que formulo al artículo en consideración, con referencia al aspecto de que el hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — La preocupación del señor diputado Ferré gira en torno a las consecuencias que podrían derivarse de esta acción que tiene el hijo de impugnar la paternidad en cualquier tiempo. Lo que no dice el señor diputado Ferré —pero es importante señalarlo en este recinto, ya que fue motivo de debate en la Comisión de Legislación General esta mañana— es que la madre no actúa por derecho propio cuando el hijo es menor, sino en representación de éste. No se trata de una acción por derecho propio, sino en representación de su hijo.

Claro que el diputado Ferré podrá insistir diciéndonos: lo que sucede es que, en forma indirecta, la madre está utilizando esta norma para impugnar la paternidad. Es cierto. Pero llegar a la conclusión que en definitiva ofrece el señor diputado Ferré, de darle esa acción después de la mayoría de edad, podría plantear situaciones en que se perdería la prueba biológica u otras que sería conveniente plantear en el momento de la minoridad. Por ello, en interés del hijo —y aquí insisto en la vieja concepción que hemos trazado durante todo el debate—, es necesario dar prioridad a la posibilidad de presentar las pruebas que existen sólo en ese momento y, en consecuencia, plantear que el derecho de la mujer no es un derecho de ella misma sino en representación del hijo.

Por eso la Comisión de Legislación General, después de un interesante intercambio de opiniones, decidió mantener su dictamen respecto del párrafo del artículo 259 que ha citado el señor diputado Ferré.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — En este problema de la acción de impugnación de la paternidad y de la posibilidad de su ejercicio por el hijo, mucho se podría discutir. Hay notas muy ilustrativas del doctor Belluscio que constan en "La Ley", 1979, tomo B, en las que dice que "el fundamento moral de la negación de la acción al

hijo, que invocaría su propia calidad de extra-matrimonial basado en el adulterio de su madre, me parece evidente". Se ha dicho en tal sentido, en palabras que no puedo sino compartir integralmente —y aquí cita al doctor Eduardo Zannoni en el artículo "El desconocimiento de la paternidad legítima intentado por el hijo", "La Ley", 1977, tomo D, página 69—: "Juegan primordiales consideraciones éticas que resultan imposible desatender. El marido es quien —él y sólo él— puede valorar los alcances de la conducta infiel de su esposa y puede, por muchas razones, perdonar". Sigue la cita: "Asume, entonces, la paternidad del hijo concebido por ella y nadie podrá cuestionar, ni será permitido a terceros interferir con sus intereses —generalmente hereditarios, no se olvide— en el ámbito, aquí sí, infranqueable de la intimidad conyugal y familiar, ni será dado al propio hijo erigirse en censor de la conducta de sus padres". Termina Belluscio diciendo: "Es que no siempre la realidad biológica debe prevalecer por encima de todo razonamiento de tipo moral o ético, pues la investigación de dicha realidad tiene límites éticos dados por los valores preponderantes a preservar al negarse dicha investigación".

Indudablemente, por lo que se ha dicho aquí del asesoramiento del doctor Zannoni, hay un cambio en su posición. Entiendo que también está la inspiración del Código Civil español, cuyo artículo 133 dice que la acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando faltare la respectiva posesión de estado, corresponde al hijo toda su vida; así como la del artículo 137 del mismo código, que da la acción de impugnación de la paternidad al hijo y que también, en el caso de que el hijo sea menor, se la da a la madre que ostente la patria potestad, o al Ministerio Fiscal.

Por encima de estos argumentos, coincido con el diputado Ferré en que deberíamos imponer una limitación en el tiempo a la posibilidad que tiene el hijo de ejercer esta acción. Sugiero introducir una modificación al texto del artículo que exprese, por ejemplo, que el hijo podrá iniciar la acción hasta dos años después de su mayoría de edad o hasta dos años desde que conoce sobre su paternidad.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — A los comentarios que ha merecido este artículo por parte de otros señores diputados debo añadir que me parece excesiva la elevación del plazo original de sesenta días estipulado por el Código Civil, a un plazo de

un año para la caducidad de la acción de impugnación por parte del padre, considerando los intereses que están en juego.

Anotado un hijo por su madre como hijo matrimonial, ¿es posible someter al niño a esta espera de un año para saber si su padre impugnará o no su estado? Creo que la respuesta es que no y que debe mantenerse el término original de sesenta días para ejercer esa acción.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Señor presidente: con referencia a las observaciones del diputado Fappiano en torno al plazo que fija el proyecto, sin duda que algunos preferirían conservar el criterio de los sesenta días que actualmente fija nuestro Código Civil. Sin embargo, en el derecho comparado hemos encontrado disposiciones que hablan de noventa, ciento veinte y también de trescientos sesenta y cinco días, y nos ha parecido que el plazo de sesenta era muy escaso. En consecuencia, la comisión adoptó como criterio más razonable el plazo de un año, por lo que se mantiene en esa tesitura.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Legislación General, doctor Tomás W. González Cabañas.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Se va a votar el artículo 259 conforme al texto propuesto por la Comisión de Legislación General.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (González Cabañas). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 260 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Señor presidente: entiendo que en el caso de la acción de negación de paternidad, que es el que aborda el artículo 260, debería suprimirse la parte que dice: "Quedará a salvo, en todo caso, la acción de impugnación de la paternidad que autoriza el artículo 258". De esta manera evitaríamos confusiones entre las dos acciones, la de impugnación y la de negación.

Si el hijo nace dentro de los ciento ochenta días del matrimonio, no se presume la paternidad del marido, pero si éste lo reconoce expresa o tácitamente, igualmente podrá impugnar su paternidad en los términos de los artículos anteriores. O sea que un hijo nacido a los ciento setenta y ocho días del matrimonio, respecto del cual no se presume la paternidad del marido, puede ser reconocido expresamente por

éste, con lo cual quedaría en la condición de hijo legítimo, pero con la puerta abierta a una posterior impugnación de su aparente padre. Con esto se llega a que existirían en materia matrimonial supuestos de reconocimiento revocables, en tanto que el reconocimiento de hijos según el artículo 249 del proyecto es siempre irrevocable. Para evitar esta confusión, que puede originar interpretaciones enfrentadas en los tribunales, he propuesto la supresión mencionada.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — No comprendí cuál es la supresión solicitada por el señor diputado Fappiano.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Voy a permitirme leer una parte del texto propuesto en sustitución del artículo 260 del Código Civil. Dice así: "El marido podrá negar judicialmente la paternidad del hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio. Si se probare que el marido tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de su casamiento o si, luego del nacimiento, reconoció como suyo expresa o tácitamente al hijo o consintió en que se le diera su apellido en la partida de nacimiento, la negación será desestimada". La supresión que yo solicito es la del párrafo que figura a continuación de lo que acabo de leer, que expresa: "Quedará a salvo, en todo caso, la acción de impugnación de la paternidad que autoriza el artículo 258".

Sr. Presidente (González Cabañas). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — La comisión va a mantener la redacción sin aceptar esa supresión.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: quiero expresar mi coincidencia con la posición del señor diputado Fappiano, porque en este caso ya hubo un reconocimiento de ese hijo por el posterior matrimonio. De manera que si no suprimimos el párrafo mencionado por el diputado Fappiano estaríamos creando una situación de desventaja con respecto a los hijos extramatrimoniales, cuyo reconocimiento es irrevocable. En este caso, los hijos son matrimoniales y el reconocimiento es revocable. En consecuencia, deberían suprimirse el penúltimo y el último párrafo.

Por supuesto que va a quedar a salvo una acción de nulidad del reconocimiento, porque pudieron haber existido algunos de los vicios de la voluntad. En ese sentido, pienso que co-

rresponde esa acción ya que, según ha surgido de todo este debate, estamos inspirados en la ley española de 1981, que en su artículo 138 prevé la posibilidad de que los reconocimientos que se determinen conforme a una ley de filiación matrimonial puedan ser impugnados por vicios del consentimiento conforme al artículo 141 de ese texto legal.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Señor presidente: los artículos 258 y 260 plantean dos situaciones distintas. Esto ha sido debatido esta mañana en la Comisión de Legislación General. En consecuencia, vamos a tener que reiterar conceptos que ya fueron vertidos.

En el artículo 258 se contempla una presunción rigurosa. No es el caso del artículo 260, donde hay una inversión de la carga probatoria ante la negativa que plantea precisamente el padre. Es decir que son dos situaciones que están perfectamente contempladas y que no admiten comparación.

Sobre esa base estamos manteniendo el artículo 260 en referencia al 258; y en realidad es una cuestión de prueba, concretamente de inversión de la prueba.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Advierto a los señores diputados que como la Cámara está funcionando con quórum restringido no deben retirarse del recinto sin solicitar previamente autorización a la Presidencia.

Continúa en el uso de la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Señor presidente: concluyo en que ante estas dos situaciones distintas, y atendiendo a que el artículo 260 plantea sencillamente una cuestión de inversión de la carga probatoria, debe ser mantenido ese párrafo, y consiguientemente todo el artículo 258 con su actual redacción.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.

Sra. Riutort de Flores. — Señor presidente: apoyando la solicitud del señor diputado Fappiano, propongo la siguiente redacción para el artículo 260: "El marido podrá negar judicialmente la paternidad del hijo nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Si se probare que el marido tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de su casamiento o si, luego del nacimiento, reconoció como suyo expresa o tácitamente al hijo o consintió en que se le diera su apellido en la partida de nacimiento, no tendrá lugar la negación ni la impugnación en los términos del artículo 258".

Sr. Presidente (González Cabañas). — ¿Acepta la Comisión?

Sr. Terrile. — No, señor presidente. No sólo insistimos en el texto, sino que hacemos moción concreta de que se vote.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Santa Fe.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Se va a votar el texto propuesto en sustitución del artículo 260 del Código Civil tal como figura en el dictamen de mayoría.

—Resulta afirmativa.

4

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Stubrin (A. L.). — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Stubrin (A. L.). — Señor presidente: me parece que es tiempo, dentro del funcionamiento habitual y cotidiano de la Cámara, de instrumentar los mecanismos previstos por la Constitución y por el propio reglamento en su artículo 109, a los efectos de enmendar una mala aplicación de los recursos con que nuestra institución cuenta para el cumplimiento de las funciones de los señores diputados.

He sido invitado hoy, en representación de la Honorable Cámara, a asistir al acto de inauguración de la Feria del Libro, en el que iba a hacer uso de la palabra un ministro del Poder Ejecutivo. Esta ceremonia se iba a realizar a la hora 19. Habiendo quórum suficiente en el recinto, solicité la correspondiente autorización a la Presidencia. A los mismos efectos pedí un automóvil a la repartición de la Cámara que se encarga de estas cuestiones; no me fue otorgado, obteniendo como respuesta que no había móviles disponibles. Por ese motivo me dirigí a dicha repartición y comprobé que sí los había; en realidad eran varios los automóviles, y se me informó que estaban a disposición de los funcionarios de la Cámara.

Según lo establecen disposiciones reglamentarias, esos funcionarios están obligados a permanecer en la Cámara mientras ésta se encuentra sesionando.

Por todo lo señalado, considero que existen razones para plantear esta cuestión de privile-

gio dado que éste es otorgado a cada uno de los miembros de este cuerpo para "asegurar su normal funcionamiento y resguardar su decoro". Siento ofendido mi decoro y afectado el cumplimiento de las funciones que me son constitucionalmente asignadas al no haber podido disponer de los elementos con que cuenta la Cámara en el momento en que los he necesitado.

Pido que la cuestión sea girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su estudio, a fin de que el cuerpo adopte las medidas que considere pertinentes. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (González Cabañas). — De acuerdo con el artículo 109 del reglamento, corresponde que el cuerpo se pronuncie acerca de si la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado por Santa Fe tiene carácter preferente.

Sr. Stubrin (A. L.). — Señor presidente: pido que la cuestión de privilegio sea girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Presidente (González Cabañas). — La Presidencia advierte que de acuerdo con el artículo 109 del reglamento, la Cámara debe decidir por el voto de los dos tercios si la cuestión de privilegio tiene carácter preferente.

Sr. Stubrin (A. L.). — Señor presidente: dejo sentado que no tengo interés en que se asigne a esta cuestión carácter preferente.

Sr. Presidente (González Cabañas). — La Presidencia aclara al señor diputado que debe someter a votación el carácter preferente de la cuestión planteada.

Por Secretaría se dará lectura de la parte pertinente del artículo 109 del reglamento.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así: "Las cuestiones a que se refiere el inciso 6) son exclusivamente aquellas que se vinculan con los privilegios que la Constitución otorga a la Cámara y a cada uno de los miembros para asegurar su normal funcionamiento y resguardar su decoro. Para plantearlas, los diputados dispondrán de diez minutos, debiendo enunciar en forma concreta el hecho que las motiva. La Presidencia las someterá de inmediato, con desplazamiento de cualquier otro asunto que se esté considerando, y sin debate, a votación del cuerpo, quien decidirá por el voto de los dos tercios si éstas tienen carácter preferente".

Sr. Presidente (González Cabañas). — Se va a votar si la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado por Santa Fe tiene carácter preferente.

Se requieren dos tercios de votos.

—Resulta afirmativa.

Sr. Cortese. — Pido la reconsideración de la votación porque entiendo que la valoración del señor presidente en cuanto a la obtención de los dos tercios de votos puede no coincidir con la realidad.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Horta. — Señor presidente: solicito que se utilice el sistema electrónico de votación de que dispone la Cámara.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Stubrin (M.). — Señor presidente: con las disculpas del caso, me permito corregir al distinguido diputado Cortese en cuanto al pedido de reconsideración de la votación que ha efectuado, ya que lo que corresponde es una rectificación de dicha votación para determinar si la cuestión de privilegio tiene carácter preferente. Tal rectificación tiene por objeto que el señor presidente, los secretarios, los legisladores y el público podamos apreciar si se obtienen dos tercios de votos para asignar carácter preferente a la mencionada cuestión, pese a que el señor diputado que la ha planteado ha solicitado que sea girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Se va a votar nuevamente utilizando el sistema electrónico.

Sr. Stubrin (M.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Stubrin (M.). — Señor presidente: sería conveniente que previo a la votación se nos aclare qué significa votar por la afirmativa y qué por la negativa.

Sr. Sabadini. — Yo propongo que esta preferencia consista en que la comisión otorgue pronto despacho a la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Stubrin.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Conforme al artículo 109 del reglamento y al pedido de rectificación de la votación que se ha formulado, se va a votar nuevamente si la cuestión planteada tiene carácter preferente.

—Resulta negativa de 63 votos; votan 122 señores diputados sobre 139 presentes.

Sr. Presidente (González Cabañas). — Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Adolfo Stubrin.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Oscar Luján Fappiano.

5

REGIMEN DE LA PATRIA POTESTAD, FILIACION Y EFECTOS DE LA FILIACION MATRIMONIAL Y EXTRAMATRIMONIAL

Sr. Presidente (Fappiano). — Continúa en consideración en particular el proyecto de ley aprobado en general sobre modificación del Código Civil y de sus leyes complementarias en lo referente al instituto de la patria potestad, al régimen de la filiación y a los efectos de la filiación matrimonial y extramatrimonial.

En consideración el texto propuesto en el artículo 2º en sustitución del artículo 261 del Código Civil.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Fappiano). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 262 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Señor presidente: este artículo dice que la maternidad podrá ser impugnada en todo tiempo por el marido o sus herederos, por el hijo o por todo tercero que invoque un interés legítimo.

Creo que este artículo se contrapone con el 263 en cuanto a que ese tercero puede ejercer la acción dentro de los dos años de haber conocido el acto de reconocimiento.

Quisiera una explicación sobre esto porque no todos los aquí presentes somos abogados. ¿Qué significa tercero que invoca un interés legítimo? ¿Ese tercero tiene una acción imprescriptible para impugnar esa maternidad? Debemos tener mucho cuidado, señor presidente, pues no vaya a ser que el árbol nos tape el bosque. Supongamos este ejemplo: una persona de gran fortuna muere —en este caso la madre— y aparece un supuesto hijo. ¿Quiere decir que un matrimonio, o sus familiares, tendrán sobre sí una espada de Damocles ya que puede aparecer un supuesto hijo o familiar que han desconocido?

No sé qué significa interés legítimo, si es de carácter moral, familiar o material —yo creo que es material—; pero, ¿una familia puede estar sujeta toda la vida a ese tercero interesado? En el artículo siguiente, en el que se presenta un caso similar, para esa acción se fija el término de dos años.

Advirtamos que, ante todo, el Código ha reconocido a los hijos el derecho imprescriptible de hacer reconocer su filiación o de impugnarla;

pero toda otra acción tiene un término de caducidad o de prescripción, que puede ser por acción o por excepción.

Entonces, pregunto a la comisión: ¿quién es ese tercero con interés legítimo? ¿Cuál es el interés legítimo? Además, teniendo en cuenta el artículo siguiente —el 263—, ¿cuál es el término de prescripción o de caducidad de la acción?

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Terrile. — Señor presidente: el artículo 262 plantea la impugnación de la maternidad, no de la paternidad, que ya la habíamos establecido en el artículo 258.

La actual redacción del Código Civil establece que la maternidad podrá ser impugnada en todo tiempo por el marido o sus herederos, por el hijo y por todo tercero que invoque un interés legítimo.

Lo que se está planteando aquí es la situación —creo que es válido un ejemplo para esclarecerla— de la mujer que en una clínica da a luz un hijo y le informan que ha muerto, cuando en realidad se lo han sustituido por otro. Es decir que el interés legítimo no está fundado en el aspecto material sino, principalmente, en el biológico.

La acción del tercero que va a impugnar porque tiene un interés legítimo se apoya en el último párrafo del artículo 263 —que sería ilustrativo que el señor diputado García leyera—, cuando dice: "El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados podrán ejercer la acción dentro de los dos años de haber conocido el acto de reconocimiento".

Sr. García (C. E.). — Solicito la palabra para una interrupción.

Sr. Presidente (Fappiano). — ¿La concede, señor diputado?

Sr. Terrile. — Sí, señor presidente.

Sr. García (C. E.). — Con todo respeto quiero pedir al señor diputado preopinante que no me hable como un buen *pater familiae* lo hace con su hijo. He leído todos los artículos. Contésteme en la misma forma en que le he preguntado y no diga que tengo que leer este texto. Lo he leído y entiendo que hay una contradicción con la última parte del artículo 263.

Sr. Terrile. — En todo momento me he dirigido a la Presidencia, tal como lo establece el reglamento de la Cámara, y durante el curso de esta jornada he evitado dialogar en forma directa con los señores diputados sin la correspondiente autorización de la Presidencia.

Creo que esta situación está perfectamente encuadrada en torno a una preocupación que el diputado García manifestaba hoy muy temprano en la Comisión de Legislación General, pero no pudo estar presente cuando se planteó el debate sobre el particular.

El artículo 262 es suficientemente claro cuando establece que la mujer podrá ejercer la acción cuando alegue sustitución o incertidumbre acerca de la identidad del hijo, lo que de alguna manera está limitando el caso del tercero con interés legítimo que mencionaba antes. Es decir que esta situación concreta no se plantea en cualquier tiempo sino sobre la base de los artículos que correlativamente hemos leído, donde se establece un plazo.

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.

Sra. Riutort de Flores. — El artículo 262 —que habla de la impugnación de la maternidad por los terceros que invoquen un interés legítimo— constituye otra norma que consagra la inestabilidad de la familia regularmente constituida y puede dar lugar a un verdadero semillero de pleitos a poco que proliferen las pretensiones de aquellos que sin mayores restricciones de tipo moral, que abundan en la actualidad, invocando cualquier supuesto interés legítimo ataquen un vínculo legalmente establecido.

En consecuencia, propongo que el artículo 262 tenga la siguiente redacción: "La maternidad podrá ser impugnada en todo tiempo por el marido o sus herederos, o por el hijo. La madre podrá ejercer la acción cuando alegue sustitución o incertidumbre acerca de la identidad del hijo".

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Lo que plantea la señora diputada tiene que ver necesariamente con dos concepciones acerca de lo que nosotros entendemos que son las presunciones que admiten prueba en contrario, con el sinceramiento en las relaciones de familia, con la introducción de las pruebas biológicas y con las circunstancias que se refieren al nexo biológico. Todo esto ya se debatió en oportunidad de la consideración en general del proyecto, cuando hablábamos de si íbamos a seguir conservando la familia aparente o si en definitiva queríamos lograr el contorno de la ampliación de la prueba, que era lo que en realidad perseguían los códigos alemán y francés.

El debate en general giró en torno a esas dos concepciones filosóficas. La que sostenemos ha quedado plasmada en el articulado propuesto

por el dictamen de la mayoría a fin de guardar coherencia ideológica, terminológica y conceptual, y a eso nos remitimos.

Insistimos entonces, señor presidente, en el texto del artículo 262 que propone la comisión.

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — La norma que se propicia, en lo que se refiere al tercero que invoque un interés legítimo, quizás sea demasiado amplia. La ley española da una solución a esa situación; podría decirse, tal como lo establece el artículo 140, "...quienes puedan resultar afectados en su calidad de herederos forzosos".

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Insistimos, por los argumentos vertidos, en el texto propuesto en sustitución del artículo 262.

Sr. Presidente (Fappiano). — Si ningún otro señor diputado hace uso de la palabra, se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Fappiano). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 263 del Código Civil.

Si ningún señor diputado hace uso de la palabra, se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Fappiano). — Queda aprobado el artículo 2º del proyecto de ley. En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. González Cabañas. — Señor presidente: reitero lo expresado en el dictamen de minoría en cuanto a nuestro disenso sobre el cambio en la denominación del título.

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra la señora miembro informante.

Sra. Gómez Miranda. — Por una cuestión de respeto al honorable cuerpo no voy a reproducir todos los argumentos que el diputado Terrile expuso para explicar por qué sustituimos el nombre "patria potestad" por "autoridad de los padres".

Mantenemos el artículo 3º tal como figura en el dictamen de mayoría, pero a fin de perfeccionar la redacción proponemos que, en lugar de "Sustitúyese el título III, de la sección II, del libro primero del Código Civil, por el siguiente: *De la autoridad de los padres*", se exprese: "Sus-

titúyese la denominación del título III, de la sección II, del libro primero del Código Civil, por la siguiente: Título III. *De la autoridad de los padres*".

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — En la reunión de comisión de esta mañana expresé mi coincidencia con la postura que sobre este particular mantuviera el señor diputado González Cabañas. Creo que carece de objeto cambiar la intitulación "patria potestad" por "autoridad de los padres". Por otra parte, ese término no refleja el concepto de la institución tal como la estamos considerando.

Cuando hablamos de patria potestad no hacemos referencia —como se dijo en el informe en general— al término *pater*, que parece suscitar molestias en algunas corrientes feministas. Es una norma de la sintaxis que cuando se expresa una conjunción de un sustantivo singular masculino con otro singular femenino, la forma plural debe ir en género masculino. Así, el plural de "el padre y la madre" es "los padres". "Patria" deriva de *pater*, término latino que en este sentido no admite el plural. De manera que cuando hablamos de la patria potestad nos referimos a los dos progenitores: al padre y a la madre.

Además —tal como ya lo anticipé—, los conceptos de potestad y autoridad no se ajustan al significado que damos a la institución de la patria potestad. Los vocablos "potestad" y "autoridad" parecen aludir a los derechos de los padres sobre los hijos; pero ahora, más que de derechos, debemos hablar de obligaciones, con el sentido social de la patria potestad.

Quiero poner de manifiesto que en la reunión celebrada en la mañana de hoy por la Comisión de Legislación General sostuve que si bien muchos códigos, entre ellos el de Bolivia, aceptan la expresión "autoridad paterna" en lugar de "patria potestad", entiendo que en realidad el título debería decir "De la relación paterno-filial". En este sentido, propongo que se modifique la denominación indicada en el proyecto por la que acabo de mencionar.

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Gómez Miranda. — Señor presidente: si bien es cierto que el señor diputado Stolkiner efectuó esas manifestaciones en la mañana de hoy, ellas fueron contestadas en esa reunión en la idea de que, tal como se lo dije en esa oportunidad, no iba a plantear la cuestión en el recinto.

Sin embargo, el señor diputado Stolkiner no ha procedido así, de manera que simplemente

me voy a remitir a lo ya manifestado ante esta Honorable Cámara y que consta en la versión taquigráfica.

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arabolaza. — Señor presidente: en la oportunidad de la consideración en general del proyecto de ley en discusión expuse, en nombre de mi partido, las discrepancias de fondo acerca del concepto de patria potestad compartida. Nuestra plataforma partidaria sostiene el principio de la patria potestad indistinta y todos coincidimos en la circunstancia de que la institución de la patria potestad, o como se la llama ahora, autoridad de los padres...

Sr. Terrile. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el consentimiento de la Presidencia?

Sr. Arabolaza. — Cómo no, señor diputado.

Sr. Presidente (Fappiano). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Simplemente, quería saber si el señor diputado Arabolaza se está refiriendo al artículo 264, porque de ser así corresponde que primero finalice la consideración del artículo 3º del proyecto.

Sr. Presidente (Fappiano). — La Presidencia hace saber al señor diputado Arabolaza que lo que se encuentra en consideración es el artículo 3º del proyecto, por el que se sustituye la denominación del título III de la sección II del libro primero del Código Civil. El artículo 264 se sustituye por otros en virtud del artículo 4º del proyecto en análisis.

Sr. Arabolaza. — En ese caso, señor presidente, voy a ceder el uso de la palabra a quien me sigue en la lista de oradores, sin dejar de reconocer que me estaba refiriendo al artículo 264, que también guarda relación con este otro tema.

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Conte. — Señor presidente: con respecto a algunos de los comentarios que se han efectuado, quiero expresar que los diputados no estamos legislando para los colegios de abogados ni para ningún especialista, sino que lo hacemos para el pueblo. Nosotros tenemos una función docente, que es lograr que las leyes, generalmente poco leídas por el hombre común, sean rápidamente entendidas. Por consiguiente, el análisis de la patria potestad desde el punto de vista etimológico, epistemológico, etcétera, poco interesa.

La patria potestad es un concepto que, según nuestra tradición nacional, está vinculado con la autoridad del padre, y lo que pretende la inicia-

tiva es consagrar la autoridad compartida por ambos padres. De allí que sea indispensable mantener esta nomenclatura y es útil que el artículo 264 le dé al concepto de patria potestad el sentido que ahora le estamos dando.

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: quiero aclarar que mi intención es referirme al artículo 264, pero hago uso de la palabra ahora simplemente para señalar que el problema de la terminología se presenta en las distintas legislaciones; los franceses la llaman "autoridad parental", los alemanes la denominan "autoridad de los padres" —al igual que el código boliviano—, en tanto que el Código Civil español de 1981 emplea la designación "De las relaciones paterno-filiales".

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Salduna. — Señor presidente: de alguna manera el señor diputado Conte ha expresado lo que yo quería decir.

Deseo agregar que no coincido con la opinión del señor diputado Stolkiner acerca de que la terminología "patria potestad" —proveniente del derecho romano— se pueda aplicar a la autoridad de ambos padres. Es evidente que el concepto de patria potestad, de acuerdo con su traducción literal, significa "autoridad del padre", conforme al concepto del derecho romano de *pater familiae*. Pero ocurre que estamos legislando con visión de futuro y debemos modernizar las expresiones para abarcar el verdadero concepto, como lo han hecho los códigos más avanzados.

En consecuencia, considero correcta la sustitución de la expresión "patria potestad", pues corresponde a la sustitución del poder del padre por la autoridad de los padres, entendida esta última como la autoridad del padre y de la madre. Este y no otro es el concepto con que se debe interpretar la nueva denominación que se le va a dar al título III de la sección II del libro primero del Código Civil.

Sr. Presidente (Fappiano). — Se va a votar el artículo 3º del dictamen de la mayoría conforme al texto propuesto por la señora diputada Gómez Miranda en nombre de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Fappiano). — En consideración el artículo 4º del proyecto de ley.

Por Secretaría se enunciarán las disposiciones del Código Civil cuya sustitución se propone por el artículo 4º

Sr. Secretario (Béjar). — El artículo 4º del proyecto dispone sustituir el artículo 264 del Có-

digo Civil por tres nuevas disposiciones designadas como artículos 264, 264 bis y 264 ter.

Sr. Presidente (Fappiano). — En consideración el texto propuesto como artículo 264 del Código Civil.

Tiene la palabra la señora miembro informante.

Sra. Gómez Miranda. — Señor presidente: solicito que por Secretaría se dé lectura a la nueva redacción del artículo 264 propuesta por la comisión, que creemos que mejora a la que contiene el dictamen incluido en el Orden del Día Nº 719.

Sr. Presidente (Fappiano). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así: "La autoridad de los padres o patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y los bienes de sus hijos, para su protección y formación integral, que se ejercerá siempre en beneficio de éstos, desde su concepción y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.

"Ambos progenitores son titulares del ejercicio de la autoridad y se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuentan con el consentimiento del otro, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 264 bis o cuando mediare oposición expresa.

"Cuando los progenitores no convivan, el ejercicio de la autoridad corresponderá al padre o madre que ejerza la tenencia, sin perjuicio del derecho-deber del otro de tener adecuada comunicación con el hijo y supervisar su educación, salud y condiciones de vida. Sin embargo, se requerirá el consentimiento de ambos padres para los actos previstos en el artículo 264 bis. Si el progenitor que no ejerce la tenencia dedujera oposición a algún acto que ha dispuesto el otro en el ejercicio de la autoridad, resolverá el juez, como se establece en el primer párrafo del artículo 264 bis."

Sr. Presidente (Fappiano). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Horta. — Señor presidente: solicito que por Secretaría se dé lectura nuevamente al artículo propuesto.

Sr. Presidente (Fappiano). — Por Secretaría se leerá nuevamente el texto que propone la comisión como artículo 264 del Código Civil, en sustitución del que figura en el dictamen impreso.

—Se lee.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arabolaza. — Decía, señor presidente, que ayer, en nombre del Partido Intransigente, habíamos anticipado nuestra definición en el sentido de considerar más apropiada la patria potestad indistinta que la patria potestad compartida.

Estamos todos de acuerdo en que la patria potestad es un instituto que fija un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los padres con respecto a sus hijos. Coincidimos también en que el bien jurídico que se pretende proteger en primer lugar es el del menor. Pero esta modificación al Código Civil consagra —o tiende a consagrar— la igualación jurídica del hombre y la mujer en un acto de justicia.

Esta institución no ofrece inconvenientes cuando se trata de un matrimonio que convive con sus hijos y en unidad familiar construye su futuro. Es decir que tanto en el caso de la patria potestad conjunta —por supuesto con el ejercicio por parte de cualquiera de los padres, con la presunción de que uno tiene el consentimiento del otro— o el de la indistinta tal situación es análoga en cuanto a sus consecuencias; pero no ocurre lo mismo cuando se trata de matrimonios que se han divorciado, o están separados de hecho, o se ha llegado a su anulación: aquí es donde se produce una situación que tenemos obligación de analizar en profundidad.

Debemos legislar teniendo en cuenta la realidad circunstancial y las particularidades de nuestra comunidad. Extender el consentimiento doble de los padres a los casos en que ha habido separación judicial, o de hecho pero con una resolución judicial que acuerde la tenencia de los hijos, nos parece un exceso legislativo. Resulta mucho más justo mantener el principio consagrado en el artículo 264: la patria potestad ejercida por cualquiera de los cónyuges —con la presunción de consentimiento tácito por parte del otro— para la totalidad de los actos con excepción del casamiento. Este último supuesto involucra un acto que, efectuado, trae consecuencias en la vida que no pueden ser revocadas. Quien contrae nupcias está dando un paso trascendente en su existencia, que no puede ser motivo de revocatoria; por ello haríamos una excepción con respecto al matrimonio de menores de 18 años de edad, supuesto en que consideramos que resulta adecuado tanto el consentimiento del padre como el de la madre.

Para los otros casos contemplados en el artículo 264 bis, como por ejemplo el supuesto de la emancipación, opinamos que no es necesario

el consentimiento de ambos cónyuges porque cuando ha habido separación sabemos que es generalmente la madre quien convive con el menor. Si realmente queremos avanzar en la legislación y conceder la igualdad jurídica del hombre y la mujer, nos parece mucho más lógico que la madre que ha debido afrontar un divorcio o una separación judicial o de hecho y asumir la educación de los hijos sea quien está en mejores condiciones para evaluar y decidir acerca de lo que más conviene a su hijo. El acto de la emancipación puede ser revocado a petición de los padres, al igual que en los supuestos de autorización para ingresar a comunidades religiosas o de tipo militar.

¿Acaso cuando cada uno de nosotros ejercimos en nuestra adolescencia una vocación de cualquier tipo hemos necesitado la autorización de nuestros padres a fin de desarrollar una acción cívica en la militancia política? ¿Acaso una determinación de este tipo no es revocable por la simple actitud del menor cuando, llegado a una determinada edad, siente que su vocación auténtica no es integrar determinada comunidad religiosa o prestar un servicio en el ámbito militar? ¿Por qué, entonces, exigir el doble consentimiento, al igual que en el caso de la disposición de bienes, cuando el propio código establece que a tal fin, a pesar de la autorización del padre o de la madre, se necesita autorización judicial?

El bien jurídico que debemos propender a tutelar es fundamentalmente el del menor. Pero también tenemos que hacer efectiva la igualación de los derechos jurídicos del hombre y la mujer.

No habré de agregar otras consideraciones porque pienso que esta línea argumental no va a contar —como es nuestro deseo— con la consagración, por esta Cámara, pero quiero dejar sentado este pensamiento porque creo que —como en el caso del proyecto de ley de divorcio que oportunamente presentamos— no le podemos apartar el cuerpo a la realidad y ésta exige, en los dramáticos momentos que nos toca vivir, colocarnos a la altura de las exigencias históricas.

Reitero que sólo el acto del matrimonio es lo suficientemente trascendente como para que un menor de dieciocho años no decida acerca de ese paso sin la autorización del padre o de la madre; en cuanto a los demás supuestos —excluyendo la salida del territorio nacional, porque podría vulnerarse el régimen de visitas establecido para el caso de divorcio o de separación judicial—, considero que tendríamos que ser más amplios. En la práctica, la mujer que tiene el ejercicio de la patria potestad de sus hijos es la

que convive con ellos y los educa, a pesar de lo cual —conforme a este proyecto— tendría que conseguir la conformidad de su esposo para los actos enumerados en el artículo 264 bis. Creo que esta exigencia no está a la altura de las circunstancias y por ello me voy a permitir leer un texto alternativo para el artículo que estamos considerando, a fin de no demorar más la atención de esta Honorable Cámara.

El texto que propongo dice así: "La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, desde la concepción de éstos y en tanto sean menores de edad y no se hayan emancipado.

"El ejercicio de la patria potestad corresponde indistintamente al padre o a la madre. En caso de divorcio o nulidad del matrimonio, corresponde a aquel a quien le hubiere sido atribuida la tenencia provisoria o definitiva del menor.

"En todo caso el ejercicio de la patria potestad, a efectos de autorizar la salida del país del menor, requerirá el consentimiento de ambos progenitores, pudiendo solicitarse judicialmente la venia supletoria en caso de abandono de uno de los cónyuges o de su negativa injustificada.

"En caso de separación de hecho tendrá el ejercicio de la patria potestad el progenitor que conviviere con el menor con tenencia atribuida a uno de los progenitores por decisión judicial.

"Los conflictos que surjan entre los padres como consecuencia del ejercicio de la patria potestad serán resueltos por juez, con la intervención del ministerio público de menores."

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Deballi. — Señor presidente: encuentro que la nueva redacción dada al artículo 264 del Código se ajusta más exactamente a la realidad, pero que no llega a consustanciarse totalmente con ella.

Si bien comparto el criterio de la autoridad compartida —y así lo he manifestado en el seno de la Comisión de Legislación General, a la que pertenezco—, entiendo que el caso excepcional de que los progenitores no convivan merece un tratamiento diferencial. Es ahí donde manifiesto mi disenso con el actual texto del artículo, porque entiendo que es precisamente en los casos en que los progenitores no conviven cuando surgen los mayores problemas, a los que debemos encontrar la solución.

No podemos forzar la realidad y me temo que en todos aquellos casos en que, conforme al texto del artículo 264 bis, deba requerirse el acuerdo

expreso de ambos progenitores, nos encontraremos con que sin excepción se terminará derivando el tema a la justicia.

Dice el artículo 264, en su tercer párrafo, que "cuando los progenitores no convivan, el ejercicio de la autoridad corresponderá al padre o madre que ejerza la tenencia, sin perjuicio del derecho-deber del otro de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación, salud y condiciones de vida".

Hasta aquí estoy completamente de acuerdo, porque el ejercicio se otorga a quien tiene la tenencia. Disiento, en cambio, con el párrafo siguiente, que voy a pedir que se excluya de la redacción del artículo y que dice: "Sin embargo, se requerirá el consentimiento de ambos padres para los actos previstos en el artículo 264 bis". Y a continuación el artículo expresa: "Si el progenitor que no ejerce la tenencia dedujera oposición a algún acto que ha dispuesto el otro en el ejercicio de la autoridad, resolverá el juez, como se establece en el primer párrafo del artículo 264 bis".

Es decir que encuentro suficientemente protegido el interés del otro padre, pues tiene la acción de recurrir a la justicia en el caso de que manifieste su oposición. Pero deberá tener el pleno ejercicio de la autoridad cuando la oposición no sea manifiesta.

Estas son las razones que fundan mi posición para solicitar la supresión mencionada.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Gómez Miranda. — Señor presidente: en realidad, lo que plantean los diputados Arabolaza y Deballi es la vieja controversia entre autoridad de los padres conjunta o indistinta.

Cuando informé el despacho por la mayoría dije que este instituto legal estaba basado en tres pilares: la igualdad de los cónyuges, la protección de los hijos y la unidad de la familia. Por eso permanentemente hemos hablado de la protección de los hijos y del ejercicio de la autoridad en beneficio de ellos.

Cuando el matrimonio está desavenido y uno de los integrantes ejerce la tenencia, no queremos que el otro se desentienda del hijo. En aquellos casos en que el futuro del menor está en juego —por ejemplo, cuando quiera contraer matrimonio o ingresar en alguna institución religiosa o militar—, nosotros exigimos el consentimiento de ambos padres, estén o no separados. Yo he repetido una y mil veces que aunque se haya quebrado el matrimonio no queremos que la relación padre-hijo o madre-hijo se diluya. Esto atañe a la unidad de la familia.

En virtud de las razones expuestas no vamos a aceptar modificaciones a la redacción del artículo en tratamiento.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: hemos llegado a la reforma de uno de los artículos más importantes del Código Civil en lo que atañe al otorgamiento a la mujer de los derechos que le corresponden sobre sus hijos. En este sentido, esta aspiración de la comunidad argentina se vincula con la defensa de la dignidad de la mujer. En el caso concreto del artículo 264, entiendo que debe realizarse la distinción entre antes y después de la separación. En los matrimonios en que no hay separación la patria potestad funcionará indistintamente con las salvedades contempladas por el artículo 264 bis. Aquí no advierto mayores problemas; pero sí los veo cuando hay separación.

Quiero expresar que existe una gran falla, que es la de no contar aún con el funcionamiento de los tribunales de familia, que fueron creados por una ley votada por el Congreso Nacional en 1975. Esta circunstancia muchas veces trae graves dificultades al tema del ejercicio de la patria potestad.

Concretamente propongo que cuando haya separación se dé el ejercicio de la patria potestad a quien se le otorgó la tenencia. Se van a plantear, si no, situaciones de grave conflicto, porque no debemos olvidar que cuando hay separación las relaciones humanas quedan muy deterioradas.

Además, aquí estamos con un problema que es humano: es muy probable que un ex cónyuge actúe en contra del otro antes de velar por los intereses del menor. Precisamente el niño será un elemento de extorsión permanente del uno contra el otro. Esto va a traer graves trastornos psicológicos al menor. En la práctica, el acuerdo entre ambos ex cónyuges será realmente imposible y en estas cuestiones se va a terminar directamente ante el juez.

Por lo tanto, la propuesta concreta es que una vez que se ha acordado judicialmente la tenencia, quien la tenga también cuente con el ejercicio de la patria potestad.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferré. — Señor presidente: conforme a lo ya anticipado por el bloque peronista durante la consideración en general, vamos a observar la redacción del artículo 264.

Con el objetivo de dar una síntesis de nuestra propuesta, decimos que reafirmamos la justicia de la institución de la patria potestad com-

partida. Nos parece que es una institución esencialmente justa y que es el resultado de la práctica social de todo el pueblo y de las familias argentinas.

Nuestra crítica se centra fundamentalmente sobre la intervención del Estado, por medio del Poder Judicial, en aquellos casos en que por no dar a la institución familiar una salida y una resolución para la que sea autosuficiente, debe recurrir entonces a un tercero, en este caso el Estado, para que resuelva cualquiera de los conflictos que dentro de ella se planteen. Creemos que se ha tenido en cuenta al querer resolver esta situación mucho más a las familias en conflictos que a las que los tienen o que sobrellevan tales conflictos habituales con su propio esfuerzo, resolviendo los problemas dentro de su seno. Es decir, que se han querido resolver los problemas de las familias que han llegado a la instancia judicial por dificultades internas o en las que los cónyuges se encuentran separados de hecho.

Volvemos a reiterar que nos parece que no es menester aplicar a todos los casos un remedio que podría ser viable en situaciones conflictivas, porque el estándar de normalidad sigue siendo el imperativo y la excepción, la anormalidad.

Hemos preguntado a la comisión si había estudiado la manera de evitar que, dentro de las familias que no han llegado al ámbito judicial o a la separación de hecho de los cónyuges, puedan surgir los conflictos que deriven de atribuir la patria potestad a ambos cónyuges.

Al respecto, distintas son las soluciones que presenta el derecho comparado. En nuestra opinión, el dictamen de la minoría adopta una posición más acertada que el de la mayoría.

En respuesta a la requisitoria de la comisión, que sin contestarnos nos ha interrogado acerca de cuál pensamos que es la solución, hemos tratado de encontrar un sistema a fin de resguardar el principio de privacidad y la unidad de la familia en lo interno, para evitar salidas diagonales, por el atajo o por el camino ancho que podría representar en determinado momento una solución judicial a mano en cualquier circunstancia.

Imaginamos entonces un derecho lo suficientemente audaz como para que no sea sólo el padre el destinatario de la solución final sino que también lo sea la madre. Así, en algunos casos atribuimos la decisión final al padre y en otros a la madre. Esto no significa ni más ni menos que constatar un hecho que se da en la familia argentina y que no podemos soslayar, y es que a pesar de que creemos que se man-

tiene la autoridad paterna —ya que la familia debe concluir en un vértice de autoridad que queremos mantener, y en la práctica social de la Argentina se sigue buscando ese vértice de autoridad que es conveniente para el desarrollo y la formación de los hijos—, sabemos que en la práctica cotidiana es la madre la que permanentemente decide en una serie innumerable de cosas por delegación o autorización tácita del padre.

En definitiva, la conjunción de una familia armónica que busca mantener su cohesión a pesar de las dificultades cotidianas encuentra en ese juego, en esa interrelación, la forma de resolver *ad intra* los problemas que se plantean respecto de la patria potestad.

De esta manera eliminamos para una gran cantidad de familias un camino fácil que puede no ser una solución sino un problema, en tanto y en cuanto la pareja encuentre en sí misma los elementos necesarios para resolver el conflicto sin recurrir directamente al juez.

Pero quiero rescatar algo que ha sido práctica social del pueblo argentino. Evidentemente, el cambio de la sociedad rural a la urbana ha determinado modificaciones sustanciales en la familia argentina. Creo que nadie puede olvidar algo que seguramente debe recordar el más joven de los aquí presentes: hasta hace no muchos años existían dentro de la sociedad argentina quienes resolvían los conflictos de esta naturaleza evitando la instancia del Estado. Cuando las familias se componían de tres generaciones, y no de dos como ahora, se recurría a la opinión de los ancianos; es decir, la opinión del abuelo tenía gran importancia. Por eso, cuando no se los recluía en los asilos opinaban sobre estos temas trascendentes, dirimiendo así conflictos que se presentaban. Y cuando faltaba esta opinión —fruto de la experiencia humana acumulada en la tercera generación— también se recurría al maestro, al sacerdote o al hermano mayor.

En definitiva, la sociedad tenía autoridades sociales a quienes se podía recurrir, sin necesidad de solicitar la intervención del Estado, dentro del marco de la privacidad que este tipo de cuestiones tiene.

Desgraciadamente, en la sociedad moderna se ha ido perdiendo este grado de autoridad social, como también se ha ido perdiendo la autoridad en sí misma buscando reemplazarla por el poder, cuando éste, en realidad, es una autoridad sin ética. La autoridad, en todo caso, es un poder al que se le agrega la ética.

Por estas consideraciones —buscando una solución que evite la intervención del Estado den-

tro de la gran mayoría de las familias y reservando a esa intervención un papel de subsidiariedad— en su momento haré una propuesta para evitar que ciertas cuestiones lleguen a la instancia judicial.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Bodo. — Señor presidente: los señores diputados Arbolaza y Deballi y la señora diputada Guzmán han sostenido en este recinto que consideran prudente, adecuado y propicio que en los casos en que exista separación de los esposos ejerza la patria potestad con amplitud aquel que tenga la tenencia del hijo.

En este sentido, adhiero a esta tesis. Por otra parte, la señora diputada integrante de la comisión informó que es necesario resguardar la igualdad de los padres. Pero la igualdad no es un concepto absoluto sino relativo. La igualdad se da entre los iguales y no entre los desiguales. De allí que hay que separar lo que es separable. Por un lado están los progenitores convivientes y por otro están aquellos que por divorcio, separación de hecho u otra causa, no conviven, por lo cual se le ha atribuido a uno de ellos la tenencia del menor. Desde el momento en que ese progenitor ejerce la tenencia, y por ende la patria potestad, hay que permitirle que asuma en plenitud las responsabilidades de las decisiones que se vinculan con el bienestar del menor.

También debemos tener en cuenta que si se requiriera además el consentimiento de aquel progenitor que no ejerce la tenencia, por razones de enemistad o de resentimientos propios de los hechos que motivaron la separación, puede suscitarse una oposición obstinada que haga necesaria la intervención de la justicia en forma permanente. Por ello es que conceptúo que en consideración a la igualdad, en su concepción estricta, al progenitor que tiene a su cargo la tenencia debe dársele la totalidad de las facultades vinculadas con la patria potestad y con la autoridad respecto de su hijo, sobre el cual lleva a cabo una tarea de dirección familiar permanente. Ese progenitor es el que está mejor facultado para determinar con seriedad y responsabilidad lo que más conviene para su hijo.

Sr. González Cabañas. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. González Cabañas. — Señor presidente: antes de manifestar mi adhesión al concepto de patria potestad compartida, tal como aparece en el proyecto del Poder Ejecutivo y en el dictamen de la comisión, quisiera formular una pregunta a la señora diputada Gómez Miranda.

Aquí se ha manifestado que la expresión "patria potestad" es arcaica, pues representa la antigua tradición romana de la familia.

Sra. Gómez Miranda. — ¿Me concede una interrupción, señor diputado?

Sr. González Cabañas. — Sí, señora diputada.

Sra. Gómez Miranda. — Deseo preguntar al señor diputado si se está refiriendo al artículo 3º, que ya fue votado.

Sr. González Cabañas. — Simplemente quisiera saber cuál es la posición de la mayoría acerca de continuar utilizando las expresiones "patria potestad" en una parte y "autoridad de los padres" en otra, puesto que aquí se ha dicho que aquél es un concepto que hay que desterrar, ya que debemos tender hacia una legislación moderna.

Quisiera saber en virtud de qué criterio se continúan utilizando los términos "patria potestad" en los artículos 264 ter y 307, entre otros.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Gómez Miranda. — Parecería que a los miembros de la comisión que hicimos el despacho de la mayoría se nos está sometiendo a una absolución de posiciones. No obstante, aclaro al señor diputado que hemos mantenido en una primera referencia la expresión "autoridad de los padres o patria potestad" a fin de que quede bien claro, por si alguien todavía no lo comprendió, que de allí en adelante sólo hablaremos de la autoridad de los padres y no de patria potestad. Ya hemos solicitado que en todos los otros casos donde figure "patria potestad" debe decir "autoridad de los padres" —o "autoridad", en su caso—, con lo cual se guarda coherencia con la denominación del título que hemos sustituido.

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. González Cabañas. — En el tema de la patria potestad podemos observar la existencia de tres grandes líneas de acción: una es la patria potestad tradicional, otra es la indistinta y la tercera es la compartida.

Aquí se ha hecho referencia a la línea de la patria potestad indistinta y se ha dicho que este instituto permitiría la equiparación total de los derechos del hombre y la mujer.

Bien ha dicho la señora diputada preopinante, al referirse a la patria potestad compartida, que con ello se tiende a la protección del menor, a la igualdad jurídica de la mujer y a la unidad familiar. Pienso que el artículo 264 bis hace mayor referencia a la organización familiar.

El enfoque de la patria potestad no puede ser el de una simetría jurídica porque de ninguna manera y bajo ningún aspecto se ataca la igualdad jurídica del hombre y la mujer —principio que todos sostenemos—, pues lo que se persigue es la protección del niño y de la organización familiar.

Si pensamos que dentro de una organización familiar es factible que decisiones importantes determinen una línea irreversible en la conducta o en los intereses del menor, en el caso de la patria potestad indistinta daríamos prioridad al padre más veloz, al más activo, y el menor se convertiría en un campo de Agramante en las relaciones entre los cónyuges.

La ex presidente constitucional señora María Estela Martínez de Perón vetó el proyecto de ley que sancionaba justamente la patria potestad indistinta por considerar que atentaba contra la armonía familiar, que era una institución extraña a nuestras costumbres y que en definitiva no hacía un bien a la familia argentina. ¿Por qué el veto de nuestra ex presidente constitucional manifestaba que la norma iba en contra de la armonía familiar y era extraña a nuestras costumbres? Porque indudablemente la patria potestad tiene como objetivo la organización familiar —que algunos la entienden como organización democrática mientras que otros creemos que es una organización natural— en donde el padre, la madre y el hijo constituyen una unidad vital y primigenia de todo núcleo social. Por eso creemos que la patria potestad compartida, por medio de la cual se dan los mismos derechos al padre y a la madre, se ajusta más a la realidad social y cultural de los argentinos, a la tradición de nuestros hogares y a la formación que deseamos para nuestra sociedad y nuestros hijos. De ahí entonces que nos oponemos a la patria potestad indistinta y sí sostenemos la patria potestad compartida.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el texto propuesto por la comisión como artículo 264 del Código Civil conforme a la redacción de la que se ha dado lectura por Secretaría.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto como artículo 264 bis del Código Civil.

¿La comisión propondrá una modificación con respecto al artículo 264 bis?

Sr. Terrile. — Así es, señor presidente.

En atención a una serie de sugerencias formuladas por algunos diputados con respecto a eventuales casos en los que mediere imposibi-

lidad para traer a uno de los padres a prestar el consentimiento expreso que establece el artículo 264 bis, decidimos en la reunión de comisión de esta mañana hacer un agregado al final del artículo referido.

Me voy a permitir leer el último párrafo del artículo 264 bis de nuestro despacho original: “En todos estos casos —se hace referencia a los actos que el mismo artículo enumera taxativamente en el párrafo anterior—, si uno de los padres no diera su consentimiento, o mediare imposibilidad para traerlo, resolverá el juez lo que convenga al interés del menor y a la unidad familiar”. Hay situaciones que se presentan en algunos pueblos de provincias que nos han movido a introducir un agregado en el sentido de no exigir la instancia judicial en tales supuestos dando la posibilidad de satisfacer los recaudos legales mediante la certificación de la tenencia.

Voy a solicitar, señor presidente, que por Secretaría se lea el último párrafo del artículo 264 bis tal como quedaría redactado con la incorporación de un agregado que propone la comisión precisamente para contemplar las situaciones a las que acabo de hacer referencia.

Sr. Presidente (Pugliese). — Por Secretaría se va a dar lectura del texto propuesto por la comisión como último párrafo del artículo 264 bis.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así: “En todos estos casos, si uno de los padres no diera su consentimiento, o mediare imposibilidad para traerlo, resolverá el juez lo que convenga al interés del menor y a la unidad familiar. Si mediare imposibilidad de hecho ostensible y excepcional para obtener el consentimiento de uno de los progenitores, acreditada por información sumaria ante el juez del lugar, será suficiente la autorización de quien tiene consigo al hijo”.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Conte. — Señor presidente: una vez más deseo agradecer a la comisión, que esta mañana nos permitió a varios diputados intervenir en relación a este tema con la necesaria prolijidad. Allí llevamos la preocupación que señalara también el señor diputado Terrile y el intercambio de opiniones que se produjo resultó particularmente enriquecedor. En tal oportunidad pudimos aprovechar asimismo la presencia del doctor Zannoni, quien es profundo conocedor de esta iniciativa por haber sido uno de sus inspiradores; él pudo inmediatamente percibir nuestra preocupación, corrigió algunas de las sugerencias que formuláramos y básicamente concordó el texto que acaba de ser leído por Secretaría.

Es importante destacar que efectivamente hay dos aspectos principales que han sido tenidos en cuenta al proponerse este agregado.

En primer lugar —como lo mencionara el propio miembro informante— está el reconocimiento de que una gran cantidad de compatriotas mujeres, en zonas marginales o alejadas aunque a veces no tanto, se encuentran abandonadas por sus esposos o compañeros y consiguientemente carecen de medios como para llegar a un tribunal para que resuelva divorcios, adjúque tenencias, etcétera. Nuestra legislación debe contemplar este estado de marginalidad que desgraciadamente involucra a muchas más personas de las que hubiéramos pensado, de manera particular por la situación de miseria que nos legaran, lo que viene a agravar aún más este dramático cuadro.

Otra situación que también se tuvo en cuenta —por supuesto que de muchísima menor significación numérica pero que igualmente constituye una preocupación central para nosotros— es la de las esposas de desaparecidos.

El señor diputado Terrile sugirió en el seno de la comisión que se agregara la fórmula "osensible y excepcional" para incluir allí esos casos. En la medida en que no sean controvertidos por la comisión, mis palabras pretenden contribuir a aclarar el universo de los casos que fundamentalmente han sido tenidos en cuenta al proponerse el agregado de que se acaba de dar cuenta por Secretaría.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Salduna. — Sin perjuicio de coincidir en tanto a la redacción general del artículo, deseo plantear algunas dudas que me surgen respecto de las dificultades prácticas que involucraría la aplicación de la norma.

Aclaro que estas dudas e inquietudes las he planteado oportunamente en la comisión, de la que formo parte. Pero quiero replantearlas aquí en los efectos de que entre todos los señores diputados tratemos de encontrar la mejor solución al problema.

El primer párrafo del artículo 264 bis dice que en caso de disenso resolverá el juez, "los padres y el menor adulto", y aquí plantea una especie de obligación, por la imposición de carácter imperativo, en el sentido de que el juez debe oír al menor adulto. Y me pregunto si significará también la imposibilidad para el juez de oír al menor cuando no es adulto. El tema quedará a decisión del juez, o es una prohibición absoluta la que aquí se dispone?

Otro tema que quiero plantear es el referido a los casos en que es necesario el consentimiento conjunto de los progenitores en forma expresa e ineludible. Entiendo que al sancionar esta ley daremos un paso importante en el campo de la igualdad de los derechos del hombre y la mujer; pero debemos ser conscientes de que esta igualdad puede traer también dificultades prácticas por la multiplicación de juicios debida a las ocasiones en que los padres tengan que recurrir al juez.

El espíritu de esta ley es que deberá recurrirse a la instancia judicial o prejudicial o a cualquier recurso formal solamente en caso extremo. De modo que debemos legislar en ese sentido tratando de que, en lo posible, la ley se simplifique y se limite al máximo la instancia en que tenga que recurrirse al juez. Por eso, los incisos que se refieren a la autorización conjunta deben limitarse a los casos o actos de naturaleza irreversible o definitiva. Tales son los ejemplos de la autorización para contraer matrimonio y en algún sentido también la emancipación por habilitación de edad o la disposición de bienes del menor cuando hay intereses de terceros de por medio.

Sin embargo, hay otros casos que plantean dificultades prácticas y que quiero traer a colación a efectos de que la Cámara se aboque a encontrarles solución. En primer lugar, voy a plantear el tema al que alude el punto 3, vale decir, el de la salida del territorio nacional. He tenido una amplia experiencia como abogado que vive y ejerce su profesión en zonas de frontera, en las cuales es habitual la salida transitoria del territorio nacional de las familias con sus hijos menores de edad. Por eso creo que el sistema instituido crea, en definitiva, más dificultades prácticas que soluciones. En el otro sistema el padre tenía la posibilidad de salir del territorio nacional, en detrimento de los derechos maternos, pues la madre no podía hacerlo sin autorización. En adelante —y éste es un tema que he consultado con defensores de menores, que han sido coincidentes en el sentido de que esta disposición, lejos de solucionar problemas, los multiplicará— la prohibición que tenía la madre para salir con su hijo menor de edad del territorio nacional, en lugar de desaparecer, se extenderá también al padre. Es decir que los pedidos de autorización, en lugar de terminar, se duplicarán.

Pienso que esta disposición debería referirse a las salidas definitivas del territorio nacional, aunque se plantee la dificultad práctica de la salida temporaria que luego puede transfor-

marse en definitiva. Esa dificultad, en realidad, no existió, y puede solucionarse por medio de las disposiciones migratorias o aduaneras. En consecuencia, propongo que esta disposición se elimine para el caso de salidas transitorias del país, que es un hecho muy frecuente para los que vivimos en zonas de frontera.

En cuanto a la autorización conjunta para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad, si fueran menores de dieciocho años, coincide con lo expresado por el diputado Arabolaza en el sentido de que esta disposición no tiene mayor razón de ser. Incluso en algunos aspectos la considero una rémora de épocas pasadas, en las cuales el enclausamiento de una mujer en un convento o la internación de un hijo en institutos militares revestía caracteres definitivos e irrevocables, cosa que no ocurre en la actualidad.

Ante todo, si fueran menores de dieciocho años sería difícil que pudieran ingresar en las fuerzas armadas o de seguridad; por lo demás, en cuanto a la aplicación práctica de esa disposición, no advierto en definitiva el sentido lógico de que, mientras uno solo de los padres puede autorizar, por ejemplo, que su hijo menor de dieciocho años trabaje en una mina de carbón, a doscientos metros de profundidad y manejando dinamita, no pueda en cambio autorizarlo a ingresar a un liceo militar que es un instituto dependiente del Ministerio de Educación y Justicia y en donde las condiciones en las cuales se desempeñaría el menor serían de menor riesgo.

Igualmente, deseo plantear una objeción al punto 5 del artículo 264 bis, que habla de la disposición de los bienes inmuebles, muebles y derechos registrables del menor. En primer lugar, entiendo que la redacción misma es defectuosa, ya que por bienes inmuebles y muebles se podría entender que se requerirá el consentimiento de ambos progenitores para vender una bicicleta o un juguete del menor. Creo que si en lugar de ello se hablara de "bienes registrables" se podría obviar esa mención de bienes inmuebles y muebles, distinción en la que también advierto el peligro de que, mientras ambos padres deben dar su consentimiento para la enajenación de bienes inmuebles, por el contrario uno solo de los padres puede dar su consentimiento para gravar dichos bienes con hipotecas, por ejemplo.

Paso ahora a considerar las modificaciones que este proyecto introduce en los artículos 297 y 298 del Código Civil. En estos casos advierto asimismo la incoherencia y el peligro de que se

autorice a que uno solo de los padres pueda enajenar todos los ganados de un menor o hacer remisión voluntaria de sus derechos.

Por último, deseo referirme a lo atinente a la imposición del nombre del menor. En la reforma propuesta al actual texto de la ley 18.248 se habla de que la imposición del nombre del menor es facultad de los padres. A ese respecto, quisiera que en primer lugar se me aclare si también en este caso se requiere la autorización expresa de ambos progenitores. Si ello no fuera así, pudiendo hacerlo directamente uno de los padres y presumiéndose el consentimiento del otro, me pregunto de qué forma, en qué momento y de qué manera podrá ejercer el otro su derecho dado que, en definitiva, la anotación del nombre del menor en las actas del registro civil es un acto de carácter definitivo, y en algunos sentidos, irrevocable.

Estas son algunas de las dificultades prácticas que quiero señalar con respecto a la redacción en tratamiento. Voy a dejar planteadas estas inquietudes a los efectos de que se busque alguna solución a los problemas que he presentado. De cualquier manera, pienso que la solución definitiva estará dada por la creación de los tribunales de familia ya que, si bien se quiere limitar la intervención judicial al máximo, muchas de las modificaciones que se proponen la harán más necesaria.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿La comisión acepta los planteos que se han efectuado?

Sra. Gómez Miranda. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arabolaza. — Señor presidente: considero que el consentimiento de los dos padres a los menores que desearan contraer nupcias debe exigirse hasta la edad de dieciocho años. Si pensamos que tendremos que otorgar la mayoría de edad a partir de los dieciocho años, resulta exagerada la exigencia del doble consentimiento para quienes quieran contraer nupcias y tengan entre dieciocho y veintiún años. En consecuencia, concretamente propongo que a la expresión "autorización para contraer matrimonio" se agregue: "en el supuesto de ser menor de dieciocho años quien o quienes lo soliciten".

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Horta. — Señor presidente: deseo hacer dos propuestas a la comisión. La primera es de carácter formal y consiste en reemplazar la expresión "patria potestad", que figura en el segundo párrafo del artículo, por la de "autoridad

de los padres". En homenaje a la brevedad voy a dejar fundada mi posición con lo expresado en el día de ayer.

Por otro lado, propongo que se agregue un sexto punto a los que requieren el acuerdo expreso de ambos progenitores, que expresaría lo siguiente: "autorización para el ingreso a establecimientos educacionales de cualquier nivel si fueran menores de dieciocho años". Fundo esta iniciativa en el hecho de que la elección de los establecimientos educacionales es un acto trascendente y, en consecuencia, debe respetarse la opinión de ambos progenitores, cualquiera sea la relación de convivencia que exista entre ellos.

No resulta superfluo recordar en este momento lo delicado del tema y lo conflictivo que puede llegar a ser la elección de un establecimiento escolar para el hijo. En la sociedad argentina, dadas sus características abiertas, se han celebrado con frecuencia matrimonios entre personas pertenecientes a distintas creencias religiosas; incluso existen casos en que alguno de los cónyuges no profesa religión alguna. Esta situación es propia de los países que recibieron una inmigración aluvional; tal es el caso de nuestro país, verdadero crisol de razas. Ello determinó en nuestra patria una sociedad pluralista cada vez más desarrollada en la medida en que fue incorporando en su seno a grupos humanos de distintos orígenes. Esta característica histórica debe ser preservada, no sólo por ser justa y democrática sino porque ella es la llave maestra de la recepción futura de nuevos contingentes que el país obviamente necesita por su problemática demográfica.

La actual realidad nacional nos indica que un 15 por ciento de la población, esto es casi cinco millones de argentinos, no profesan la religión mayoritaria. Bien puede darse el caso, entonces que frente a un matrimonio constituido por cónyuges de distintas religiones o donde uno de los esposos no profese religión alguna, el otro cónyuge intentara imponer sus propios conceptos con el objeto manifiesto, aunque no sea más que por una acción subliminal, de inclinar al hijo hacia una determinada fe.

La norma legal debe estimular a que ambos padres, aun disuelto el matrimonio, tomen en forma conjunta la decisión de educar a sus hijos y en dónde hacerlo según un criterio común.

Inclusive estando uno de los cónyuges en posesión de la tenencia, debe considerarse que el nuevo orden del que participamos, basado en la democratización de la familia, debe pro-

pender a que aunque se disuelva el vínculo matrimonial se respete la integridad familiar que queda: el hijo.

De ahí que he afirmado tantas veces que la tenencia, en orden a este concepto de democracia y participación, nunca es absoluta y siempre debe ser conjunta. A esto apuntamos cuando proponemos la expresa y conjunta autorización de ambos padres para el ingreso a un instituto educacional de cualquier nivel.

Por otra parte, también he dicho muchas veces que el Estado debe educar para la democracia e instruir para la liberación del hombre.

Yo me pregunto: si esto es cierto, ¿no debemos estimular que el padre y la madre en forma conjunta, al unísono, velen por la formación de ese hombre que el día de mañana integrará la futura falange de la patria?

Indudablemente, el legislador tiene la obligación de promover esa concurrencia en beneficio del interés del menor. Estas son, expuestas en manera sumaria, las razones que me han llevado a proponer a la comisión la incorporación de este nuevo inciso.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿La comisión acepta?

Sra. Gómez Miranda. — La comisión no acepta el agregado propuesto por el señor diputado Horta. Según ya lo he manifestado, acepta en cambio la restitución de los términos "patria potestad" por "autoridad de los padres" en el segundo párrafo del artículo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: en la primera parte del artículo 264 bis se plantea una cuestión importante referida al sistema de la patria potestad: ¿quién resuelve en caso de disidencia? Algunos legisladores se han inclinado porque resuelva el padre, mientras que otros optan porque la decisión corresponda al juez. Yo adhiero a la segunda posición, que es la que adopta el presente proyecto, aunque como principio es dable alentar la menor intervención judicial en los asuntos de familia.

Pienso que la solución que contempla el proyecto se impone por dos razones: en primer lugar, por el interés de los hijos, pues si el poder decisorio se otorga al padre significaría atribuirle un elemento de presión, que dada la sobrecarga emocional que hay en toda situación de desacuerdo puede ejercerse más en contra del otro cónyuge que en favor del interés del hijo.

La ley tiene que prever ese riesgo y neutralizarlo, dando el poder decisorio a una autoridad imparcial, como es el juez de menores.

La otra razón por la cual adhiero a esta posición es justamente el fortalecimiento de la relación de los padres. Estoy hablando siempre de los casos en que no hay separación.

Mencioné el fortalecimiento de la relación de los padres pues la posibilidad de que un problema que les es común escape a ellos los va a obligar a revisar sus planteos, tratando de extremar sus esfuerzos para llegar a una solución y dar así una salida armónica.

Si no es posible que lleguen a un acuerdo, quiere decir que hay un deterioro tan profundo en esa relación que corresponde entonces que resuelva el juez, ya que esa comprobada situación de crisis se agravará aún más si se da a uno de los cónyuges el privilegio de resolver sobre el otro. En cuanto a los casos de separación mantengo lo dicho anteriormente.

Quiero plantear un problema que se relaciona con el acuerdo expreso de ambos progenitores que es necesario para los actos previstos en el artículo 264 bis propuesto. ¿Qué es lo que sucede en caso de que haya que someter al menor a una intervención de cirugía mayor o menor o a un transplante? Actualmente, de acuerdo con el régimen vigente la decisión la tiene el padre, pero de acuerdo con lo que se está sustentando en esta sesión y con el dictamen de la mayoría entiendo que el caso que planteo debe ser incluido como un nuevo inciso del artículo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Gómez Miranda. — Señor presidente: la comisión mantiene el texto del artículo 264 bis tal cual ha sido redactado, admitiendo únicamente la sustitución de los términos "patria potestad".

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: quisiera que la señora miembro informante me diga cómo se resuelve el caso que he planteado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Gómez Miranda. — Señor presidente: la inquietud de la señora diputada se resuelve muy fácilmente: si los cónyuges están unidos, cualquier acto que ejerza uno de ellos se supone que tiene el consentimiento del otro; si están separados, el que tiene la tenencia del hijo ejercerá la patria potestad.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. González Cabañas. — Señor presidente: reitero la opinión que expresé en el día de ayer

con relación al tema del disenso y a efectos de abreviar el debate me remito a los fundamentos que expuse. Por lo tanto, ratifico la posición que he sustentado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el texto propuesto como artículo 264 bis del Código Civil con el agregado que propone la comisión y la sustitución de los términos "patria potestad" por "autoridad de los padres".

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto como artículo 264 ter del Código Civil.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Horta. — Señor presidente: deseo proponer algunas modificaciones formales, que consisten en sustituir los términos "patria potestad" por "autoridad de los padres" o "autoridad", según corresponda en cada caso.

El artículo 264 ter quedaría redactado así: "Los derechos inherentes a la autoridad de los padres no corresponden al progenitor que no haya reconocido voluntariamente al hijo, pero aquél queda sujeto a la prestación alimentaria y demás obligaciones derivadas de dicha autoridad.

"En caso de muerte de uno de los progenitores, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la autoridad de los padres o suspensión de su ejercicio, corresponde al otro ejercerla en forma exclusiva. Cuando ambos progenitores sean incapaces o estén privados de la autoridad o suspendidos en su ejercicio, los hijos menores quedarán sujetos a tutela. Si los padres de un hijo fueren menores no emancipados, se preferirá a quien ejerza la autoridad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, subsistiendo en tal caso esa tutela aun cuando el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad, salvo que a petición de éste el juez le discierna el ejercicio de la autoridad".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿La comisión acepta?

Sr. Terrile. — Sí, señor presidente.

Además, señor presidente, si se me permite, y a efectos de no interrumpir en cada caso la consideración de los diversos artículos, adelantaré en nombre de la comisión la forma en que deben sustituirse los términos "patria potestad" en las disposiciones que resta considerar.

En los textos propuestos en sustitución de los artículos 306, 308 y 309 (primer párrafo) del Código Civil, en lugar de "patria potestad" se dirá "autoridad de los padres". En el caso de

los artículos 287, 294, 307, 309 (segundo párrafo) y 310 del Código Civil, y del artículo 13 de la ley 10.903, los términos "patria potestad" serán sustituidos simplemente por "autoridad".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Y con respecto a los artículos ya aprobados?

Sr. Terrile. — En los artículos ya aprobados se ha adoptado la redacción que corresponde.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Secretaria tendrá en cuenta lo indicado por el señor diputado Terrile en nombre de la comisión.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Salduna. — Señor presidente: tengo una duda en cuanto al segundo párrafo del artículo 264 ter, en la parte que se refiere a la ausencia con presunción de fallecimiento.

¿Se limitan estos casos a la ausencia con presunción de fallecimiento declarada judicialmente o acaso puede extenderse a la simple ausencia?

Sr. Terrile. — La ausencia con presunción de fallecimiento debe ser declarada siempre judicialmente.

Sr. Salduna. — ¿Pero qué ocurre en los casos de simple ausencia? Por ejemplo, el señor diputado Conte hoy planteó el tema de los miles de desaparecidos. En esos casos, no hay ausencia judicialmente declarada.

Sr. Terrile. — Dentro de las disposiciones de filiación y, fundamentalmente, dentro de estos dos artículos, 264 y 264 bis, se habla precisamente de circunstancias en donde el padre no está y, por lo tanto, quien ejerce la tenencia tiene el ejercicio de la autoridad de los padres. Es decir que aquel particular que ante la simple ausencia se niegue a iniciar el trámite judicial —obsérvese que no hablamos de tenencia judicial, sino de simple tenencia— estaría en todo caso autorizado para ejercer la autoridad de los padres. No hablamos tampoco de divorcio, sino de separación de hecho. No hablamos —insisto— de tenencia judicial, sino simplemente de tenencia.

Creo que interpretando correlativa y ordenadamente el articulado daremos solución a la inquietud del señor diputado Salduna.

Sr. Salduna. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Salduna. — Deseo hacer una proposición con respecto a la última parte del artículo 264 ter a efectos de lograr una más correcta redacción. Propongo sustituir la parte que comienza con: "Si los padres de un hijo fueren menores no emancipados...", por la siguiente: "Si los padres de un hijo fueren menores no emancipa-

dos, se preferirá como tutor a quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores menores de edad que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado..." y el resto del artículo quedaría exactamente igual. Creo que de esta forma el texto es mucho más claro, ya que la redacción anterior es un poco confusa.

Sr. González Cabañas. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pugliese). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. González Cabañas. — Sugeriría que el señor diputado Terrile aplicara con sus pares radicales el mismo criterio utilizado con la señora diputada Guzmán y otros colegas de distintos orígenes políticos, en el sentido de recordarle que ayer el diputado Stubrin pidió que nos reuniéramos hoy a las 9 de la mañana para analizar y compatibilizar las diferencias de manera de evitar este trabajo técnico en la sesión.

Por lo tanto pido al diputado Terrile que aplique con los radicales el mismo criterio y les recuerde aquello que le recordó a la diputada Guzmán, de modo de seguir trabajando dentro del sistema que ayer acordamos. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Comparto la inquietud del señor diputado González Cabañas, pero no puedo ser compulsivo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Debo preguntar al señor miembro informante si se mantiene el criterio de la comisión.

Sr. Terrile. — Sí, señor presidente. Insistimos en la redacción del artículo 264 ter tal cual aparece en el despacho de la comisión, con la aclaración de que aceptamos la sustitución de los términos "patria potestad" en la forma indicada por el señor diputado Horta.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Varias veces pedí la palabra, pero seguramente esta circunstancia no fue advertida. Esta mañana sugerí la redacción que considero más conveniente para este artículo 264 ter. Según mi criterio, las normas jurídicas deben ser expresas y no implícitas.

No obstante lo que me expresara en el día de hoy la señora diputada Gómez Miranda —sostenía que la situación que voy a plantear estaba tratada en otro artículo—, creo que el proyecto que estamos considerando no contempla expresamente el caso del hijo que tiene el reconocimiento de un solo padre y, además, en todo momento legisla en orden a la patria potestad y a la autoridad paterna compartida.

Es evidente que si un solo progenitor reconoce al hijo, él será quien ejerza la patria potestad, pero la ley debe decirlo.

Para ser breve, señor presidente, sugiero que en el segundo párrafo del artículo 264 ter se intercale que en caso de falta de reconocimiento de uno de los padres, por muerte de uno de los progenitores, ausencia con presunción de fallecimiento, etcétera, corresponde al otro ejercerla en forma exclusiva.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿La comisión acepta esta modificación?

Sr. Terrile. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el texto propuesto como artículo 264 ter del Código Civil.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda aprobado el artículo 4º del proyecto. En consideración el artículo 5º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 6º y 7º.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Me permito indicar al señor secretario de la comisión, primer firmante del despacho de mayoría, que al considerarse el artículo 282 del Código, que es uno de los que se sustituyen en virtud del artículo 5º del proyecto, se había admitido expresamente una modificación que no ha mencionado. Se había convenido hacer coincidir la redacción del artículo 282 con el 272, que dice: "... podrán ser demandados por la prestación de alimentos o por el propio hijo si fuese adulto ...".

Esta mañana mencioné en la comisión el caso del derecho civil de Suecia, que acuerda ciertas facultades a los hijos menores no adultos, lo que determina un elemento de disgregación de la familia.

Acepto que el hijo pueda estar en contraposición con los intereses del padre para iniciar un juicio a terceros, pero siempre y cuando se trate de un menor adulto; no lo admito en el caso de que el hijo no lo sea, porque creo que allí debe predominar la autoridad paterna y materna, y esto se había aceptado en la reunión que celebrara esta mañana la comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Es cierto lo que señala el señor diputado Stolkiner en el sentido de que con res-

pecto al artículo 282 habíamos conversado en la comisión sobre la posibilidad de hablar del menor adulto en lugar de utilizar la palabra "hijo". Esa sería la única modificación que habría que hacer: sustituir el término "hijo" que aparece en el segundo renglón por la expresión "menor adulto".

Solicito la reconsideración del texto aprobado en sustitución del artículo 282 del Código Civil.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — En el día de ayer se resolvió que como cada artículo del proyecto de ley que consideramos contiene gran cantidad de artículos del Código, cada uno de ellos sería tratado separadamente.

Si la Honorable Cámara considera que el artículo 5º está definitivamente aprobado y la comisión entiende que esto no tiene importancia y que no debe cambiarse la palabra "hijo" por la expresión "menor adulto", no insistiré con mi planteo.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia ha creído aplicar el criterio que había adoptado la Cámara. Como al someterse a votación el artículo 5º ningún diputado formuló observaciones ni pidió la palabra, lo consideró aprobado *in totum*.

Se va a votar la moción de reconsideración del texto aprobado en sustitución del artículo 282 del Código Civil.

Se requieren dos tercios de los votos.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Está nuevamente en consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 282 del Código Civil.

Si no hay otras observaciones, se va a votar si se aprueba dicho texto con la modificación consistente en reemplazar los términos "consentimiento al hijo" por "consentimiento al menor adulto", que ha sido aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sra. Guzmán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Quisiera volver al texto propuesto en el artículo 7º del proyecto en sustitución del artículo 1.114 del Código Civil. En la reunión de comisión hemos hablado sobre este problema y se me ha sugerido que propusiera una modificación con respecto a si la responsabilidad de los padres debe ser o no solidaria. En consecuencia, formulo moción de reconsideración del texto que he mencionado.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración la moción formulada por la señora diputada por Jujuy de que se reconsidere el texto propuesto en el artículo 7º del proyecto en sustitución del artículo 1.114 del Código Civil.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se requieren dos tercios de votos.

— Resulta negativa.

Sr. Stolkiner. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — En la reunión de comisión de esta mañana también conversamos sobre la posibilidad de corregir la defectuosa redacción del texto propuesto por el artículo 5º del despacho en sustitución del artículo 310 del Código Civil. Quisiera fundamentar una moción de reconsideración con respecto a ese artículo.

Sr. Presidente (Pugliese). — El artículo 5º del dictamen ya fue considerado y votado, e incluso ya hubo una reconsideración. ¿El señor diputado quiere volver a considerarlo en una tercera instancia?

Sr. Stolkiner. — Señor presidente: me mueve el propósito de que la ley salga bien. La comisión había aceptado una sugerencia con respecto al texto que quiero volver a considerar. En una sesión tan prolongada, se nos ha pasado algo fundamental debido al cansancio que ella nos ha producido.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia considera que no se trata de cansancio, sino de cierta falta de prolijidad.

Sr. Stolkiner. — Pido excusas a la Presidencia, pero tengo que volver sobre un asunto que, como lo sabe el miembro informante, es fundamental.

El texto propuesto como artículo 310 confiere la tutela de los hijos cuya patria potestad ya no ejercen los padres al patronato del Estado nacional o del provincial, pasando sobre todos los antecedentes legales e ignorando al abuelo, al tío y a todos los parientes que tienen derecho.

A los efectos de remediar el defecto que he señalado había propuesto a la comisión que se estableciese que los menores quedan bajo el patronato del Estado nacional o provincial sólo cuando no se da el caso de tutela legal por parientes consanguíneos idóneos en orden de grado excluyente. Creo que la comisión había aceptado esta modificación. Me mueve el propósito de que no incurramos en un error.

Sr. Presidente (Pugliese). — Aunque el trámite seguido por este honorable cuerpo tendrá seguramente una apariencia poco lucida por el hecho de formularse otra moción de reconsideración del

artículo 5º luego de haberse tratado una moción similar respecto del artículo 7º, la Presidencia debe someter a consideración de la Honorable Cámara las propuestas efectuadas por los señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Sobrino Aranda. — Señor presidente: el artículo 5º ha sido sometido a votación en dos oportunidades. En la primera, se había producido una omisión. El momento en el que se pidió la reconsideración del artículo 5º era la oportunidad adecuada para hacer cualquier otra observación vinculada con ese mismo artículo, por lo cual solicito que no se haga lugar a esta otra reconsideración.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia acepta el criterio sustentado por el señor diputado Stolkiner, porque se considera responsable de no haber seguido la metodología adoptada en el día de ayer, en que no estuve presente. Es por esa razón que procedo con tolerancia, ya que de haberse considerado artículo por artículo esto no habría ocurrido.

De todas maneras, como no hay ninguna disposición en el reglamento que impida someter a votación un pedido de reconsideración, no queda otro camino que proceder de este modo.

Se va a votar si se reconsidera el artículo 5º del proyecto.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde considerar nuevamente el texto aprobado en sustitución del artículo 310 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Señor presidente: la comisión comparte el planteo formulado por el señor diputado Stolkiner, porque evidentemente se ha deslizado un error de transcripción, ya que precisamente a lo que tiene que hacer referencia la tutela es a lo expresado por el señor diputado preopinante. De manera que la comisión acepta su propuesta.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Cómo quedaría redactado el artículo, señor diputado?

Sr. Stolkiner. — Señor presidente: la segunda parte del artículo 310 del Código Civil diría lo siguiente: "En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, los menores quedarán bajo el patronato del Estado nacional o provincial".

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el texto propuesto en sustitución del artículo 310

del Código Civil con la modificación que acaba de proponer el señor diputado Stolkiner y que ha aceptado la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Señor presidente: quisiera que la comisión aclarara si está bien redactado el inciso 6º del artículo 306, porque como dice "Por dar en adopción los hijos", el solo hecho de darlos en adopción haría perder la patria potestad. Pero puede suceder que no haya una sentencia dictada que determine la adopción. En consecuencia, habría un período de tiempo en que se operaría la pérdida de la patria potestad y el menor permanecería aún sin ser adoptado. Por eso entiendo que es más correcto decir "Por la adopción de los hijos".

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Señor presidente: creo que donde no hay controversia es respecto de la expresión "dar en adopción". Es decir, se trata del desprendimiento de la criatura, dándola en adopción, que es una de las causales que está contemplada en la ley de adopción, por lo que luego la madre no puede solicitar que se le restituya el hijo. O sea, la comisión entiende que debe permanecer la expresión "dar en adopción", tal cual figura en el inciso 6º.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Señor presidente: la segunda inquietud que planteo se refiere al artículo 309, en el cual interpreto que debe incorporarse la inhabilitación prevista por el artículo 152 bis, incisos 1º y 2º del Código Civil.

La segunda frase del primer párrafo del artículo 309 quedaría redactada de la siguiente forma: "También queda suspendido en caso de interdicción de alguno de los padres, o de inhabilitación según el artículo 152 bis, incisos 1 y 2, hasta que sea rehabilitado, y en los supuestos establecidos en el artículo 12 del Código Penal".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Terrile. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si no se formulan otras observaciones, se va a votar el texto propuesto en sustitución del artículo 309 del Código Civil, con las modificaciones sugeridas por el señor diputado Fappiano y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Terrile. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Ya que estamos reconsiderando el artículo 5º del proyecto, con referencia al texto aprobado en sustitución del artículo 367 del Código Civil quiero señalar una cuestión de puntuación solamente, para corregir un error que se ha deslizado en el impreso que obra en las bancas de los señores diputados.

El segundo apartado del primer párrafo del artículo 367 debe decir: "(2) Los hermanos y medio hermanos."; y lo siguiente debe figurar aparte, como último párrafo del artículo: "La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca".

Sr. Presidente (Pugliese). — Si no se formulan otras observaciones, se va a votar el texto propuesto en sustitución del artículo 367 del Código Civil, con la aclaración formulada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Finalmente, solicito que se reconsideren los textos aprobados por el artículo 5º en sustitución de los artículos 272 y 297 del Código Civil.

En el artículo 272 debe suprimirse la conjunción "o" que precede a los términos "por el propio hijo" y "por cualquiera de los parientes".

En el artículo 297, en lugar de "constituirse cesionario" debe decir "constituirse en cesionarios", y en lugar de "construir derechos reales", "constituir derechos reales".

Sr. Presidente (Pugliese). — Está en consideración nuevamente el texto propuesto en sustitución del artículo 272 del Código Civil, con la corrección indicada por el señor miembro informante.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Está en consideración nuevamente el texto propuesto en sustitución del artículo 297 del Código Civil, con las correcciones indicadas por el señor miembro informante.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda aprobado en su totalidad el artículo 5º del proyecto.

Sr. Arbolaza. — Pido la palabra para formular una moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arabolaza. — Señor presidente: solicito se reconsidere el artículo 7º del proyecto, y voy a fundamentar los motivos que me llevan a hacerlo.

Asignar la responsabilidad de los daños causados por los hijos menores solamente a uno de los padres —aquel con el que conviven— es contradictorio con el principio sustentado por la comisión.

Me refiero concretamente a la situación prevista en el artículo 1.114 del Código Civil. Considero que debería quedar establecido exclusivamente que el padre y la madre son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos menores. No es posible que aunque no tenga la tenencia de un hijo excusemos a un padre de la responsabilidad que tiene por los daños producidos por un menor. Ello resulta incongruente con el contexto en que estuvo trabajando la comisión. Sobre este particular opino que la responsabilidad debe ser de ambos padres, por lo que no puede quedar adjudicada sólo a quien tiene la tenencia del hijo.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración la moción formulada por el señor diputado por Buenos Aires, en el sentido de reconsiderar el artículo 7º al solo efecto de tratar una propuesta de nueva redacción del artículo 1.114 del Código Civil.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Voy a apoyar el pedido del señor diputado Arabolaza, porque entiendo que la responsabilidad debe ser solidaria.

Si se ha sostenido la necesidad del ejercicio de la patria potestad conjunta en los casos de los cinco puntos del artículo 264 bis, me parece que también, ante una responsabilidad por actos ilícitos del menor, deben concurrir ambos cónyuges. Puede ocurrir que uno de ellos tenga la tenencia y la patria potestad, pero el otro podría haber incurrido en culpa *in educando* o *in vigilando*. Concretamente, luego de la frase "...al cuidado del otro progenitor", deberíamos agregar "o cuando se demostrara que éste ha incumplido un deber de colaborar con la educación de menor". Esto sería congruente con lo legislado hasta ahora.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la moción del señor diputado por Buenos Aires, de reconsideración del artículo 7º, a efectos de proponer una modificación al texto que sustituye al artículo 1.114 del Código Civil.

—Resultado afirmativa

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde considerar nuevamente el texto aprobado en sustitución del artículo 1.114 del Código Civil, incluido en el artículo 7º del proyecto.

Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Gómez Miranda. — Señor presidente: en su primera parte el artículo dice: "El padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años". En este caso no hay ningún problema. Pero continúa: "En caso de que los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor".

A esto me refería yo cuando decía que con los derechos venían también las responsabilidades. Cuando damos la tenencia y el ejercicio de la patria potestad a uno de los cónyuges, tiene también la obligación de vigilar al niño y todos los deberes correspondientes. El otro cónyuge tiene obligación de vigilar, pero no a efectos de evitar un hecho dañoso. Si un niño de más de diez años rompe algo con una piedra, será responsable quien ejerza la patria potestad. Y esta responsabilidad se adquiere con los derechos a la patria potestad. Si exigimos la autoridad de padres, debemos tener la responsabilidad de ellos.

Por eso creo que no debemos reformar este artículo y sí mantener la redacción de la comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Es opinión de la comisión, señora diputada?

Sra. Gómez Miranda. — La comisión lo resolvió así y no se ha reunido para modificar ese criterio.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Señor presidente: en esta oportunidad no hablo en mi carácter de miembro informante del dictamen de la mayoría de la Comisión de Legislación General, sino a título particular.

Creo que ésta es la primera vez que voy a disentir con la diputada Gómez Miranda. A pesar de que no tenía pensado hacerlo, habiendo surgido un debate en torno a la modificación propuesta en este proyecto al artículo 1.114 del Código Civil, siento la obligación de fundamentar mi opinión al respecto.

A lo largo de todo el debate en general he manifestado que la responsabilidad no descansa en este caso en uno de los padres, sino que es solidaria en función del hijo. El artículo 1.114

atiende a la culpa *in vigilando* y no atiende, evidentemente, a la culpa *in educando*. El planteo, entonces, es que el padre también tiene la responsabilidad de la educación del menor, aunque no tenga la tenencia, y como consecuencia de ello es responsable no sólo por aquellos hechos derivados de la falta de vigilancia del menor sino por los que son generados por su mala educación. Cuando el matrimonio es desavenido hay una serie de elementos que, de alguna manera, permiten al menor incurrir en circunstancias contrarias al orden público, a las buenas costumbres, etcétera.

En estos casos sostengo que el responsable no es solamente —como plantea el dictamen de mayoría— el progenitor que tiene la tenencia y el cuidado del menor, sino también aquel otro que debería colaborar y ser solidario en la educación del menor. Por ello voy a mantener mis reservas con respecto a la aprobación de este artículo, ya que entiendo que no responde en forma coherente a la filosofía que anima los fundamentos del proyecto.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Cuál es la modificación que se ha solicitado, señor diputado?

Sr. Terrile. — Hace pocos momentos, la diputada Guzmán me proporcionó un texto alternativo, que es el que voy a leer: "El padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años. En caso de que los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor y que se demostrara que éste ha incumplido un deber de colaborar con la educación del menor".

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — El tema que estamos analizando en este momento es uno de los más difíciles del derecho civil. Creo que de las tres alternativas propuestas, la más completa y coherente es la que expuso en un primer momento el diputado Arabolaza. Coincido con el objetivo que propicia el diputado Terrile en cuanto a los alcances de este artículo, pero está bien en claro que acá no estamos hablando de un régimen de responsabilidad por culpa sino de una imputación de tipo objetivo de responsabilidad, lo cual hace presumir que el fundamento de la misma está en la falta a la garantía de guardar o al deber de vigilar; pero esto no surge del texto de la ley. Por lo tanto, el elemento que atribuye responsabilidad es la ley misma con su carácter objetivo de imputación de responsabilidad.

Estimo que la trascendencia del tema hace necesario que se den a conocer los tres textos alternativos propuestos para este artículo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Señor presidente: aquí debemos contemplar la relación entre los esposos y los hijos y no la situación de los esposos y de los hijos con los terceros, respecto de los cuales rige el principio *res inter alios acta*. Aquí también juega la parte pertinente de los actos ilícitos. ¿Cómo vamos a hacer responsable únicamente a la madre? Si la madre no tiene responsabilidad material, ¿el tercero que ha sido dañado por el menor queda sin reparación? Estamos confundiendo lo que atañe al padre, a la madre y al hijo con la relación con el tercero. Por eso considero mejor la redacción de la doctora Guzmán, aun cuando yo sería más expreso en el sentido de que esta situación no juega con respecto a los terceros.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Deseo formular una moción de pasar a un cuarto intermedio en las bancas por cinco minutos para uniformar los criterios expuestos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tal vez no resulte necesario, señor diputado.

Me asalta una duda respecto a que lo que se ha solicitado no está contemplado en la redacción. Por un lado, se dice que si el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor, la responsabilidad sería de este último, mientras que por el otro se agrega la necesidad de demostrar que no ha cumplido con su obligación de colaborar con la educación del menor. En consecuencia, deberían estudiarse los dos criterios para que exista coherencia.

Sr. García (C. E.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Considero que aquí también juega el artículo 1.116 en lo que respecta a los actos ilícitos.

Lo que ocurre es que los terceros no pueden ser perjudicados por esta cuestión. Aquí estamos legislando sobre una relación de familia; jamás sobre una relación con terceros, que es el caso de los actos ilícitos. Por eso solicito a la comisión que tenga en cuenta especialmente el artículo 1.116 y la naturaleza de la cuestión que estamos considerando.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: el artículo 1.114 está en el Código Civil dentro del título IX, que habla "de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos". Dicho artículo, el actual, no el reformado por la comisión, dice así: "El padre, y por su muerte, ausencia o incapacidad, la madre, son responsables de los daños causados por sus hijos menores que estén bajo su poder, y que habiten con ellos, sean hijos legítimos o naturales". Este texto nos remite al artículo 273, que no ha sido modificado por el despacho, que dice: "Los padres responden por los daños que causen sus hijos menores de diez años, que habiten con ellos".

La responsabilidad paterna se basa aquí en la circunstancia de que tales hechos fueron provocados sin discernimiento, conforme al artículo 921 del Código Civil. Por consiguiente, se da al padre la responsabilidad directa.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia quisiera tener un texto para someter a consideración, porque los fundamentos ya están dados.

En consecuencia, considero conveniente poner a votación la moción de orden del señor diputado Jaroslavsky de pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas a efectos de acordar la redacción del artículo, en base a las modificaciones que se proponen.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio, permaneciendo los señores diputados en sus respectivas bancas.

—Se pasa a cuarto intermedio.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa la sesión.

Sra. Guzmán. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pugliese). — Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: deseo rectificar un error que he cometido en cuanto a un artículo del Código Civil que afirmé que no había sido modificado. Se trata del artículo 273. En mi exposición dije que no había sido modificado; pero en el artículo 19 del proyecto que estamos considerando se propone su derogación.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arabolaza. — Señor presidente: propongo que el artículo 1.114 del Código Civil quede redactado de la siguiente manera: "El padre y la madre son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos menores". Es del entendimiento que si en un determinado momento uno de los padres no debe ser considerado responsable por los daños causados por el hijo menor podrá demostrarlo judicialmente. En tal caso la responsabilidad recaerá sobre el otro progenitor.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sra. Gómez Miranda. — La comisión insiste en el texto que figura en el dictamen de mayoría.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el texto propuesto en sustitución del artículo 1.114 del Código Civil, tal como consta en el dictamen de mayoría.

—Resulta afirmativa de 68 votos; votan 131 señores diputados.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 8º. Por Secretaría se enunciarán las disposiciones del Código Civil cuya sustitución se propone en este artículo.

Sr. Secretario (Bravo). — El artículo 8º del proyecto dispone sustituir los artículos 3.412, 3.545, 3.565, 3.567, 3.570, 3.571, 3.572, 3.576, 3.585 del Código Civil.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 3.412 del Código Civil.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 3.545 del Código Civil.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 3.565 del Código Civil.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Por un error no se ha incluido en el dictamen impreso del texto propuesto en sustitución del artículo 3.567 del Código Civil.

Por Secretaría se dará lectura de dicho texto.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así: "A falta de hijos y descendientes heredan los ascendientes, sin perjuicio de los derechos declarados en este título al cónyuge sobreviviente".

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración.

Si no se formulan observaciones, se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 3.570 del Código Civil.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 3.571 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Deseo aclarar que donde dice "heredará éste y la mitad", debe decir "heredará éste la mitad".

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el texto en consideración con la corrección indicada por el señor miembro informante.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 3.572 del Código Civil.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 3.576 del Código Civil.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 3.585 del Código Civil.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda aprobado el artículo 8º del proyecto.

En consideración el artículo 9º.

Por Secretaría se enunciarán las disposiciones del Código Civil cuya sustitución se propone por el artículo 9º del proyecto.

Sr. Secretario (Bravo). — El artículo 9º del proyecto dispone sustituir la denominación del capítulo I, título IX, sección I del libro IV del Código Civil.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — Señor presidente: a efectos de perfeccionar la redacción del artículo 9º, propongo en nombre de la comisión que en la parte pertinente exprese: "Sustitúyese la denominación del capítulo I, título IX, sección I del libro IV del Código Civil, por la siguiente:".

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 9º con la modificación propuesta por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 10.

Por Secretaría se enunciarán las disposiciones del Código Civil cuya sustitución se propone por el artículo 10 del proyecto.

Sr. Secretario (Bravo). — El artículo 10 del proyecto dispone sustituir los artículos 3.593 y 3.594 del Código Civil.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 3.593 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — La Comisión de Legislación General propone la siguiente redacción en sustitución del artículo 3.593 del Código Civil: "La porción legítima de los hijos es cuatro quintos de todos los bienes existentes a la muerte del testador, de los que éste hubiera donado a terceros y de los que deban colacionarse a la masa de la herencia, observándose en su distribución lo dispuesto en el artículo 3.570".

Es decir, señor presidente, que sustituimos la conjunción "y" por una coma después del término "testador", inmediatamente agregamos "de los que éste hubiera donado a terceros", y finalmente "y de los que deban colacionarse a la masa de la herencia".

Sr. Presidente (Pugliese). — Por Secretaría se leerá nuevamente el texto modificado que se propone en sustitución del artículo 3.593.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así: "La porción legítima de los hijos es cuatro quintos de todos los bienes existentes a la muerte del testador, de los que éste hubiera donado a terceros y de los que deban colacionarse a la masa de la herencia, observándose en su distribución lo dispuesto en el artículo 3.570".

Sr. García (C. E.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — ¿Y de los que hubiera donado a parientes que entran en la sucesión como herederos forzosos? Los herederos forzosos no son terceros. También queda comprendido lo que se hubiera donado a esos herederos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Aquí se están enumerando bienes, no herederos.

Sr. García (C. E.). — Se está hablando de la porción legítima que, sabemos, no puede afectarse, pero aquí se excluye exclusivamente a los bienes donados a terceros. ¿Y los que se hubieran donado antes a los herederos forzosos?

Sr. Presidente (Pugliese). — En ese caso rigen las disposiciones en materia de colación.

Se va a votar el texto que se propone en sustitución del artículo 3.593 del Código Civil con la modificación presentada por el señor miembro informante.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el texto propuesto en sustitución del artículo 3.594 del Código Civil.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — En nombre de la comisión propongo que el artículo 3.594 se modifique en forma análoga al artículo 3.593, de modo que exprese: "La legítima de los ascendientes es de dos tercios de los bienes de la sucesión, de los que deban colacionarse a la masa de la herencia y de los donados a terceros, observándose en su distribución lo dispuesto por el artículo 3.571".

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el texto propuesto por el señor diputado Terrile, en nombre de la comisión, en sustitución del artículo 3.594 del Código Civil.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda aprobado el artículo 10.

En consideración el artículo 11.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — En nombre de la comisión, propongo que el encabezamiento del artículo 11 que figura en el dictamen de mayoría sea sustituido por el siguiente: "Incorpórase como artículo 3.296 bis del Código Civil, el siguiente:". Asimismo, aclaro que la coma que precede a los términos "no le haya prestado alimentos" figura por error, y en consecuencia debe suprimirse.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 11 del proyecto con las correcciones indicadas por el señor miembro informante.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 12 a 14.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 15.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — El texto propuesto en sustitución del artículo 2º de la ley 18.248 dice que el nombre de pila se adquiere por la inscripción "en el acta de matrimonio"; en nombre de la comisión, propongo que diga "en el acta de nacimiento". Aclaro asimismo que inmediatamente después de los términos "corresponde a los padres" debe figurar un punto y coma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 15 con la modificación propuesta por el señor miembro informante.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 16 a 18.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 19.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arabolaza. — La derogación del artículo 95 de la ley 2.393 no ha sido incluida. Ese artículo dice: "La viuda que teniendo bajo su potestad hijos menores de edad, contrajese matrimonio, debe pedir al juez que les nombre tutor". Teniendo en cuenta lo que ya hemos votado, donde se han realizado modificaciones, esta norma quedaría sin efecto, razón por la cual propongo su derogación.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Gómez Miranda. — El artículo 95 de la ley 2.393 prácticamente quedó derogado con la promulgación de la ley de derechos civiles de la mujer. Como si eso fuera poco, la ley 17.711 establece que la mujer mayor de edad tiene plena capacidad civil, de modo que esa norma ha caído en desuso. No aceptamos la modificación propuesta por considerarla innecesaria.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 19 propuesto por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 20.

Si no hay observaciones, se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 21.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Terrile. — En nombre de la comisión, propongo que en lugar de "Siempre que en el Código Civil o en las leyes anteriores...", el artículo en consideración comience expresando: "Siempre que en el Código Civil, leyes complementarias u otras disposiciones legales...". El resto del artículo quedaría tal como figura en el dictamen.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 21 con la modificación propuesta por el señor miembro informante.

—Resulta afirmativa.

—El artículo 22 es de forma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Honorable Senado.

Habiéndose cumplido el objeto para el que fue convocada la Honorable Cámara, queda levantada la sesión especial.

—Es la hora 23.

LORENZO D. CEDROLA.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

6

APENDICE

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sustitúyense los artículos 77, 131 y 149 del Código Civil por los siguientes:

Artículo 77. — El máximo de tiempo del embarazo se presume que es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento. Esta presunción admite prueba en contrario.

Artículo 131. — Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas en el artículo 134.

Si se hubieren casado sin autorización no tendrán, hasta los veintidós años, la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores, salvo ulterior habilitación.

Los menores que hubieren cumplido 18 años podrán emanciparse por habilitación de edad con su consentimiento y mediante decisión de quienes ejerzan sobre ellos la autoridad de los padres. Si se encontraran bajo tutela, podrá el juez habilitarlos a pedido del tutor o del menor, previa sumaria información sobre la aptitud de éste. La habilitación por los padres se otorgará por instrumento público que deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Tratándose de la habilitación judicial bastará la inscripción de la sentencia en el citado registro.

La habilitación podrá revocarse judicialmente cuando los actos del menor demuestren su inconveniencia, a pedido de los padres, de quien ejercía la tutela al tiempo de acordarla o del Ministerio Pupilar.

Artículo 149. — Si el denunciado como demente fuere menor de edad, su padre o su madre o su tutor ejercerán las funciones del curador provisorio.

Art. 2º — Sustitúyese el título II de la sección II, del libro I del Código Civil (artículos 240 al 263) por las siguientes disposiciones:

TITULO II

De la filiación

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 240. — La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial.

La filiación matrimonial y la extramatrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este código.

Artículo 241. — El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas expedirá únicamente certificados de nacimiento que sean redactados en forma que no resulte de ellos si la persona ha sido o no concebida durante el matrimonio o ha sido adoptada plenamente.

CAPÍTULO II

Determinación de la maternidad

Artículo 242. — La maternidad quedará establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción deberá realizarse a petición de quien presente un certificado del médico u obstétrica que haya atendido el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del hijo. En caso de manifiesta pobreza o marginalidad, el oficial público podrá aceptar la prueba testimonial de dos vecinos que hayan tenido conocimiento del embarazo y del parto. La inscripción deberá serle notificada a la madre en forma personal y auténtica, salvo su reconocimiento expreso o que quien hubiese denunciado el nacimiento fuere el marido.

CAPÍTULO III

Determinación de la paternidad matrimonial

Artículo 243. — Se presumen hijos del marido, los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución, anulación, divorcio o a la separación de hecho de los esposos. No se presume la paternidad del marido, con respecto al hijo que naciere después de los trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio o de nulidad del matrimonio, salvo prueba en contrario.

Artículo 244. — Si mediaren matrimonios sucesivos de la madre se presume que el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y dentro de los ciento ochenta días de la celebración del segundo, tiene por padre al primer marido; y que el nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días de la celebración del segundo tiene por padre al segundo marido.

Las presunciones establecidas en este artículo admiten prueba en contrario.

Artículo 245. — En cualquier caso, el nacido será inscrito como hijo de los cónyuges si concurriere el consentimiento de ambos.

CAPÍTULO IV

Determinación y prueba de la filiación matrimonial

Artículo 246. — La filiación matrimonial queda determinada legalmente y se prueba:

- 1º Por la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba del matrimonio de los padres, de conformidad con las disposiciones legales respectivas.
- 2º Por sentencia firme en juicio de filiación.

CAPÍTULO V

Determinación de la paternidad extramatrimonial

Artículo 247. — La paternidad extramatrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal.

CAPÍTULO VI

Del reconocimiento de la filiación

Artículo 248. — El reconocimiento del hijo resultará:

- 1º De la declaración formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente.
- 2º De una declaración realizada en instrumento público o privado debidamente reconocido.
- 3º De las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectuara en forma incidental.

Lo prescripto en el presente capítulo es aplicable a la madre cuando no hubiera tenido lugar la inscripción prevista en el artículo 242.

Artículo 249. — El reconocimiento efectuado es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo.

El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama.

Artículo 250. — En el acto de reconocimiento, es prohibido declarar el nombre de la persona con quien se tuvo el hijo, a menos que esa persona lo haya reconocido ya o lo haga en el mismo acto.

No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer al hijo deberá previa o simultáneamente ejercer la acción de impugnación de la filiación establecida.

CAPÍTULO VII

*Las acciones de filiación**Disposiciones generales*

Artículo 251. — El derecho de reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están sujetos a prescripción.

Artículo 252. — Si la reclamación de filiación importa dejar sin efecto una filiación anteriormente establecida, deberá previa o simultáneamente ejercerse la acción de impugnación de esta última.

Artículo 253. — En las acciones de filiación se admitirán toda clase de pruebas, incluso las biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte. La negativa a someterse a pruebas biológicas será una presunción que admite prueba en contrario.

CAPÍTULO VIII

Acciones de reclamación de estado

Artículo 254. — Los hijos pueden reclamar su filiación matrimonial contra sus padres si ello no resultare de las inscripciones en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. En este caso la acción deberá entablarse conjuntamente contra el padre y la madre. Los hijos pueden también reclamar su filiación extramatrimonial contra quien consideren su padre o su madre. En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá contra sus sucesores universales.

Estas acciones podrán ser promovidas por el hijo en todo tiempo.

Sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz. Si el hijo falleciere antes de transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o la plena capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dichos plazos.

Artículo 255. — En todos los casos en que un menor aparezca inscrito como hijo de padre desconocido, el Registro Civil efectuará la comunicación al Ministerio Público de Menores, quien deberá procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. En su defecto podrá promover la acción judicial correspondiente si media conformidad expresa de la madre para hacerlo.

Artículo 256. — La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tendrá el mismo valor que el reconocimiento expreso, siempre que no fuere desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico.

Artículo 257. — El concubinato de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción hará presumir su paternidad, salvo prueba en contrario.

CAPÍTULO IX

Acciones de impugnación de estado

Artículo 258. — El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, anulación, divorcio o separación de hecho, alegando que él no puede ser el padre o que la paternidad presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida en razón de pruebas que la contradicen. Para acreditar esa circunstancia podrá valerse de todo medio de prueba, pero no será suficiente la sola declaración de la madre.

Aun antes del nacimiento del hijo, el marido o sus herederos podrán impugnar preventivamente la paternidad del hijo por nacer. En tal caso la inscripción del nacimiento posterior no hará presumir la paternidad del marido de la madre sino en caso de que la acción fuese rechazada.

Artículo 259. — La acción de impugnación de la paternidad del marido podrá ser ejercida por éste, y por el hijo. La acción del marido caduca si transcorre un año desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo. El hijo podrá iniciar la acción en cualquier tiempo.

En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso, la acción caducará para ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a correr en vida del marido.

Artículo 260. — El marido podrá negar judicialmente la paternidad del hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio. Si se probare que el marido tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de su casamiento o si, luego del nacimiento, reconoció como suyo expresa o tácitamente al hijo o consistió en que se le diera su apellido en la partida de nacimiento, la negación será desestimada. Quedará a salvo, en todo caso, la acción de impugnación de la paternidad que autoriza el artículo 258. Para la negación de la paternidad del marido rige el término de caducidad de un año.

Artículo 261. — La maternidad puede ser impugnada por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo.

Artículo 262. — La maternidad podrá ser impugnada en todo tiempo por el marido o sus herederos, por el hijo y por todo tercero que invoque un interés legítimo. La mujer podrá ejercer la acción cuando alegue sustitución o incertidumbre acerca de la identidad del hijo.

Artículo 263. — El reconocimiento que hagan los padres de los hijos concebidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los que tengan interés en hacerlo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados podrán ejercer la acción dentro de los dos años de haber conocido el acto de reconocimiento.

Art. 3º — Sustitúyese la denominación del título III de la sección II, del libro primero del Código Civil, por la siguiente:

TÍTULO III

De la autoridad de los padres

Art. 4º — Sustitúyese el artículo 264 por los siguientes:

Artículo 264. — La autoridad de los padres o patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las per-

sonas y los bienes de sus hijos, para su protección y formación integral, que se ejercerá siempre en beneficio de éstos, desde su concepción y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.

Ambos progenitores son titulares del ejercicio de la autoridad y se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuentan con el consentimiento del otro, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 264 bis o cuando mediere oposición expresa.

Cuando los progenitores no convivan, el ejercicio de la autoridad corresponderá al padre o madre que ejerza la tenencia, sin perjuicio del deber del otro de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación, salud y condiciones de vida. Sin embargo, se requerirá el consentimiento de ambos padres para los actos previstos en el artículo 264 bis. Si el progenitor que no ejerce la tenencia dedujera oposición a algún acto que ha dispuesto el otro en el ejercicio de la autoridad, resolverá el juez, como se establece en el primer párrafo del artículo 264 bis.

Artículo 264 bis. — En caso de disenso, oídos los padres y el menor adulto, resolverá el juez sumariamente atendiendo a los intereses del hijo y a la unidad familiar, por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Si los desacuerdos fueren reiterados o concurriere cualquier otra causa que entorpeciere gravemente el ejercicio de la autoridad de los padres, el juez sumariamente podrá atribuirle a uno de los progenitores por el plazo que fije, el que no podrá exceder de dos años.

El acuerdo expreso de ambos progenitores será necesario para los siguientes actos:

1. Autorización para contraer matrimonio.
2. Emancipación por habilitación de edad y su revocación.
3. Salida del territorio nacional.
4. Autorización para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad, si fueran menores de dieciocho años.
5. Disposición de los bienes inmuebles, muebles y derechos registrables del menor.

En todos estos casos, si uno de los padres no diera su consentimiento, o mediere imposibilidad para traerlo, resolverá el juez lo que convenga al interés del menor y a la unidad familiar. Si mediere imposibilidad de hecho ostensible y excepcional para obtener el consentimiento de uno de los progenitores, acreditada por información sumaria ante el juez del lugar, será suficiente la autorización de quien tiene consigo al hijo.

Artículo 264 ter. — Los derechos inherentes a la autoridad de los padres no corresponden al progenitor que no haya reconocido voluntariamente al hijo, pero aquél queda sujeto a la prestación alimentaria y demás obligaciones derivadas de dicha autoridad.

En caso de muerte de uno de los progenitores, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la autoridad de los padres o suspensión de su ejercicio, corresponde al otro ejercerla en forma exclusiva. Cuando ambos progenitores sean incapaces o estén privados de la autoridad o suspendidos en su ejercicio, los hijos menores quedarán sujetos a tutela. Si los padres de un hijo fueren menores no emancipados, se preferirá a quien ejerza la autoridad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, subsistiendo en tal caso esa tutela aun cuando el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad, salvo que a petición de éste el juez le discierna el ejercicio de la autoridad.

Art. 5º — Sustitúyense los artículos 265, 266, 267, 269, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 293, 294, 295, 297, 298, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 367, 368 y 373 por los siguientes:

Artículo 265. — Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen éstos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino con los suyos propios.

Artículo 266. — Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados están obligados a cuidarlos en su ancianidad y en estado de demencia o enfermedad y a proveer a sus necesidades, en todas las circunstancias de la vida en que les sean indispensables sus auxilios.

Tienen derecho a los mismos cuidados y auxilio los demás ascendientes.

Artículo 267. — La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.

Artículo 269. — Si el menor de edad se hallare en urgente necesidad, que no pudiese ser atendida por sus padres, los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos.

Artículo 271. — En caso de divorcio, separación de hecho o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimentos a sus hijos y educarlos, no obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos.

Artículo 272. — Si el padre o la madre faltaren a esta obligación, podrán ser demandados por la prestación de alimentos por el propio hijo si fuese adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera de los parientes, o por el ministerio de menores.

Artículo 274. — Los padres, sin intervención de sus hijos menores, pueden estar en juicio por ellos como actores o demandados. Los menores serán oídos si tuvieren más de 18 años.

También a nombre de sus hijos menores, los padres podrán celebrar cualquier contrato, en los límites de su administración, señalados en este código.

Artículo 275. — Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos les hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.

Tampoco pueden, antes de haber cumplido 18 años de edad ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres.

Artículo 276. — Si los hijos menores dejasen el hogar, o aquel en que sus padres los hubiesen puesto, sea que ellos se hubiesen sustraído a su obediencia, o que otros los retuvieran, los padres podrán exigir que las autoridades públicas les presten toda la asistencia que sea necesaria para hacerlos entrar bajo su autoridad. También podrán acusar criminalmente a los seductores o corruptores de sus hijos, y a las personas que los retuvieran.

Artículo 277. — Los padres pueden exigir que los hijos que están bajo su autoridad y cuidado les presten la colaboración propia de su edad, sin que ellos tengan derecho a reclamar pago o recompensa.

Artículo 278. — Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos menores. El poder de corrección debe ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los jueces deberán resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones pertinentes si correspondieren.

Artículo 282. — Si los padres o uno de ellos negaren su consentimiento al menor adulto para intentar una acción civil contra un tercero, el juez, con conocimiento de los motivos que para ello tuviera el oponente, podrá suplir la licencia, dando al hijo un tutor especial para el juicio.

Artículo 283. — Se presume que los menores adultos, si ejercieren algún empleo, profesión o industria, están autorizados por sus padres para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 131. Las obligaciones que de estos actos nacieren, recaerán únicamente sobre los bienes cuya administración y usufructo o sólo el usufructo, no tuvieran los padres.

Artículo 284. — Los menores adultos ausentes del hogar con autorización de los padres, o en un país extranjero, o en un lugar remoto dentro de la República, que tuviesen necesidad de recursos para su alimento u otras necesidades urgentes, podrán ser autorizados por el juez del lugar o por la representación diplomática de la República, según el caso, para contraer deudas que satisfagan las necesidades que padecieren.

Artículo 285. — Los menores no pueden demandar a sus padres sino por sus intereses propios, y previa autorización del juez, aun cuando tengan una industria separada o sean comerciantes.

Artículo 286. — El menor adulto no precisará la autorización de sus padres para estar en juicio, cuando sea demandado criminalmente, ni para reconocer hijos ni para testar.

Artículo 287. — El padre y la madre tienen el usufructo de los bienes de sus hijos matrimoniales, o de los extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, que estén bajo su autoridad, con excepción de los siguientes:

1. Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque vivan en casa de sus padres.
2. Los heredados por motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
3. Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador hubiera dispuesto que el usufructo corresponda al hijo.

Artículo 290. — Es implícita la cláusula de no tener los padres el usufructo de los bienes donados o dejados a los hijos menores, cuando esos bienes fuesen donados o dejados con indicación del empleo que deba hacerse de los respectivos frutos o rentas.

Artículo 293. — Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, con excepción de los siguientes:

1. Los que hereden con motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
2. Los adquiridos por herencia, legado o donación cuando hubieran sido donados o dejados por testamento bajo la condición de que los padres no los administren.

Artículo 294. — La administración de los bienes de los hijos será ejercida en común por los padres cuando ambos estén en ejercicio de la autoridad. Se presumirá que los actos realizados por uno cuentan con el consentimiento del otro, salvo oposición expresa.

Los padres podrán designar de común acuerdo a uno de ellos administrador de los bienes de los hijos, pero en ese caso el administrador necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de los bienes, cualquiera de los padres podrá requerir al juez competente que designe a uno de ellos administrador.

Artículo 295. — La condición que prive a los padres de administrar los bienes donados o dejados a los hijos, no los priva del derecho al usufructo.

Artículo 297. — Los padres no pueden, ni aún con autorización judicial, comprar por sí, ni por

interpuesta persona, bienes de sus hijos aunque sea en remate público, ni constituirse en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra sus hijos, a menos que las cesiones resulten de una subrogación legal, ni hacer partición privada con sus hijos de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con ellos coherederos o colegatarios, ni obligar a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros.

Necesitan autorización judicial para: enajenar los bienes registrables de sus hijos, las rentas que estén constituidas sobre la deuda nacional, constituir derechos reales sobre los bienes registrables, transferir derechos reales que pertenezcan a sus hijos sobre bienes de terceros y hacer remisión voluntaria de derechos de sus hijos.

Artículo 298. — Igualmente necesitan autorización judicial para enajenar ganados de cualquier clase que formen los establecimientos rurales, salvo aquellos cuya venta es permitida a los usufructuarios que tienen el usufructo de los rebaños.

Artículo 303. — Removido uno de los padres de la administración de los bienes, ésta corresponderá al otro; si ambos fueren removidos, el juez la encargará a un tutor especial, y éste entregará a los padres, por mitades, el sobrante de las rentas de los bienes, después de satisfechos los gastos de administración, y de alimentos y educación de los hijos.

Artículo 306. — La autoridad de los padres se acaba:

1. Por la muerte de los padres o de los hijos.
2. Por profesión de los padres, o de los hijos, con autorización de aquéllos, en institutos monásticos.
3. Por llegar los hijos a la mayor edad.
4. Por emancipación legal de los hijos, sin perjuicio de la subsistencia del derecho de administración de los bienes adquiridos a título gratuito, si el matrimonio se celebró sin autorización.
5. Por emancipación dativa de los hijos sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación o nulidad.
6. Por dar en adopción los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación o nulidad de la adopción.

Artículo 307. — El padre o la madre, o ambos, quedarán privados de la autoridad en los siguientes supuestos:

1. Por ser condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices de un delito doloso contra la persona o los bienes de sus hijos o de alguno de ellos, o como autores, instigadores o cómplices de un delito cometido por sus hijos en forma conjunta o individual.

2. Por la exposición o el abandono malicioso que hicieren de sus hijos o de alguno de ellos, aún cuando éstos quedaren bajo guarda o fueren recogidos por el otro progenitor o un tercero.

3. Por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica, o la moralidad de sus hijos, mediante malos tratos, ejemplos perniciosos, conducta notoria o delincuencia.

Artículo 308. — La privación de la autoridad de los padres podrá ser dejada sin efecto por el juez si los padres demostraron que, por circunstancias nuevas, la restitución se justifica en beneficio o interés de los hijos.

Artículo 309. — El ejercicio de la autoridad de los padres queda suspendido mientras dure la ausencia de los padres, judicialmente declarada conforme a los artículos 15 a 21 de la ley 14.394. También queda suspendido en caso de interdicción de alguno de los padres, o de inhabilitación según el artículo 152 bis, incisos 1 y 2, hasta que sea rehabilitado, y en los supuestos establecidos en el artículo 12 del Código Penal.

Podrá suspenderse el ejercicio de la autoridad en caso de que los hijos sean entregados por sus padres a un establecimiento de protección de menores. La suspensión será resuelta con audiencia de los padres, de acuerdo a las circunstancias del caso.

Artículo 310. — Perdida la autoridad por uno de los progenitores, o suspendido uno de ellos en su ejercicio, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, los menores quedarán bajo el patronato del Estado nacional o provincial.

Artículo 367. — Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden siguiente:

1. Los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados preferentemente los más próximos en grado, y a igualdad de grados los que estén en mejores condiciones para proporcionarlos.
2. Los hermanos y medio hermanos.

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca.

Artículo 368. — Entre los parientes por afinidad únicamente se deben alimentos aquellos que están vinculados en primer grado.

Artículo 373. — Cesa la obligación de prestar alimentos si los descendientes en relación a sus ascendientes, o los ascendientes en relación a sus descendientes, cometieren algún acto por el que puedan ser desheredados.

Art. 6º — Sustitúyese el capítulo III, sección II libro I, del Código Civil (artículos 389, 390 y 391) por las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO III

De la tutela legal

Artículo 389. — La tutela legal tiene lugar cuando los padres no han nombrado tutor a sus hijos o cuando los nombrados no entran a ejercer la tutela, o dejan de ser tutores.

Artículo 390. — La tutela legal corresponde únicamente a los abuelos, tíos, hermanos o medio hermanos del menor, sin distinción de sexos.

Artículo 391. — El juez confirmará o dará la tutela legal a la persona que por su solvencia y reputación fuese la más idónea para ejercerla, teniendo en cuenta los intereses del menor.

Art. 7º — Sustitúyense los artículos 392, 478 y 1.114 del Código Civil por los siguientes:

Artículo 392. — Los jueces darán tutela al menor que no la tenga asignada por sus padres y cuando no existan los parientes llamados a ejercer la tutela legal, o cuando, existiendo, no sean capaces o idóneos, o hayan hecho dimisión de la tutela o hubiesen sido removidos de ella.

Artículo 478. — El padre o la madre son curadores de sus hijos solteros o viudos que no tengan hijos mayores de edad, que puedan desempeñar la curaduría.

Artículo 1.114. — El padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años. En caso de que los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor.

Art. 8º — Sustitúyense los artículos 3.412, 3.545, 3.565, 3.567, 3.570, 3.571, 2.572, 3.576 y 3.585 del Código Civil por los siguientes:

Artículo 3.412. — Los otros parientes llamados por la ley a la sucesión no pueden tomar la posesión de la herencia, sin pedirla a los jueces y justificar su título a la sucesión.

Artículo 3.545. — Las sucesiones intestadas corresponden a los descendientes del difunto, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite, y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este Código. No habiendo sucesores, los bienes corresponden al Estado nacional o provincial.

Artículo 3.565. — Los hijos del autor de la sucesión lo heredan por derecho propio y en partes iguales, salvo los derechos que en este título se dan al viudo o viuda sobreviviente.

Artículo 3.567. — A falta de hijos y descendientes heredan los ascendientes, sin perjuicio de los derechos declarados en este título al cónyuge sobreviviente.

Artículo 3.570. — Si han quedado viudo o viuda e hijos, el cónyuge sobreviviente tendrá en la sucesión la misma parte que cada uno de los hijos.

Artículo 3.571. — Si han quedado ascendientes y cónyuge supérstite, heredarán éste la mitad de los bienes propios del causante y también la mitad de la parte de gananciales que corresponda al fallecido. La otra mitad la recibirán los ascendientes.

Artículo 3.572. — Si no han quedado descendientes ni ascendientes, los cónyuges se heredan recíprocamente, excluyendo a todos los parientes colaterales.

Artículo 3.576. — En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado a la sucesión en concurrencia con descendientes, no tendrá el cónyuge sobreviviente parte alguna en la división de bienes gananciales que correspondieran al cónyuge pre-fallecido.

Artículo 3.585. — No habiendo descendientes ni ascendientes, ni viudo o viuda, heredarán al difunto sus parientes colaterales más próximos hasta el cuarto grado inclusive, salvo el derecho de representación para concurrir los sobrinos con sus tíos. Los iguales en grado heredarán por partes iguales.

Art. 9º — Sustitúyese la denominación del capítulo I, título IX, sección I del libro IV del Código Civil, por la siguiente:

CAPÍTULO I

Sucesión de los descendientes

Art. 10. — Sustitúyense los artículos 3.593 y 3.594 del Código Civil por los siguientes:

Artículo 3.593. — La porción legítima de los hijos es cuatro quintos de todos los bienes existentes a la muerte del testador, de los que éste hubiera donado a terceros y de los que deban colacionarse a la masa de la herencia, observándose en su distribución lo dispuesto en el artículo 3.570.

Artículo 3.594. — La legítima de los ascendientes es de dos tercios de los bienes de la sucesión, de los que deban colacionarse a la masa de la herencia y de los donados a terceros, observándose en su distribución lo dispuesto por el artículo 3.571.

Art. 11. — Incorpórase como artículo 3.296 bis del Código Civil, el siguiente:

Artículo 3.296 bis. — Es indigno de suceder al hijo, el padre o la madre que no lo hubiere reconocido voluntariamente durante la menor edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición y fortuna.

Art. 12. — Sustitúyese el artículo 10 de la ley 2.393 por el siguiente:

Artículo 10. — La mujer mayor de catorce años y el hombre mayor de dieciséis años, pero menores de edad, no pueden casarse entre sí, ni con

otra persona, sin la autorización de sus padres o de aquel que ejerza la autoridad, o sin la de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerciere, o en su defecto, sin la del juez. Los sordomudos en las condiciones referidas, que no sepan darse a entender por escrito, necesitarán la autorización del curador o del juez.

Art. 13. — Sustitúyese el artículo 13 de la ley 10.903 por el siguiente:

Artículo 13. — La privación de la autoridad o la suspensión de su ejercicio, no importan liberar a los padres de las obligaciones impuestas por los artículos 265, 267 y 268 del Código Civil si no fueran indigentes.

Art. 14. — Sustitúyese el inciso 3º del artículo 19 de la ley 14.394 por el siguiente:

Artículo 19, inciso 3º. El padre o la madre.

Art. 15. — Sustitúyese el artículo 2º de la ley 18.248 por el siguiente:

Artículo 2º — El nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento. Su elección corresponde a los padres; a falta, impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro o a las personas a quienes los progenitores hubiesen dado su autorización para tal fin. En defecto de todo ello pueden hacerlo los guardadores, el Ministerio Público de Menores o los funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Cuando una persona hubiese usado un nombre con anterioridad a su inscripción en el Registro, se anotará con él siempre que se ajuste a lo prescrito en el artículo 3º.

Art. 16. — Sustitúyese el párrafo 2º del artículo 2º de la ley 19.134 por el siguiente:

Artículo 2º, párrafo 2º: el adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado, salvo cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto.

Art. 17. — Sustitúyese el artículo 6º de la ley 19.134 por el siguiente:

Artículo 6º — El adoptante deberá haber tenido al menor bajo su guarda durante un año. Esta

condición no se requiere cuando adopta al hijo o hijos de su cónyuge.

Art. 18. — Sustitúyense los artículos 11, inciso 1º y 12 del Código de Comercio por los siguientes:

Artículo 11, inciso 1º — Conteniendo autorización expresa del padre y de la madre.

Artículo 12. — El hijo mayor de dieciocho años, que fuese asociado al comercio del padre o de la madre, o de ambos, será reputado autorizado y mayor para todos los efectos legales en las negociaciones mercantiles de la sociedad.

La autorización otorgada no puede ser retirada al menor sino por el juez, a instancia del padre, de la madre, del tutor o ministerio pupilar, según el caso y previo conocimiento de causa. Este retiro, para surtir efecto contra terceros que no lo conocieren, deberá ser inscrito y publicado en el Tribunal de Comercio respectivo.

Art. 19. — Deróganse las siguientes disposiciones del Código Civil:

Artículos 273, 281, 289, 305, 311 al 344 (título IV y V de la sección II del libro I), 357, 358, 359, 365, 366, 369, 394 al 396, 402 (capítulo V, título VII, sección II, libro I), 3.577 al 3.584 (capítulos IV y V, título IX, sección I, libro IV), 3.596, 3.597, 4.029, 4.042 y 4.043.

Art. 20. — Derógase la ley 14.367.

Art. 21. — Siempre que en el Código Civil, leyes complementarias u otras disposiciones legales se alude a los hijos naturales, extramatrimoniales o ilegítimos en contraposición o para discriminar derechos o deberes respecto a los hijos legítimos, la situación de aquéllos deberá ser equiparada a la de éstos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 del Código Civil; y cuando en los mismos textos se alude al padre en ejercicio de la patria potestad, deberá entenderse que tal ejercicio corresponderá en lo sucesivo a los padres conjuntamente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 264 y siguientes del Código Civil.

Art. 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.